

**PROGRAMA DE LA MATERIA**

**Unidad N° 1**: Derecho Penal. Concepto. Principio de legalidad. Causas de Justificación, Prescripción. Participación Criminal, distintas teorías sobre la participación criminal, teoría sobre coautoría funcional o del dominio del hecho. Delitos relacionados con el ejercicio de la función policial: Homicidio Calificado. Homicidio culposo. Privación Ilegítima de la Libertad. Tortura. Apremios Ilegales. Vejaciones. Severidades. Allanamiento Ilegal. Revelación de hechos, actuaciones, documentos, y datos secretos. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario públicos. Violación de deberes de oficio. Denegación de auxilio. Favorecimiento de evasión. Falsificación de documentos.

**Unidad N° 2**: Proceso Penal: Concepto. IMPUTADO: Concepto. Derechos y garantías. Dº de Defensa en Juicio. Defensa material y técnica. Declaración de Imputado. Evacuación de citas y proposición de diligencias. Situación del imputado. Principio de libertad. Casos en que procede la detención. ETAPAS DE PROCESO PENAL: 1.-Investigación penal preparatoria: Averiguación Preliminar. Decisiones que puede adoptar el Fiscal. Decreto de citación a Audiencia de Imputación. Actividad probatoria en I.P.P. Requerimiento de Juicio. Intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Rol del Juez de Garantía. Elevación de la causa a juicio. 2.- Juicio: Actos preliminares. Citación a Juicio. Ofrecimiento de Pruebas. Audiencia de Juicio: Iniciación. Apertura. Producción de pruebas. Delito de Falso Testimonio. Alegatos. Deliberación y Sentencia (Absolutoria y condenatoria).

**Unidad N° 3**: La Defensa Técnica del Personal Policial en causas relacionadas con el Servicio Policial. Antecedentes históricos y legales. Departamento Asistencia Letrada: misión, dependencia orgánica, funciones. División Defensa Técnica Capital – División Defensa Técnica Interior – División Asesoría Jurídica Preventiva: Funciones. Defensores policiales: identidad, teléfonos, ubicación física de la dependencia. Asistencia, voluntaria y gratuita, casos. Secreto profesional y reserva de la información. Oportunidad para solicitar la defensa técnica. Trámites internos para acceder al servicio. Intereses contrapuestos, prevaricato. Obligaciones de los abogados. Obligaciones de los imputados. Estrategia de la Defensa. Querellante particular. Demandas Civiles. Gastos extraordinarios. Finalización de la asistencia. Análisis de casos concretos.

**Unidad N° 4**: Temario: 1) Derechos Humanos y actuación policial: Derechos Humanos concepto, caracteres, clasificación, normativa constitucional. Principios básicos y valores de actuación, art. 10 Ley 7742/12. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Reglamento para el Uso de la Fuerza Pública. 2) Régimen Disciplinario Policial: Normas generales. Faltas. Sanciones. Forma de represión de las faltas: Sumario Administrativos. Derechos del investigado de pasar vista a las actuaciones. Situación del Personal Policial que se encuentra acusado por comisión de delito relacionado con el servicio: Iniciación de causa penal. Iniciación de Sumario Administrativo. Suspensión Preventiva. Intervención de Oficina de Asuntos Internos. Consecuencias de la Investigación Administrativa: a) Inhabilitación para consideración de Junta de Calificaciones y tratamiento condicional, b) Retiro obligatorio por antecedentes desfavorables. Derecho de defensa material y técnico en el procedimiento administrativo disciplinario. Recursos contra Resolución que impone sanción disciplinaria.

**UNIDAD I**:

Temario: Derecho Penal. Concepto. Principio de legalidad. Causas de Justificación, Prescripción. Participación Criminal, distintas teorías sobre la participación criminal, teoría sobre coautoría funcional o del dominio del hecho. Delitos relacionados con el ejercicio de la función policial: Homicidio Calificado. Homicidio culposo. Privación Ilegítima de la Libertad. Tortura. Apremios Ilegales. Vejaciones. Severidades. Allanamiento Ilegal. Revelación de hechos, actuaciones, documentos, y datos secretos. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario públicos. Violación de deberes de oficio. Denegación de auxilio. Favorecimiento de evasión. Falsificación de documentos.

**Derecho Penal – Concepto**

Es el conjunto de normas jurídicas que establece las conductas prohibidas (punibles) y sus consecuencias (pena o medida de seguridad).

Es la rama del derecho que define las conductas que son “delitos” y cual va a ser la pena que le corresponda a quien lo cometa o en caso de no serle reprochable, que medidas puede tomar el Estado con esta persona.

El Código Penal es una Ley Nacional, se aplica en todo el territorio de la República Argentina y es sancionado por el Congreso de la Nación, conforme facultad otorgada por la C. N. en el art. 75 inc. 12 (recordar que las facultades de la Nación siempre son expresas).

El derecho penal establece prohibiciones (acciones que de cometerse reciben sanción como ser matar, robar, hurtar, abusar sexualmente) y mandatos (acciones que uno obligatoriamente debe hacer y que si no ejecuta recibe sanción, como ser alimentar a los hijos, auxiliar a quien está en peligro de muerte).

El derecho penal regula la potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias. Estas no se agotan hoy en las penas, como sucedía en las leyes antiguas y en las legislaciones clásicas, cuyo único objetivo era el castigo del delincuente. Uno de los aportes fundamentales de la escuela positiva de derecho criminal, fue su valor como incentivo para ampliar los medios jurídicos utilizables por el Estado para luchar contra la delincuencia, agregando a las penas, las medidas de seguridad, también como un medio regulable por el legislador penal y cuya aplicación presupone la comisión de un delito y un debido proceso judicial.

**El derecho penal es derecho público:** Su fuente exclusiva es el Estado. Las reglas disciplinarias de los entes privados no son derecho penal. El derecho penal no regula las relaciones de los individuos entre sí, sino las de éstos con el Estado.

**El derecho penal:**

**1º) Es normativo:** no enuncia leyes de la necesidad natural o causal, sino leyes de lo que debe ser, que presuponen su incumplimiento; no es un medio para conocer la realidad social, sino para regularla;

**2º) Es valorativo**: se estructura por apreciaciones de valor social sobre lo punible y sus consecuencias eficaces y justas; y

**3º) Es finalista**: persigue la tranquilidad y la seguridad sociales mediante la protección de los individuos y de la sociedad.

En resumen; **el derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico, que regula la potestad del Estado de castigar las conductas que son tipificadas como punibles (delitos) y cuáles son sus consecuencias, que no se limitan a las penas sino también a las medidas de seguridad que se le puede imponer a la persona que comete un delito.**

**Principio de Legalidad**

El Principio de Legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al estado actual o al imperio de la ley.

Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. El principio se considera a veces como la "regla de oro" del derecho público, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias basadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley está generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal.

En el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, postura originariamente defendida por Cesare Beccaria.

Paul Johann Anselm Von Feuerbach estableció este principio en materia de derecho penal, basándose en la máxima nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado de manera previa por la ley.

La legalidad penal es entonces un límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito.

Los elementos que integran el principio de legalidad. Puede estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la legalidad desde el punto de vista formal y en su significado material:

La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular delitos y penas mediante una ley , no se pueden dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y por medio de leyes que han de ser orgánicas, en los casos en que se desarrollen derechos fundamentales y libertades públicas.

La legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias, que son:

Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia comporta cuatro consecuencias: La prohibición de la retroactividad de las leyes penales. Como regla general las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sean más favorables para el reo.

La prohibición de que el poder ejecutivo o la administración dicte normas penales.

La prohibición de la analogía en materia penal, es decir, generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida.

Reserva legal. Los delitos y sus penas deben ser creados por ley y solo puedan ser creados por esta, descartándose otros medios de formación de legislación penal, como podrían ser la costumbre o las resoluciones judiciales.

Funciona como una garantía individual que tiene la ley penal, donde **la persona no puede ser penada sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso**. Este principio se encuentra consagrado en el Artículo 18 de la Constitución Nacional **“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”.**

También en consonancia con el Artículo 19 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, mediante el articulo 75 inc. 22 de la C.N., en los artículos 9 de la C.A. y art. 9 del P.I.D.C.y P.

Implica la prohibición de la ley ex post facto, es decir que **no se puede aplicar una sanción penal cuando la ley fue dictada con posterioridad al hecho**, no admitiéndose que la costumbre, la jurisprudencia ni la doctrina puedan habilitar el poder punitivo del Estado. La legalidad penal se completa con el llamado Principio de Reserva, previsto en el Artículo 19 in fine de la C.N., que consagra que **“…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.**

Siguiendo a Zaffaroni, legalidad y reserva constituyen dos manifestaciones de la misma garantía de legalidad, que responde a un único requerimiento de racionalidad en el ejercicio del poder, emergente del principio republicano de gobierno.

Es dable destacar la existencia de relación entre el Principio de Irretroactividad y el Principio de Legalidad. Así el primero, es decir el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia. Como consecuencia necesaria del principio de legalidad, quedan eliminadas las llamadas leyes expost facto. **La garantía de legalidad (art. 18 CN) tiene el claro sentido (a) de impedir que alguien sea penado por un hecho que, al tiempo de su comisión, no era delito o no era punible o perseguible, y (b) de prohibir que a quien cometa un delito** **se le aplique una pena más gravosa que la legalmente prevista al tiempo de la comisión**. El Principio de Irretroactividad de la ley penal reconoce una importante excepción, que es el efecto retroactivo de la ley penal más benigna.

En consonancia con lo antes mencionado, tanto nuestro código penal como la Convención Americana de Derechos Humanos la aplicación del principio de irretroactividad solo en el caso de la ley penal más benigna para el reo. *“…Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida en dicha ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho (art. 2º del CP)*”.

**Causas de Justificación:**

El artículo 34 de nuestro código penal contempla distintos supuestos en los cuales el hecho cometido por el sujeto no será punible:

1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;

2º. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;

3º. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño;

4º. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;

5º. El que obrare en virtud de obediencia debida;

6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia;

7º. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

**ARTICULO 35.-** El que hubiere excedido los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

Estas causas de justificación de modo general la podemos agrupar en:

| **Exclusión de la culpabilidad** | Todas aquellas relacionadas con la incapacidad o aptitud del sujeto para ser culpable, quedando abarcadas dentro de este supuesto la inimputabilidad o incapacidad de culpabilidad en sentido estricto y el error de prohibición invencible (inc. 1°). Por ejemplo; un hecho cometido por un demente, o por un menor de edad. |
| --- | --- |
| **Exclusión de la acción** | Son aquellas en donde el autor del hecho por motivos externos (fuerza física irresistible y movimientos reflejos o involuntarios) o internos (estado de inconsciencia), actúa involuntariamente, desapareciendo el concepto de acción desde el punto de vista jurídico penal, y por ende, el delito (inc. 2°). Por ejemplo; cuando alguien empuja a otra persona y como consecuencia de ello, cae sobre una vidriera rompiéndola, no tuvo la intención de cometer el acto. |
| **Causas de justificación** | Son “permisos” otorgados por el legislador para cometer un hecho típico, ubicándose en esta esfera la **legítima defensa propia o de un tercero, el estado de necesidad, el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber**. En todos estos casos, el sujeto sabe lo que hace y actúa de acuerdo con ese conocimiento, pero el hecho típico es eximido de castigo al no ser reprochable puesto que, si bien **se produce el ataque a un bien jurídicamente protegido, dicho ataque se encuentra autorizado por el ordenamiento jurídico, excluyéndose de este modo la antijuridicidad**  (inc. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º). Este punto, se desarrolla más adelante. |

Desde que se acepta que en el sistema de derecho positivo la tipicidad del hecho no determina su antijuridicidad, sino que es un indicio de ella, se acepta también que en determinadas circunstancias, el derecho positivo no confirma ese indicio. Esas excepciones a la regla son las llamadas **causas de justificación o permisos concebidos para cometer, en detenidas circunstancias, un hecho penalmente típico.**

Esencialmente las causas de justificación obedecen al principio que; en el conflicto de dos bienes jurídicos, debe salvarse el preponderante para el derecho. Esa preponderancia debe extraerse teniéndose en cuenta el orden jerárquico de las leyes (art. 31 CN), mediante la interpretación coordinada de las reglas legales aplicables al caso extraída de la totalidad del derecho positivo.

La sola concurrencia de los elementos objetivos de una causa de justificación no es suficiente para excluir la antijuricidad. Se requiere también que el autor haya obrado con conocimiento de los elementos objetivos de la causa de justificación y para ejercitar el derecho de defensa, de necesidad, etc.

**Por ejemplo el que cree estar atacando a otro, aun cuando en realidad se encuentran inmerso en un estado de legítima defensa, o en el caso de legítima defensa de un tercero, no estaría amparado aquel que interviene impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo contra el agresor.**

**El ESTADO DE NECESIDAD:**

Esta causa de justificación se encuentra prevista en el Artículo 34 inc. 3° del Código Penal el cual establece que 3°. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño;

El estado de necesidad es aquel en que se encuentra el que causare un mal a un bien ajeno, por evitar otro mayor inminente a un bien propio o ajeno, al que ha sido extraño. Lo que determina la exclusión de la antijuricidad es, la necesidad de la lesión, unida a la menor significación del bien sacrificado respecto del salvado.

La base del estado de necesidad está dada por la colisión de bienes, es decir, por el peligro inminente de la pérdida de un bien jurídico y la posibilidad de su salvación lesionando otro bien jurídico y de menor valor relativo.

1. **Razón del principio**

La razón de la justificación reside en la preponderancia del bien jurídicamente más valioso que, en el caso, representa el mal menor.

El concepto del mal es el daño causado a un interés individual o social protegido jurídicamente (bien jurídico). El mal puede ser un bien individual, como la vida, la integridad física, la libertad, el honor, la propiedad, propios o ajenos, o pueden ser bienes de índole social como la salud o la seguridad pública o el orden constitucional y la seguridad de la nación.

**1-** Mal causado: debe tener naturaleza penal, puesto que de otra forma no tendría relevancia al objeto de estudio.

**2-** Mal evitado El bien salvado debe ser de mayor jerarquía que el sacrificado: de lo contrario, faltará el efecto justificante.

La determinación de la mayor jerarquía es problemática. En primer término, se formuló el principio de la ponderación de bienes, según el cual debía estarse a la comparación de la jerarquía de los bienes jurídicos en colisión (por ejemplo: vida y propiedad; propiedad e integridad corporal; honor y libertad, etc.) Contra este principio se sostiene que "limita la ponderación a bienes jurídicos considerados como si fueran una necesidad estática, aunque el conflicto que caracteriza un estado de necesidad está determinado por numerosos otros factores".

La comparación de bienes o intereses no autoriza, sin embargo, la realización de acciones que afecten bienes individuales como, por ejemplo, extraer un riñón a uno para trasplantarlo a otro a quien se le salva la vida. En este caso la vida salvada es de mayor jerarquía que la integridad corporal, pero el límite frente a los bienes individuales excluye la posible aplicación del estado de necesidad justificante.

Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, no puede invocar el estado de necesidad quien está obligado a soportar el peligro por su función social; ejemplo: un bombero no se puede amparar en el estado de necesidad para salvar un bien propio a costa de otro que desaparecería en el incendio; un policía no podría invocar el estado de necesidad porque su vida corre peligro en un combate, etc.

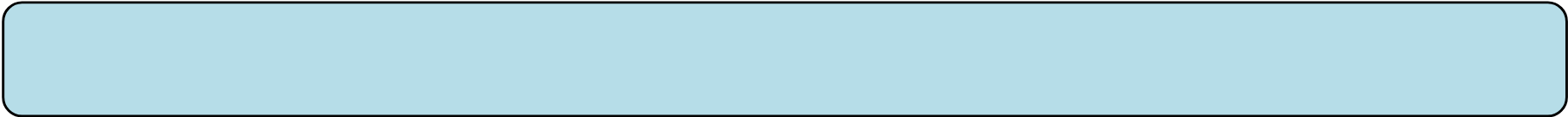
**3-** Mal mayor no interesa el origen del mal mayor que se intenta evitar, puede haberse causado por una persona o provenir de un hecho animal o natural.

1. **Inminencia**

La inminencia del mal mayor es la que determina la necesidad justificante. El mal es inminente si está por suceder prontamente, esto no sólo exige que el peligro de que se realice el mal sea efectivo, sino, también, que se presente como de realización inmediata. (ej. no basta para arrojar el cargamento al agua que se desencadene la tormenta, sino que esta ponga en peligro el buque)

1. **Extrañeza:**

El autor es extraño al mal mayor, si éste no es atribuible a su intención. Por ejemplo, no podría ampararse en la justificación, quien primero provoco una estampida de animales, y luego los mato –daño- a fin de evitar el daño que esa estampida podía provocar). Además de ello, el autor no debe estar jurídicamente obligado a soportarlo, puesto que en éste caso no puede alejar la justificación.



**La justificación del comportamiento requiere que la acción sea necesaria**.

La acción resulta necesaria cuando el medio empleado para hacer frente al conflicto es adecuado y el menos lesivo. Esto significa que no se pueda hacer frente de otro modo al peligro. En el estado de necesidad justificante debe buscarse toda ayuda que se pueda conseguir para hacer frente al peligro antes de atacar bienes jurídicos ajenos, pues en este caso, solo está en juego la eliminación de peligros y no el prevalecimiento del derecho.

**El medio empleado debe ser idóneo**

Es decir, se debe utilizar un medio adecuado para salvaguardar un bien jurídico protegido que corre el peligro inminente. Ese medio deber ser razonable y cuya utilización tenga oportunidades reales de preservar un interés más valioso.

No queda excluida la necesidad del medio por el solo hecho de que se pudiera haber solicitado el consentimiento de aquél cuyos bienes jurídicos se ven afectados. Carece de sentido hacer depender la justificación del pedido del consentimiento, porque aun cuando se lo denegara el comportamiento estaría justificado. Tampoco lo exige una consideración debida para con el titular del bien jurídico, debido a que si está de acuerdo carece de razón una consulta previa. No queda excluida la necesidad de la acción cuando se puede disponer de medios igualmente idóneos y se elige uno de ellos.

No siempre resulta sencillo determinar cuál es el bien de mayor jerarquía. Se había formulado el principio de la ponderación de bienes por el cual se debía estar a la comparación de la jerarquía de los bienes en colisión; por ejemplo, vida - integridad corporal; libertad – propiedad.

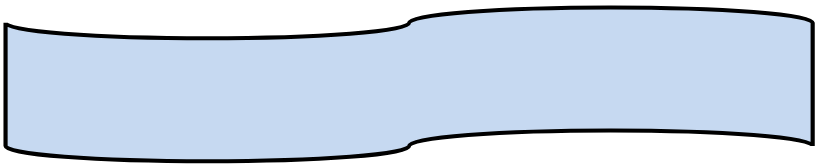


**ESTADO DE NECESIDAD: “El estado de necesidad es aquel en que se encuentra el que causare un mal a un bien ajeno, por evitar otro mayor inminente a un bien propio o ajeno, al que ha sido extraño”**

**LEGÍTIMA DEFENSA:**

Es un caso especial de estado de necesidad ( Art. 34 inc. 6 y 7 C.P.). Su justificación reside en la protección del bien del agredido respecto del interés por la protección del bien del agresor, lesionado por aquel o por un tercero que lo defiende.

**Aquí la justificación se fundamenta en la injusticia de la agresión del titular del bien jurídico que se lesiona**. La legítima defensa puede ser de la propia persona o de los derechos propios o de la persona de un tercero o sus derechos.

**Defensa Propia**

Actúa en defensa propia el que en defensa de su persona o de sus derechos, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente por su parte, le ocasiona un perjuicio a la persona o derechos del agresor.

**a-** **Bienes defendible**s: Además de la vida y la integridad física, todos los intereses que el derecho positivo le reconoce al individuo como bienes suyos en el más amplio sentido, sean personalísimos como su honor, su libertad, su honestidad, sean derechos patrimoniales o de familia.

**b- Presupuestos:**

**1- Agresión ilegítima (Código Penal, art. 34, 6º)**

La agresión es un ataque actual o inminente de una persona a la persona o derechos ajenos. Ese ataque existe cuando la conducta de una persona crea un peligro de menoscabo para la persona o derechos de otra. La agresión se evalúa de forma objetiva, sin consideración de la culpabilidad, motivo o fines del atacante (Ej. ataque de un inimputable)

Luego, **es ilegítima si el agresor ha obrado sin derecho**, puesto que puede suceder que el sujeto agresor pueda proceder de esa forma (Por ej. autoridad paternal o disciplinaria). La agresión debe haber partido de un ser humano. La defensa frente a animales, etc. no está regulada por la defensa necesaria, sino por el estado de necesidad. Por otra parte, la agresión puede tener lugar en forma activa (acción) o pasiva (omisión).

Los presupuestos de legítima defensa putativa, es el supuesto de la errónea creencia del autor de encontrarse ante las circunstancias objetivas que, de haber concurrido, hubieran justificado el hecho.

Estaremos ante un delito doloso, que no será culpable si el error sobre las circunstancias objetivas de la causa de justificación fue inevitable, pero será punible con la pena del delito doloso si era evitable, aunque en forma atenuada. Ejemplo: cuando quien ve aparecer a un encapuchado con un arma de fuego en una calle oscura, y comprueba que se dirige a él en forma amenazante, habrá obrado justificadamente si se defiende con su arma y le causa la muerte, aunque posteriormente se pruebe que era una broma preparada por un grupo de amigos y que la víctima sólo llevaba un revólver de juguete.

**2- Actualidad de la agresión**

La agresión es actual mientras se está desarrollando. La inminencia de la agresión, es decir, la decisión irrevocable del agresor de dar comienzo a la agresión, es equivalente a la actualidad.

**3- Racionalidad del medio empleado**

El medio defensivo, que no es el instrumento empleado, sino la conducta defensiva usada, es racionalmente necesario para impedir o repelar la agresión, si su empleo es oportuno y guarda proporción con la agresión. Es oportuno si se usa para impedir la agresión inminente o actual y es proporcionado con la agresión si con arreglo a las circunstancias y al valor de los bienes en juego, su uso implica un empleo adecuado de los elementos de la defensa de que se dispone en relación al ataque (**por ejemplo, la defensa de una manzana no autoriza a privar de la vida al que se apodera de ella para hurtarla**).

La defensa es necesaria si la acción del agredido es la menos dañosa de cuantas estaban a su disposición para rechazar la agresión en la situación concreta. La exigencia de que la necesidad sea racional se explica dentro de este marco: la necesidad de la acción de defensa es racional cuando esta es adecuada para impedir o repeler la agresión.

**Por ejemplo:** **A** tiene la posibilidad de impedir que **B** se apodere de una joya de su propiedad, golpeándolo con un paraguas que tiene a mano pero, sin embargo, dispara con un arma de fuego que lleva consigo: la acción no es necesaria, pues cabría realizar otra menos dañosa. En principio no es exigible al agredido que evite la agresión huyendo.

Las causas de justificación ponen a cargo del que quiere obrar amparado en ellas, el cargo de comportarse en la situación concreta como lo hubiera hecho una "persona razonable".

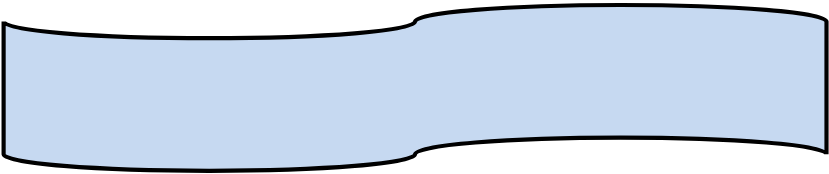
**4- Falta de provocación suficiente**

Ello remite a la exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con intención de defenderse.

El requisito puede estar ausente en base a dos criterios:

1. provocación desde el punto de vista objetivo, provoca la agresión incitando maliciosamente al tercero a agredirlo para así cobijarse en la justificación, y
2. desde el punto de vista subjetivo: pretexto de legítima defensa, es el que voluntariamente se coloca en situación de agredido (ej. el ladrón o el amante de la adultera, que sorprendidos son agredidos.

***DEFENSA PROPIA: “El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”.***

**Defensa de terceros** 

La defensa del tercero tiene el mismo fundamento que la defensa propia. Es decir, existe legítima defensa de la persona o derechos de otro, si éste es objeto de una agresión ilegítima del autor emplea un medio racionalmente necesario para impedirla o repelerla, siempre que el agredido no haya provocado suficientemente la agresión o, en caso contrario, que no haya participado en ella el tercero defensor (art. 34 inc. 7).

**Casos especiales de defensa o defensa privilegiada (art. 34 inc. 6, 2 y 3° CP).** En algunos casos se presume la existencia de las circunstancias de la legítima defensa, que son los supuestos de rechazo de escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o de su departamento habitado o de sus dependencias; y el que encuentra a un extraño dentro de su hogar, siempre que oponga resistencia.

En estos casos la ley presume (salvo prueba en contrario) que en el caso se dieron los supuestos de agresión ilegítima, esto es la falta de provocación suficiente y racionalidad del medio empleado que señala la ley.

**OTRAS FORMAS DE JUSTIFICACIÓN RECEPTADAS EN EL CODIGO PENAL:**

Los autores sistematizan los presupuestos del art. 34 inc. 4; separando por un lado, bajo el título “**cumplimiento de la ley” el cumplimiento de un deber y el ejercicio de autoridad o cargo**; y por el otro, el **ejercicio de un derecho**, que comprendería acciones que la ley no prohíbe.

1. **EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DEBER, AUTORIDAD O CARGO**:

Implica el ejercicio del propio poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo público (Ej. juez que ordena el desalojo, guardia que hiere a quien intenta escapar). El ejercicio del cargo debe ser legítimo, por una autoridad designada legalmente y actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, sin excesos.

Sólo entrará en consideración como causa de justificación en tanto colisione con otro deber y en este caso, la colisión se regirá por las reglas del estado de necesidad por colisión de derechos.

El cumplimiento de un deber no requiere en el sujeto activo autoridad o cargo alguno. Como caso de cumplimiento de un deber jurídico se señala entre otros, la obligación impuesta al testigo de decir la verdad de lo que supiere, aunque sus dichos lesionen el honor ajeno; la obligación de denunciar ciertas enfermedades impuesta por las leyes sanitarias a los que ejercen el arte de curar, aunque se revele un secreto profesional.

1. **EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO:**

La diferencia de ésta causal con el cumplimiento de una ley, es que en el ejercicio de un derecho se actúa en el ámbito de libertad, dentro de lo autorizado por el orden jurídico. Quien cumple la ley puede imponer a otro su derecho o exigirle su deber, cosa que no ocurrirá siempre en el ejercicio de un derecho, pues el límite de los derechos propios está fijado por los derechos de los demás. Así, por ejemplo, quien ejercita el derecho de retención en alguno de los casos previstos por el Código Civil, no podrá cometer el delito de retención indebida (art. 173, inciso 2 del Código Penal) aun cuando sea claro que se niega a restituir efectos que recibió a un título que produce obligación de devolver.

La justificante es conocida y denominada siempre por la doctrina con el adjetivo legítimo. El Código argentino la enuncia refiriéndose al que obrare **"en el legítimo ejercicio de su derecho"** (art. 34, inc. 4"). De esta exigencia resulta una doble limitación: a) de contenido, b) de forma. El desborde de esos límites da lugar a exceso o abuso del derecho, acciones ambas antijurídicas.

El exceso por razón del contenido tiene lugar cuando se lesiona un derecho de otro como consecuencia de actos que van más allá de lo autorizado o de lo que la necesidad del ejercicio requiere, de acuerdo con las circunstancias del caso. Así, por ejemplo, se excede en el contenido de su derecho quien ejerciendo el derecho de retención a que antes nos hemos referido, exige una suma mayor de la que se le debe en razón del depósito o sumas adeudadas por otros conceptos, pues desborda los límites fijados por el artículo 2587 del Código Civil, que autoriza a retener la cosa depositada hasta el pago que este le adeude en razón de la cosa.

1. **OBEDIENCIA DEBIDA:**

El cumplimiento de una orden dada de acuerdo a derecho dentro de una relación de servicio excluye la antijuricidad. Esto significa ante todo que no habrá defensa legítima contra el cumplimiento de una orden que no es antijurídica. Una parte de la teoría sostiene que a una orden dada dentro del marco de la competencia del superior jerárquico debe reconocerse una "presunción de juridicidad". Otro sector estima que una orden es adecuada a derecho inclusive cuando las condiciones jurídicas de su juridicidad no están dadas, pero el superior jerárquico las ha tenido erróneamente por existentes previa comprobación de acuerdo al deber.

Por lo tanto, desde el punto de vista del que debe soportar el cumplimiento de la orden siempre es posible la defensa necesaria. En general, se admite que hay ámbitos (por ejemplo el derecho militar) en el que el cumplimiento de una orden es obligatorio aunque aquella sea antijurídica. Esto no es, sin embargo, razón suficiente para otorgarle una justificación al que cumple la orden antijurídica obligatoria. Es preciso diferenciar: también en estos casos el cumplimiento de la orden es antijurídico y aquel sobre el que recae dicho cumplimiento tiene derecho de defensa necesaria contra la orden; el que cumple la "orden antijurídica obligatoria" tiene, de todos modos, una causa de inculpabilidad a su favor. En verdad, no hay "órdenes antijurídicas obligatorias", porque no puede haber en el Estado de derecho tal obligación. La desobediencia militar presupone una orden adecuada a derecho.

Al respecto nuestra Ley Orgánica Policial establece como uno de los principio básico y valor de actuación del personal policial el siguiente:

"**No acatará ni podrá invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancia especial o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad personal o de cualquier especie**". (Art. 10 inc. f) Ley 7742.

Esta norma nos indica claramente que no podemos acatar una orden ilegítima ni invocar una orden superior para justificar la comisión de delitos, con lo cual podemos decir que esta causal de justificación queda reducida únicamente para los casos en que la orden del superior es legítima, por lo que podemos decir que:

**“NO HAY ORDENES ANTIJURIDICAS OBLIGATORIAS "**

**PRESCRIPCIÓN:**

**La acción penal** se extingue por prescripción, es decir por el transcurso del tiempo previsto por la ley. Científicamente, la **prescripción se funda en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad: extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima, que es lo que constituye el fundamento político de la pena**.

Respecto a la prescripción de la Acción Penal el Código Penal establece:

**ARTICULO 62.-** La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;

3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

**ARTICULO 64.-** La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito. Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito. En ambos casos el imputado deberá abandonar en favor del estado, los objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la extinción de la acción penal en la causa anterior.*(Artículo sustituido por art. 6° de la*[*Ley Nº 24.316*](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=715)*B.O. 19/5/1994).*

**La prescripción también** **se SUSPENDE en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público**.

**La prescripción se INTERRUMPE solamente por**:

a) La comisión de otro delito;

b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;

c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;

d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente;

e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.  
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.*(Artículo sustituido por art. 2° de la*[*Ley N° 27.206*](http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=254759)*B.O. 10/11/2015)*

Así el artículo 67 prevé causales de interrupción y suspensión de la prescripción, vg., cuando son delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicios de las funciones, mientras tanto uno de ellos permanezca en la función. El código recepta *“La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso. La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público…”*

**PARTICIPACIÓN CRIMINAL:**

**Autor:** El artículo 45 de nuestro código penal, no se propone definir al autor del delito, sino a la coautoría o pluralidad de autores, pues es una regla cuyo objeto es la participación criminal. Empero, el artículo 45 permite deducir que autor es el que ejecuta el delito, vale decir, el que pone en obra la acción o la omisión definida por la ley. Cada tipo delictivo equivale a una forma de autoría.

El autor puede ejecutar por sí mismo el delito con sus manos o valiéndose de cualquier instrumento, denominándose autor directo.

**Autor Mediato**: No debe confundirse autoría mediata con coautoría. En la primera, hay un solo autor, a pesar de que en la trama delictiva intervienen dos individuos. Ello ocurre cuando uno de los intervinientes ejecuta materialmente el delito pero no lo hace sino como instrumento inculpable del otro interviniente que es el verdadero autor del delito (autor mediato). El otro, el autor material, es el instrumento humano con que, manejando la voluntad, opera el autor mediato.

La autoría mediata no puede darse en los delitos que sólo pueden perpetrarse personalmente por el autor (delitos de propia mano).

**Coautoría**: El artículo 45 del código penal, considera coautores del delito a los que toman parte en la ejecución del hecho. La coautoría supone la división de tareas en el ámbito de la ejecución del delito. Ese ámbito comprende todos los actos principales y accesorios que en el caso concreto integran la conducta consumativa del delito. La coautoría abarca a los que cometen actos típicamente consumativos y a quienes cumplen actos que ayudan o complementan dichos actos.

Así, es coautor no sólo el que se apodera de la cosa ajena, sino, tratándose de un robo, el que ejerce la violencia sobre la persona de la víctima; no sólo el que accede carnalmente a la víctima, sino, también, el que la sujeta para hacer posible la violación; no sólo el que efectuó el disparo contra la víctima, sino, igualmente, el que la agredió o apuñaleó; todos los que, sujetándola, apedreándola o propinándole un golpe de puño, se incorporaron a la labor agresiva contra la víctima; no sólo los que apuñalaron a la víctima, sino también los que la tuvieron o rodearon impidiendo o restringiendo su defensa o huida y los que ayudaron al actor principal en su tarea, alcanzándole el instrumento o estando presentes en el momento del hecho, instruyéndolo para que lo cometiera; no sólo quien firmó el panfleto injurioso, sino también los que fueron inspirando al que lo hizo.

Si se trata de un delito especializado por la calidad, estado, situación o ánimo que se exige en la persona para incurrir en él, únicamente son coautores los participantes que tienen esa calidad, y los que carecen de ella sólo son cómplices, ya que la complicidad no debe llenar las exigencias de la particular figura delictiva.

**TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO:**

La teoría del dominio del hecho fue enunciada en Alemania por Welzel en el año 1939 y aun predomina en la doctrina contemporánea. Conforme a ella el autor es el que domina el hecho, que retiene en sus manos el curso causal, que puede decidir sobre el sí y el cómo o, más brevemente dicho, la configuración central del acontecimiento. De varios concurrentes en un hecho, es autor el que actúa con una plenitud de poder tal que es comparable con la del autor individual.

La teoría del dominio del hecho presenta tres variantes a saber: la del dominio de la acción, la del dominio funcional del hecho o la del dominio de la voluntad.

La primera, es decir el dominio de la acción es el que tiene el autor que realiza el tipo de propia mano, sería el concepto de autor de la teoría formal-objetiva. El dominio funcional del hecho es la idea central de la co-autoría, cuando se presenta en la forma de una división de la tarea en la etapa ejecutiva y por último el dominio de la voluntad es la idea central de la autoría mediata, y es el que tiene lugar cuando se domina la voluntad de otro, sea por necesidad, sea por error.

Se entiende que la autoría puede señalarse por el dominio del hecho (en los que llama "delitos de dominio"), por la lesión de un deber especial en los hechos omisivos, culposos y en los que llama delitos activos de deber.

El dominio del hecho lo tiene únicamente el que hace el aporte indispensable en la ejecución y en ningún caso el que lo hace en la etapa preparatoria, porque quien hace este último aporte domina la preparación del hecho, es decir, lo necesario para la ejecución, pero no la ejecución misma, que es el "hecho" que nos interesa, la que, desde el inicio está totalmente en manos de los ejecutores. En consecuencia, nuestra ley no haría más que dejar fuera de la co-autoría un caso en que, por mediar un aporte indispensable a la preparación del hecho, pero no al hecho, no sería un caso de coautoría, porque ese aporte jamás da al sujeto el dominio del hecho mismo.

No se puede dejar de mencionar que existe en la jurisprudencia local, una marcada aplicación de la citada teoría en los hechos delictivos cometidos por funcionarios públicos, y en particular por miembros de la policía de la provincia, donde no se requiere ni siquiera una planificación previa, bastando la omisión como modo de complicidad y aceptación de hecho delictivo (vg. Vejaciones, apremios ilegales, torturas, etc.).

En rigor, no es autor el que ejecuta el hecho por mano propia, sino también aquel que observa y no hace nada para frenar su persistencia o continuidad, actuando en una actitud pasiva, omitiendo con ello los deberes funcionales que por ley está obligado a cumplir, vg., hacer cesar el delito, individualizar a los culpables y la aprehensión de los presuntos autores en flagrancia.

Como corolario, podemos decir que la base legal de la co-autoría se halla claramente establecida en nuestra ley en el art. 45: coautores son los que toman parte en la ejecución del hecho. Para nuestro código, quienes toman parte en la ejecución del hecho son autores, en tanto que, quienes cooperan o auxilian a los autores - es decir, quienes cooperan o auxiliar a los que toman parte en la ejecución del hecho- son cómplices corresponde a la doctrina establecer cuándo un sujeto toma parte en la ejecución del hecho -es decir, es autor-, y cuándo se limita a cooperar o auxiliar a los autores, o sea, es cómplice.

**DELITOS VINCULADOS CON EL EJERCICIO FUNCIONAL:**

Cómo futuros funcionarios policiales deben tener en cuenta que en el ejercicio de la función y a lo largo de toda su carrera policial es probable que se vean involucrados en algún hecho penal por entenderse que desempeñaron mal sus cometidos. Sin embargo, podrán sobrellevar las acusaciones administrativas y penales y hasta evitar su inicio si siempre procuren ajustar su accionar a lo que marca la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los Códigos Procesales Penales y el ordenamiento jurídico en general, como así los reglamentos específicos que rigen la función policial.

Como una forma de ayuda para ello, el objetivo es que conozcan cuales son los delitos más comunes que por la condición de funcionario público sólo pueden ser cometidos por el Policía y tengan en cuenta o se representen que alguna de sus conductas si no son llevadas a cabo conforme el ordenamiento jurídico puede configurar un delito que se desarrollaran a continuación:

Delitos más comunes y que por lo general el personal policial se ve involucrado en algunos de ellos o bien pueden concurrir en concurso ideal con otras figuras delictuales, según sea la imputación que le reproche el Ministerio Publico Fiscal, en nuestro caso el órgano acusador especializado en delitos vinculados a la función policial es la Fiscalía Penal de Derechos Humanos:



**Art. 80.- “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: Inc. 9. (Incorp. por ley 25.816) Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (B.O. 9/12/03);”**

La ley 25.816 ha modificado el Código Penal de la Nación incorporando el inciso 9° al artículo 80 tipificando como conducta agravada, el homicidio cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, que actuare con abuso de su función.

La agravante radica en razón de la condición funcional de los sujetos.

**Bien Jurídico Protegido**

El bien jurídico salvaguardado es la **vida humana**, que se encuentra protegido por Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional; su protección comprende el lapso que va desde la concepción hasta la muerte por causas naturales.

**Sujeto Activo**

Esta figura agrava el delito básico o base del homicidio, previsto en el artículo 79 del Código Penal, por la calidad que reviste el autor. Se trata de un tipo penal que exige en el sujeto activo revista la calidad de **integrante de una fuerza de seguridad, policial o del servicio penitenciario**. Es trascendental que se encuentren en actividad o en retiro activo, ya que, si fue exonerado o excluido de la institución, pierde la calidad de sujeto activo especial.

Es interesante la reflexión que realizan al respecto Castro y Guardia en su meduloso trabajo, en cuanto sostienen que no son alcanzados por la figura los jubilados o retirados, salvo que vuelvan al servicio activo por disposición de la superioridad. En este sentido entienden; que la condición policial no cesa con el retiro, pues justamente pueden volver al servicio activo ante una convocatoria, de modo que, en tales casos, la agravante concurre, quedando sí exceptuados los funcionarios exonerados o dados de baja, debido a que pierden su condición policial.

Asimismo, se establece como clara exigencia del tipo, que el sujeto activo realice la acción típica “abusando” de su función o cargo. No se trata de causar una muerte dentro de la faz negativa de la antijuricidad o como consecuencia preterintencional o culposa, sino que debe ocasionarse un homicidio, excediendo, “abusando” de sus funciones. Abusa del cargo o de la función, quien aprovecha las facilidades que le otorga la condición que ostenta para cometer el homicidio.

Aquí, surge otra de las cuestiones esenciales a individualizar, esto es, el sujeto activo que queda alcanzado por la norma, pues, sólo puede perpetrar este delito un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Para ello, resulta conducente realizar un acto de valoración de los términos empleados.

Por “Fuerzas de Seguridad” debe entenderse a todos los integrantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Aeronáutica.

En las “Fuerzas Policiales”, están comprendidos los miembros de la Policía Federal, las Provinciales y la Metropolitana y en las “Fuerzas del Servicio Penitenciario” quedan incluidos aquellos agentes que integren las instituciones estatales que tienen a su cargo el cuidado y custodia de las personas privadas de su libertad en calidad de detenidos, procesados, o condenados, alojados en establecimientos carcelarios.

**Sujeto Pasivo**

El sujeto pasivo puede ser **cualquier persona**, ya que no establece algún requisito dentro de la norma, incluso un miembro de las fuerzas de seguridad.

**Acción Típica**

La acción consiste en “ocasionar la muerte de cualquier persona por el abuso de la función o cargo de un miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”. Jorge Buompadre16 establece que el homicidio consiste en matar a otro y sus elementos constituyen una acción u omisión causal, un resultado material (la muerte de la persona) y un elemento subjetivo (dolo) que supone la voluntad de suprimir la vida. La acción es la de “matar a otro”, siendo un delito de comisión.

Ahora bien, el hecho del homicidio se encuentra agravado por haber sido cometido por abusar de su función como miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario; lo cual podrá ser de cualquier forma de abuso que termine con la vida de la víctima.

**Tipo Subjetivo**

Si bien la figura admite tanto el dolo directo como el eventual, Villada sostiene que el delito exige dolo especial. En concreto, al momento de dar muerte se debe tener conciencia de que se está excediendo o abusando de las funciones.

No basta la sola cualidad funcional del autor (delicta propia), sino que es necesario que el homicidio se produzca abusando del cargo o función. Por consiguiente, el delito es compatible sólo con el dolo directo porque se debe tener conciencia al momento de matar que se está excediendo o abusando de sus funciones y no obstante obrar con voluntad homicida. La norma es restrictiva en tanto exige, como elemento subjetivo del tipo, que el sujeto activo cometa el homicidio “abusando de su función o cargo”, lo cual importa el aprovechamiento de las atribuciones que legalmente posee para el ejercicio de las tareas que su empleo o puesto jerárquico le imponen para el resguardo de las personas y de sus bienes. De no existir tal aprovechamiento por parte del funcionario, de haber ejecutado el homicidio sin utilizar las facilidades que tales atribuciones legales le brindan, ello excluye la circunstancia agravada y lo ubica en el tipo básico. Ahora bien, quien mata dolosamente en dicho contexto, es decir, quien lo hace mediante el uso de los medios o facultades que le provee el estado por su situación de revista, queda inmerso en el artículo 80 inciso 9° del Código Penal, siempre que no resulte amparado por una causal de justificación o exculpación.

La jurisprudencia ha entendido que actúa amparado en la legítima defensa el oficial de policía que, en el marco de un enfrentamiento armado, iniciado luego de dar la voz de alto al constatar que dos delincuentes estaban perpetrando un robo en un local, disparó fatalmente contra uno de ellos, ya que el accionar del encartado se exhibe justificado desde la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión ilegítima y a cuenta de la legislación que rige la actuación de los integrantes de la policía.” (CNCrimCorr, Sala VII, 21/12/2007, “Pintos Omar” LL, 2008-A-45 y DJ, 2008-655). Sobrepasando el actuar justificado, el artículo 35 del Código Penal establece el supuesto de exceso en el ejercicio de una causa de justificación; en donde el autor inicia su actividad amparado en un tipo permisivo, pero la agota antijurídicamente, excediendo el ámbito de la causal justificante.

Consumación y Tentativa Una acción punible se considerará consumada cuando concurran todas las circunstancias que conforman el tipo objetivo y el subjetivo. De esta forma, en lo que respecta a la agravante que nos ocupa, el delito se consumara cuando se produzca la muerte de cualquier persona por el abuso de la función o cargo de un miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Por tratarse de un tipo penal de resultado, se admite en esta figura, al igual que en las demás receptadas por el art. 80 del Código Penal, la tentativa.26 D´Alessio entiende que la tentativa constituye un delito incompleto, más no por la ausencia de sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el tiempo.



**Art. 84. “Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte” (1º Párrafo)**

El bien jurídico protegido o, con más precisión, el bien jurídico afectado, es la vida humana producto de conductas que resultan violatorias del deber de cuidado.

Debe tenerse presente que en los delitos culposos la conducta prohibida no se individualiza por el fin en sí mismo, sino por la forma defectuosa de seleccionar los medios (violando deberes de cuidado) y poner en marcha la acción para alcanzar la finalidad deseada. En tal sentido se señala que la figura del homicidio culposo constituye un tipo penal abierto porque el legislador no puede prever la infinidad de conductas violatorias del deber de cuidado que provoquen la muerte y es por eso que encomienda al juez cerrar el tipo determinando cuál era el deber de cuidado que tenía el autor en las circunstancias concretas de un caso determinado

No existe en nuestra legislación penal un concepto de culpa. Ella, no obstante, se extrae del artículo bajo comentario que refiere a diversas especies (imprudencia, negligencia, impericia - en el arte o profesión -, inobservancia - de reglamentos o deberes de cuidado -) que se suelen agrupar bajo un género común: la violación de los deberes de cuidado

Imprudencia: es el obrar ligero, precipitado o peligroso. Obra imprudentemente quien realiza un acto cuando las reglas de la prudencia aconsejan su abstención. Es un hacer de más, un exceso de acción, a lo cual se suma un defecto en la previsión del evento.

Negligencia: es sinónimo de descuido, desatención, falta de precaución en el obrar. Obra negligentemente quien omite realizar un acto que la prudencia aconseja hacer. En la negligencia hay un defecto de acción y un defecto en la previsión del resultado. Es negligente quien no puso los cuidados que el mandato imponía.

Impericia: también conocida como “culpa profesional”, configura un obrar deficiente de una profesión, arte u oficio. Implica una conducta gruesa, de proporciones considerables, inexpertas o inhábiles, para el ejercicio de la actividad. Es la falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de una profesión o arte, que importa un desconocimiento de los procedimientos más elementales.

Inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo: configura un supuesto de culpa punible que puede derivar de cualquier normativa de orden general emanada de autoridad competente. Se trata de la inobservancia de disposiciones expresas (ley, reglamento, ordenanza, etc.) que prescriben determinadas precauciones que deben observarse en actividades de las cuales pueden derivar hechos dañosos. El obrar de ese modo causa un resultado típico.

**Sujeto Activo:**

En la figura simple, cualquier persona puede ser autor.

**Sujeto Pasivo:**

En la figura simple, cualquier persona.

**Acción Típica:**

En la figura simple, la acción típica consistirá en violar el deber de cuidado y como consecuencia de ello producir el resultado típico: causar la muerte a otro por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo.



Este delito se encuentra previsto en el artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal, el cual establece que:

**Art. 144 Bis: “Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo”:**

**2.- El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales.**

**Tipo objetivo:** La acción típica consiste, por parte del funcionario público cuando desempeña un acto de servicio, en aplicar, infligir, molestar, perseguir, maltratar o hacer padecer a una persona. Las vejaciones pueden consistir en todos los actos humillantes que puedan perjudicar psíquicamente a la persona. Creus agrega que se ataca también la dignidad o el respeto que la persona merece como tal.

Además, debe tenerse en cuenta que el delito de vejaciones puede quedar configurado no solo por infringir en contra de la persona maltratos psicológicos sino también por causarle maltratos físicos haciendo uso de la violencia por parte del funcionario público, lo que significa que dicho delito puede quedar configurado ya sea por acometer maltratos psicológicos o físicos.

**Tipo subjetivo:** Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la doctrina es unánime en aceptar que este tipo penal exige dolo directo, ya que es imposible vejar a una persona sin intención de querer causar este daño en contra de ella. Por lo dicho supra, no es aplicable el dolor indirecto, eventual ni la culpa del agente público en ejercicio de funciones. Lo que significa en palabras sencillas que el agente tuvo la intención dolosa de querer causar el perjuicio en contra de la persona.

**En síntesis, causar vejaciones a otro/a significa humillar, maltratar, molestar, perjudicar o hacer padecer trastornos tanto psicológicos como físicos a una persona e involucra por parte del funcionario que actuó que tuvo la intención de querer causar el daño a otro, lo que es jurídicamente reprochable por el ordenamiento jurídico.**



Este delito se encuentra previsto también en el mismo artículo 144 bis, inciso 2, del Código Penal, y es sancionado con la misma pena que el delito anterior, al tipificar que

**“El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales.**

Por dicha razón comparte con la figura anterior las mismas características, sin embargo, los apremios ilegales se diferencian por el hecho que el funcionario público con su cometido persigue obtener algo de la persona.

En las condiciones en las que se practica la detención, arresto o demora y durante todo el lapso en el cual el sujeto pasivo permanece privado de su libertad en manos de funcionarios estatales, pueden cometerse ciertos atentados que aumentan el sufrimiento, físico o moral, de la víctima, que se traduce en una mayor afectación del bien jurídico. Las vejaciones son aquellos actos que implican el menoscabo de la dignidad de la persona detenida y si bien coincide en esto con los apremios ilegales se diferencia de ella en que mediante el apremio ilegal se persigue obtener algo de la persona. El típico ejemplo de apremios ilegales son los interrogatorios policiales realizados para que la persona brinde información sobre el hecho delictivo en el que participó.

**En síntesis, por apremios ilegales hay que entender los rigores que son usados para forzar a una persona a dar alguna información, confesar algo, a declarar algo o a influir en sus determinaciones, también debe tenerse en cuenta que se trata de una figura penal en el cual se requiere para su configuración el dolo directo, lo que significa la intención por parte del agente de querer cometer la conducta delictual en menoscabo de la dignidad y respeto de los derechos de la persona.**

Este delito también se encuentra previsto en el Art. 144 Bis, inciso 3º, que establece: 

“Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo”: **“El funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales”.**

**Sujeto Activo:** También el sujeto activo de la figura debe lucir la calidad de funcionario público. El rasgo característico anida en la expresión “… a los presos que guarde…”, la norma indica que: sólo podrá serlo un agente estatal que tenga a su cargo la guarda del preso.

De tal modo implica que sólo los funcionarios públicos cuyas funciones consistan en la custodia de la integridad del detenido – directa o indirectamente- podrán serlo.

Esto comprende tanto aquella guarda que se ostente de forma permanente, como la que sea detentada de hecho u ocasionalmente, en tanto esa tarea sea abarcada dentro de sus competencias funcionales. Pero no sólo aquellos que guardan de manera inmediata o directa pueden ser autores, sino también quienes lo hagan de forma mediata o indirecta, en tanto se verifique una vinculación entre aquel como garante de la protección integral del detenido. Es decir, que tanto puede cometer el delito aquel guardia o custodio, como el director o Alcaide del establecimiento penal en el que el preso se encuentra alojado.

Debe tenerse en cuenta que esta figura delictual es aplicable al funcionario policial, y de hecho lo es, por ejemplo; a los funcionarios policiales que se desempeñan en el centro de contraventores de la cuidad capital o funcionarios policiales que cumplen tareas en dependencias policiales del interior de la provincia donde se encuentran alojados detenidos aún mas no sea provisoria o transitoriamente.

**Sujeto Pasivo:** La norma exige que se trate de un preso. El término incluye a toda persona que esté privada de su libertad en un establecimiento penitenciario destinado a ese efecto: al de guardarlos. Lo caracterizará el personal operativo que allí se desempeñe, con una labor preparada y entrenada para ello, y la reglamentación disciplinaria interna aplicable.- Por ello, se presupone que su estado de detención debe ser legítimo.- El alcance de la palabra debe ser asociado con un concepto amplio, que incluirá tanto a sujetos condenados como procesados privados de su libertad de manera preventiva, independientemente de la denominación que se les otorgue a la situación procesal y al sitio en que se aloje. Lo dicho no debe ser entendido como limitativo del ámbito espacial en que pueden tener lugar las conductas potencialmente encuadrables en la norma, pues el tipo penal incluye también aquellas aplicadas durante traslados, o bien en sitios de alojamientos provisorios. (lo que significa que puede configurar el delito de severidades los funcionarios policiales que se desempeñan en el centro de contraventores o los que cumplen funciones en dependencias policiales donde se alojan detenidos como es el caso de las dependencias del interior). El alcance de la figura queda sellado por la calidad de la persona y no por la circunstancia situacional en que las maniobras puedan tener lugar.

**En síntesis: las severidades pueden ser definidas como toda imposición que determine un aumento del sufrimiento del detenido contrario o abusivo a las reglamentaciones que regulan la vida intramuros, siempre que no alcance la categoría de apremio o vejación. La nota que demarca esta noción se concentra en el desapego a la reglamentación que delinea el tratamiento de reclusos que supone un agravamiento de su detención, es decir en el carácter antirreglamentario del procedimiento.**



El delito de Torturas se encuentra contemplado en el artículo 144 tercero, incisos 1° y 3**°**, el cual establece que,

***"Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentra jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquel poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos...Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente"*.**

Es más que destacado el comentario que Rafecas; efectúa sobre el proceso político que ha llevado a la sanción del tipo penal antes referenciado, por lo que -a renglón seguido- me permito transcribirlo textualmente, cuando aquel explica que: "...el legislador nacional de la democracia restaurada en 1983, movido no tanto por un meditado estudio de la cuestión sino más bien por el espanto frente a los recientes horrores cometidos por el terrorismo de Estado, sancionó la ley 23.097...por la que se aumentaron las penas drásticamente, equiparando el delito de torturas al del homicidio simple, decisión político-criminal que, en su afán de demostrar una mayor estima en la protección de los bienes jurídicos en juego (dignidad, libertad, integridad física y psíquica, incolumidad en el ejercicio de la función pública) le pareció a un sector de la doctrina algo desmedida", como también el que realiza con relación a la pretendida ilusión preventivo-general de la sanción penal, al que adhiero en un todo.

Asimismo, es relevante traer a colación el concepto de tortura con el objeto de estudiar el tipo en cuestión. Tal como define el art. 1° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es equivalente a aquella: todo **acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,** con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o una persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Sin perjuicio de lo precisado en el párrafo anterior, el texto del artículo estudiado, en donde no se requieren elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, parece estar más cerca de la noción de tortura que fluye de la letra del art. 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece que: "Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo corporal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin".

Hecha ésta aclaración, continuamos con el desarrollo que venimos realizando, manifestando que el sujeto activo sigue siendo calificado, aunque ahora se extiende no sólo a los funcionarios públicos, sino a aquellos particulares que ejecutaren los actos en cuestión -una clara alusión del legislador a las atrocidades que hemos sufrido durante el Terrorismo de Estado llevado adelante por el "Proceso de Reorganización Nacional".

La definición del concepto de tortura surge del art. 1° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 75 inc. 22 C.N.), que establece;

**En síntesis que toda Tortura significa; “Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”**



Se encuentra previsto en el Art. 144 bis, inciso 1° del Código Penal, el cual establece que

***“Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo:***

**1º *El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal”.***

La privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público es un delito especial, del cual sólo puede ser autor un funcionario público. Además, el tipo penal limita el ámbito de actividades en cuyo marco puede darse el delito por parte del funcionario público al ejercicio de sus funciones o desempeñando un acto de servicio. Es por ello, que quedan fuera del ámbito de protección de la norma, todos aquellos comportamientos restrictivos de la libertad, llevados a cabo fuera del ámbito funcional, esto es, en la vida privada.

Está estructurado como delito comisivo. No abarca los casos de personas que ya están detenidas legalmente y cuya ilicitud consiste en su indebido mantenimiento o prolongación. Sobre este presupuesto, el delito puede cometerse, también, por otros coautores que, puestos de acuerdo con el autor de la acción, realicen el tipo en omisión impropia (por ej., cinco policías acuerdan cometer el delito; dos de ellos realizan la acción, los demás se quedan, pasivos, en el puesto de guardia, para no llamar la atención y aparentando normalidad: estos últimos también son coautores dada su capacidad real-física de evitación y su posición de garante).

Es como el resto un delito de instantánea realización. Se consuma formalmente en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que pueda considerarse que el ofendido vio afectada su libertad de movimientos, o más precisamente, que se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción sino en los límites queridos por el autor, exigencia ésta que viene dada por el principio de lesividad.

En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de al menos, dolo eventual y no siendo procedente la culpa. Por otra parte, no cualquier privación de libertad llevada a cabo por el funcionario público en ejercicio de sus funciones, va a llenar sin más, el tipo penal en estudio. Se requiere, además, que la detención sea *ilegítima*, ya sea porque consiste en un abuso funcional, o bien porque no se cumple con las formalidades prescriptas por la ley.

La norma en análisis, que conforme veremos *infra*, tiene una amplitud importante en cuanto a los modos de afectación del bien jurídico, prevé dos modalidades: su comisión mediante el abuso de funciones (primer supuesto) y su realización sin las formalidades prescriptas por la ley (segundo supuesto).

Debemos hacer mención aquí, que todos aquellos casos en donde los funcionarios policiales utilicen la facultad –de dudosa constitucionalidad- de detener personas para “establecer identidad” o “averiguar antecedentes”, como la que otorga el art. 5° inciso 1° del decreto ley 333/58 (Ley Orgánica de la Policía Federal), a sabiendas de que no medien las razones específicamente establecidas para ello, se tratará de ejercicio abusivo de la función y por lo tanto, típico bajo este supuesto de privación ilegítima de la libertad.

Por otra parte, ejemplo típico del encuadre en el segundo supuesto (detención sin las formalidades prescriptas por la ley) es el del funcionario policial que, dolosamente, detiene a una persona señalada como sospechosa de haber cometido un ilícito, sin la exigencia de contar con *indicios vehementes de culpabilidad*, por los cuales el art. 284 inciso 3°, C.P.P.N. le atribuye, excepcionalmente, la facultad de detener sin orden judicial, o sin que la persona se encuentre en flagrante comisión de un delito de acción pública (art. 284 inciso 4°, C.P.P.N.).

También incurrirá en este supuesto, el agente que proceda a cumplir una orden de detención incompleta en sus elementos esenciales (identificación fehaciente del imputado, datos de la causa o sumario de prevención, firma del juez, fecha cierta). En estos supuestos, adquiere importancia superlativa la posible alegación, por parte del funcionario, de un error acerca del correcto cumplimiento del deber, es decir la invocación, conforme ya vimos, de un error de tipo.



**Art 151: “Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina”.**

La inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que asiste a todos los habitantes de nuestro país. El artículo 18 de la Constitución Nacional lo reconoce expresamente al declarar que “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

El allanamiento de domicilio es una medida de investigación que debe disponerse en el marco de un proceso penal, mediante la cual un juez autoriza el ingreso a un domicilio y su posterior registro, con el objeto de buscar e incautar cosas u objetos relacionados con el delito investigado o de detener al imputado, cuando esa detención haya sido autorizada en forma previa por el Juez.

El termino allanar, significa entrar, es decir pasar desde afuera al interior de la morada, de la casa de negocios, de sus dependencias o del recinto habitado por otro.

Para que el consentimiento sea efectivamente valido, en primer lugar, debe ser otorgado por quien se encuentra habilitado para autorizar el ingreso del funcionario, en segundo término, se exige que el consentimiento sea voluntario, es decir, que sea libremente otorgado por el titular del derecho de exclusión, sin haber padecido ningún tipo de presión o intimidación.

**Bien jurídico protegido**

En este caso, la comisión de la conducta descripta por el tipo lesiona la **libertad de** **autodeterminación del ser humano**, que, en nuestro ámbito, goza del derecho constitucionalmente reconocido a poder decidir quién ingresa y quién no a su principal espacio de intimidad, su domicilio.

**Sujeto activo**

Sólo puede ser sujeto activo de esta infracción un agente estatal público en ejercicio de la función que desempeña.

**Acción típica**

La acción típica consiste el ingreso de un funcionario público a un domicilio, contra la voluntad expresa o presunta del titular del derecho de exclusión, sin cumplir con las formalidades previstas por la ley o fuera de los casos en que ella determina.

**Tipo subjetivo**

Nos encontramos frente a un delito doloso que demanda que el sujeto activo practique un allanamiento con conocimiento y voluntad de que ingresa en el domicilio sin cumplir con las formalidades exigidas por la ley o fuera de los casos en que la ley lo autoriza.



**Art. 157: “Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos**.”

**Bien jurídico**

El objeto de tutela, es una faceta de la “intimidad”, es el “secreto”, pero no cualquiera sino el que tiene origen y debe mantenerse así dentro del ámbito de la administración pública. El acceso por el funcionario es legítimo, no se trata de un caso de intrusión.

**Verbo típico**

El núcleo del tipo es la conducta de “revelar” a quien no se encuentre comprendido por la obligación de reserva. Vale decir, descubrir o poner de manifiesto ante alguien que no pertenece al círculo de habilitados a conocer hechos, actuaciones, documentos o datos que, por ley, deben ser secretos (media prohibición legal para su divulgación).

La referencia a “hechos” comprende acontecimientos de cualquier naturaleza, tanto humanos como naturales.

Por “actuaciones” ha de entenderse o incluirse todo tipo de trámites, expedientes, resoluciones, diligencias o procedimientos que fueren emitidos por una autoridad y correspondan a cualquier fuero, sea judicial o administrativo o legislativo.

La noción de “documentos” resalta Fontán Balestra, no está tomada en sentido técnico estricto y se corresponde con toda suerte de informes escritos, despachos, comunicaciones, comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.

“Datos” remite a la información contenida en un sistema informático.

**Sujeto activo**

Sólo puede ser autor un funcionario público que, por su vinculación permanente o accidental, principal o secundaria, con el servicio o la función pública de que se trate, haya tenido conocimiento del hecho, la actuación el documento cuyo secreto ordena la ley.

**Sujeto pasivo**

Es la administración pública en cuanto titular del secreto fijado por ley sobre hechos, documentos, actuaciones o datos.

Sin embargo, no puede descartarse que, en forma indirecta, la esfera de reserva de alguna persona pudiera resultar afectada.

**Tipo Subjetivo**

La revelación debe ser dolosa, requiriendo el conocimiento del carácter secreto y la voluntad de revelarlo.



**El art. 248 establece: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.**

La norma describe tres conductas típicas distintas, cuyo elemento central es el abuso funcional, es decir, el empleo de la autoridad recibida para violar la Constitución o las leyes.

1. La primera modalidad se caracteriza porque, en la realización de la acción típica, el funcionario actúa contrariando lo que expresamente establecen las Constituciones o las leyes, lo cual implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública.

No se abusa aplicando mal la Constitución o la ley, sino cuando el acto funcional que se realiza está prohibido por el orden jurídico o, no estándolo, se lo ejerce de manera arbitraria.

Se comete el delito cuando el funcionario dicta una resolución o imparte una orden contraria a la Constitución de la Nación o las leyes nacionales, provinciales o municipales.

El delito es doloso, de dolo directo. Se consuma cuando se dicta la resolución o cuando se imparte la orden, contrarias a las leyes, independientemente de su acatamiento por su destinatario.

2. La segunda forma consiste en ejecutar las resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes.

3. La tercera describe un tipo omisivo que consiste en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario, quien no la aplica porque ignora su existencia.

El denominado “retardo administrativo” queda comprendido en el tipo ya que, como señala Creus, el no hacerlo es no ejecutar cuando se debe. Así que tanto comete el delito quien nunca ejecuta la ley como el que no lo hace en su oportunidad. Es un delito doloso, de dolo directo, que se consuma con la no ejecución de la ley en el caso concreto.



**El art. 249 establece: Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.**

El delito se configura mediante tres formas de conductas omisivas alternativas: omitir (no realizar el acto), rehusar hacer (negarse a realizar el acto) o retardar (no realizar el acto en el término fijado), por parte de un funcionario público, un acto propio de sus funciones.

La conducta del funcionario debe ser ilegal y referida a un acto de su oficio, elemento normativo que integra el tipo objetivo e incide sobre el dolo del autor.

Es un delito doloso, de dolo directo, se consuma con la omisión, el rehusar hacer o el retardo, sin que se requiera de ulteriores resultados para el bien jurídico. La tentativa no resulta admisible.



**Art. 250: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.”**

**Bien jurídico**

El bien jurídico protegido es la administración pública, en la perspectiva de los deberes de cooperación en el servicio a los intereses generales que vinculan a los funcionarios públicos en el correcto ejercicio de su cargo.

**Sujeto activo:**

Sólo puede ser un jefe o agente de la fuerza pública. Forman la fuerza pública las fuerzas de seguridad o policiales encargadas de mantener el orden público, cualquiera que sea su denominación, competencia y funciones (preventivas, represivas, de seguridad y vigilancia, de auxilio, etc.).

**Acción típica**

Se omite cuando no se presta el auxilio, se retarda cuando se lo presta fuera de la oportunidad debida y se lo rehúsa cuando se rechaza formal y materialmente el requerimiento

**Tipo Subjetivo**

El delito es imputable a título de dolo.



**Art. 281: “Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”.**

**“Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil”**

El bien jurídico protegido debe situárselo en el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia; dentro de ella –y más específicamente hablando-, se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de las medidas que restringen la libertad de un individuo –dispuestas por la autoridad competente en la materia-, no ya reprochando el proceder de su destinatario –en cuanto éste intente evadirlas-, sino el comportamiento de terceras personas que atentan contra las mismas.

El precepto contempla dos hipótesis: el favorecimiento doloso de evasión y la causación culposa de la evasión. Además, prevé una circunstancia agravante de la pena, aplicable únicamente a la modalidad dolosa y cuando el autor fuera un funcionario público.

1. Favorecimiento doloso: el delito consiste en favorecer (ayudar, colaborar, etc.) la evasión de algún detenido o condenado. El tipo presupone una fuga voluntaria.

Sujeto activo puede ser cualquier persona. Es un delito doloso, de dolo directo que se consuma con la fuga del detenido o condenado. La tentativa es posible.

2. Causación culposa de evasión: el delito consiste en causar por negligencia, la evasión de un detenido o condenado. El tipo presupone una negligencia tal que, sin ella, la evasión no se hubiera producido.

Sujeto activo sólo puede ser un funcionario público que tenga a su cargo, la obligación de custodiar o mantener los resguardos de seguridad que impidan la libertad ambulatoria del detenido o condenado. El delito se consuma con la producción del resultado, esto es, con la evasión de la persona.



Los delitos de falsedad documental ofenden la fe pública, ésta es la fe sancionada por el estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos, signos o formas exteriores.

Esta constelación delictiva se estructura, alrededor de dos figuras centrales:

* **Falsedad material**: creación de un instrumento falso;
* **Falsedad instrumental**: adulteración de un instrumento verdadero.

**Falsedad material**

El art. 292 establece: El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.

Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.

El delito consiste en hacer, en todo o en parte, un documento falso o en adulterar uno verdadero.

Hacer en todo un documento falso consiste en crear, fabricar, confeccionar, etc., un documento y atribuírselo a una persona distinta del otorgante. El documento totalmente falso es aquel en el que se falsifica la autenticidad o autoría y con ello la genuinidad de un documento, lo cual se puede realizar atribuyendo la manifestación a alguien que no es su autor, o atribuyendo la manifestación propia de una persona supuesta.

Hacer parcialmente un documento falso admite, como conducta falsaria, que sea tanto el propio autor del acto genuino el que produzca el acto falso como un tercero. En cualquier caso, el documento debe ser genuino o legítimo y tanto en la creación total o parcial de un documento falso, se requiere de una tarea imitativa.

Por regla general, puede ser autor de falsedad material cualquier persona, incluso un funcionario público.

Subjetivamente, el delito es doloso, de dolo directo.

**FALSEDAD IDEOLÓGICA:**

**El art. 293 establece: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.**

**Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años.**

Se trata de la hipótesis de un documento público, que es auténtico en su materialidad, pero contiene declaraciones falsas, relacionadas con el objeto que está destinado a probar.

El delito consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas relativas a un hecho que el instrumento debe probar. Insertar quiere decir incluir en el documento declaraciones que no son verdaderas, conducta que puede llevarse a cabo únicamente por quien extiende el documento, siendo este el oficial público. En este supuesto, el autor da fe de un hecho que no ocurrió en su presencia o que, si ocurrió, lo ha sido de un modo diferente al que se materializa en el documento. Hacer insertar implica orientar la conducta a que una persona (el otorgante del acto) logre (haga insertar) que otra persona (el fedatario) introduzca en el documento declaraciones falsas. Esta modalidad no puede ser cometida por el particular solo, dado que se trata de una conducta compuesta, que requiere la contribución de otra persona. La conducta solo será punible en la medida en que exista un “deber de decir verdad” por parte del otorgante, ya que, si no existe, no hay delito.

Son objetos del delito los instrumentos públicos, dado que son los únicos dotados de la garantía de la fe pública.

Excepcionalmente, la ley incluye la falsedad ideológica de instrumentos privados, como son el falso certificado y las facturas de crédito.

Con respecto al sujeto activo, hay que distinguir: si la acción consiste en insertar, sólo puede ser sujeto activo el oficial público, ya que sólo él posee competencia. Si la acción consiste en hacer insertar, sujeto activo puede ser cualquier persona que la ley pone a cargo la obligación de veracidad, esto es, un deber jurídico de realizar una declaración veraz, es decir, de una declaración impuesta normativamente.

El delito es doloso, compatible sólo con el dolo directo, que se consuma cuando ha quedado perfeccionado el instrumento público con todos sus signos de autenticidad.

**El art. 294 establece: El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.**

Es una forma de falsedad material. La figura exige, que con la supresión o destrucción total o parcial del instrumento el agente oculte lo verdadero mediante la desaparición de la fuente de verdad, conformado por el documento que se suprime o destruye.

**El art. 298 establece: Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.**

El funcionario público que, con abuso de sus funciones, ejecuta una falsificación de documentos además de atentar con la fe pública, omite el cumplimiento de su deber de honrar su rol, defraudando con ello las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función.

**DELITOS COMETIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD:** **DELITOS DE ATENTADO, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.**

Los delitos que se mencionan tiene en común que se encuentran dentro del grupo de figuras que tutelan el normal desenvolviendo o desarrollo de la administración pública, pero sin embargo cada uno de ellos protege un bien jurídico particular como se verá a continuación:

**DELITO DE ATENTADO A LA AUTORIDAD:**

Tipificado en el artículo 237 del Código Penal cuyo tenor se transcribe “*Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”.* El articulado siguiente establece los agravantes de la Figuera penal diciendo *“La prisión será de seis meses a dos años:*

*1 Si el hecho se cometiere a mano armada;*

*2 Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;*

*3 Si el culpable fuere funcionario público;*

*4 Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.*

*En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena”*.

El bien jurídico que protege la norma es la autodeterminación o la libertad de decisión del funcionario público en ejercicio de sus funciones. Pues la acción típica consiste en emplear fuerza o intimación con una determinada finalidad, que el funcionario realice u omita un acto propio de sus funciones.

**DELITO DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD:**

Ubicado sistemáticamente en el Artículo 239 del Código Penal diciendo “*Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.*

En la resistencia, el bien jurídico protegido es la libertad de acción del funcionario público en la ejecución de un acto propio de sus funciones. Para ello es ineludible, la configuración a priori del delito de desobediencia a la autoridad como la antesala de la resistencia. Podemos decir entonces que la desobediencia es la omisión a una orden impartida por el agente público dentro de la competencia atribuida. No obstante a ello tipificación de la conducta, debe existir una orden determinada, el sujeto activo hacer caso omiso y entonces finalmente el agente publico actúa operativamente para cumplir el mandato legal, circunstancias en que se produce la oposición del autor.

**Diferencia entre atentado y resistencia:** Una de las cuestiones que más problemáticas ha causado en torno a la diferenciación de las figuras en el ámbito judicial, es saber determinar cuándo una conducta se encuentra dentro de la esfera de los tipos penales de atentado o resistencia. En honor a la brevedad se dirá, que existe atentado a la autoridad cuando el funcionario público no ha iniciado el acto funcional y en tanto existe resistencia cuando el acto funcional se encuentra en vías de ejecución y allí se produce el entorpecimiento. No siendo relevante para diferenciar la utilización de armas de fuego, uso de violencia, más de tres personas, ya que solo son presupuestos para agravar el atentado y no la resistencia.

**Elemento Subjetivo**: Tanto el tipo penal de Atentado, Resistencia y Desobediencia a la autoridad tiene en común, que solo procede el dolo directo. No es extensivo al dolo indirecto, eventual y la culpa. Pues el sujeto activo, debe imaginar un resultado y actuar deliberadamente para conseguir ese propósito buscado. Este elemento volitivo es esencial para la configuración del delito.



**“En el atentado a la autoridad el autor impone al funcionario público omitir o realizar un acto propio de sus funciones. En la resistencia se opone a la ejecución del acto funcional del agente público. En la desobediencia omite el cumplimiento de una orden legítima”.**

**UNIDAD II**:

Temario: Proceso Penal: Concepto. Imputado: Concepto. Derechos y garantías. Derecho de Defensa en Juicio. Defensa material y técnica. Declaración de Imputado. Evacuación de citas y proposición de diligencias. Situación del imputado. Principio de libertad. Casos en que procede la detención. **ETAPAS DE PROCESO PENAL**: 1.-**Investigación penal preparatoria**: Averiguación Preliminar. Decisiones que puede adoptar el Fiscal. Decreto de citación a Audiencia de Imputación. Actividad probatoria en I.P.P. Requerimiento de Juicio. Intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Rol del Juez de Garantía. Elevación de la causa a juicio. **2.- Juicio**: Actos preliminares. Citación a Juicio. Ofrecimiento de Pruebas. Audiencia de Juicio: Iniciación. Apertura. Producción de pruebas. Delito de Falso Testimonio. Alegatos. Deliberación y Sentencia (Absolutoria y condenatoria).

**EL PROCESO PENAL**

**Concepto:**

Puede conceptualizarse al proceso penal **como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal, y cumplidos por órganos públicos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad sobre la materialidad de un delito y actuar concretamente la ley penal sustantiva.**

SERIE GRADUAL PROGRESIVA Y CONCATENADA DE ACTO,

significa que el proceso penal en un CONJUNTO de actos divididos en GRADOS O FASES, unidos unos con otros a tal punto que unos son presupuestos de otros (así por ejemplo no se puede formular requerimiento de juicio al imputado si antes no se realizó la audiencia de imputación y declaración del imputado) y que avanzan en forma progresiva (no se pueden retrotraer etapas cumplidas (principio de preclusión procesal).

DISCIPLINADOS EN ABSTRACTO POR EL DERECHO PROCESAL,

significa que estos actos están previstos en el Código Procesal en abstracto, es decir aplicables a distintos casos. El código procesal establece la forma (como) se deben realizar los actos procesales y el orden en que se deben cumplir los mismos. Los actos procesales son los distintos trámites previstos en el C. P. P, así por ejemplo denuncia, declaración del imputado, sentencias, etc., estableciendo el código las formalidades que deben reunir.

CUMPLIDO POR ÓRGANOS PÚBLICOS y POR PARTICULARES

OBLIGADOS o AUTORIZADOS A INTERVENIR, los órganos públicos que intervienen son: la Policía, El Ministerio Público Fiscal (Fiscal Penal, Auxiliares de Fiscalías, Cuerpo de Investigadores Fiscales) y Jueces Penales. Los particulares que intervienen son los testigos y peritos (obligados a intervenir) y

la víctima, que es autorizada a intervenir cuando se constituye en actor civil o querellante particular.

PROCURA (fin): 1) INVESTIGAR LA VERDAD, es decir busca descubrir la verdad real de los hechos y 2) ACTUAR CONCRETAMENTE LA LEY PENAL, es decir que sirve para aplicar la Ley Penal que describe los delitos y las penas correspondientes.

Esta definición del proceso penal como mecanismo de reconstrucción histórica no es la única visión, ya que existen otras posturas que conciben al proceso penal como un medio de solucionar conflictos, así por ejemplo el actual Código Procesal de la Provincia prevé como alternativa al esquema Juicio - Sentencia, medios alternativos que solucionan el conflicto penal sin llegar al dictado de sentencia, por ejemplo cuando se aplica un criterio de oportunidad, se deriva el caso a un medio alternativo de solución de conflicto o se suspende el Juicio a prueba.

**El proceso penal está concebido para cumplir con la garantía del art. 18 de la C.N.** que establece que para la imposición de una pena por la comisión del delito, antes debe sustanciarse un juicio: "Nadie podrá ser penado sin juicio previo". Esto importa la consagración del proceso (tal la acepción más amplia que tiene la voz juicio) como instrumento inevitable y no sustituible por ningún otro para la aplicación de una sanción penal a una persona, en cualquier caso y en todos los casos.

**IMPUTADO**

**Concepto:**

El C.P.P. en su art. 87, considera imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento sea indicado o detenido como autor o partícipe de la comisión de un delito.

Y como tal, en su art. 88 establece que, desde el mismo momento de la detención o desde la primera diligencia practicada con el imputado, éste deberá ser anoticiado por la autoridad que intervenga que goza de las siguientes garantías mínimas:

1. A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, del hecho que se le imputa;
2. A comunicarse libre y confidencialmente con un letrado de su elección, y que tiene el derecho de ser asistido y comunicarse con el Defensor Oficial;
3. A nombrar un abogado defensor de su confianza o al Defensor Oficial;
4. A que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a persona de su confianza;
5. A ser informado que no está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable;
6. A solicitar audiencia a fin de prestar declaración cuando lo estime conveniente;
7. A ser informado respecto de los derechos que le asisten con relación al responsable civil del hecho por el que se lo imputa si lo hubiere y también respecto del asegurador, en caso de existir contrato, como asimismo los derechos que le asisten respecto de requerir al asegurador que asuma su defensa penal;
8. A ser conducido dentro de las veinticuatro (24) horas ante el Juez de Garantías para que éste controle la legalidad de su detención.

Atento a que la responsabilidad penal es personal, y que sobre el mismo pesa la obligación de denunciar su domicilio real y fijar domicilio dentro del radio del Tribunal y con posterioridad, mantendrá actualizados esos domicilios comunicando al Fiscal o al Tribunal interviniente, según el caso, las variaciones que sufrieren. La falsedad de su domicilio real será considerada como indicio de fuga. Si no constituyere domicilio dentro del radio del Tribunal, se tendrá por tal el que constituya su Defensor. Para el caso que, el imputado mude de su domicilio sin informar el mismo, no concurriere a las citaciones que se le efectuaren, o se fugare del lugar en el que se hallare detenido, el fiscal podrá requerir que el Tribunal declare su rebeldía, quien expedirá orden de comparendo y detención, a los fines de garantizar la aplicación del derecho penal sustantivo.

**Derecho de Defensa en Juicio**.

Tal como se indica en el art. 1 inc.) h del C.P.P. **la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal, desde su inicio y hasta el fin de la ejecución de la sentencia**. Esta garantía comprende para las partes en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal:

El derecho a conocer la imputación, a ser oídas, contar con asesoramiento letrado efectivo, ofrecer prueba, controlar su producción, alegar sobre su mérito e impugnar resoluciones de los órganos que tramitan el proceso en los casos y por los medios que este Código autoriza.

Conocer la imputación comprende no sólo el derecho a conocer el hecho que se le imputa sino **también el de conocer las pruebas existentes en su contra**.

Contar con asesoramiento letrado efectivo significa no sólo el derecho de designar a una abogado defensor para que lo defiendo sino también su derecho de que **la defensa técnica que se le brinde sea efectiva,** lo cual implica que su defensor técnica tenga una participación activa en el proceso penal, interviniendo en todos los actos procesales que afecten los derechos de su defendido y que recurra las decisiones y resoluciones judiciales que sean contrarios a sus intereses, lo cual comprende el ofrecimiento de prueba y la efectiva participación en su producción (cuando la misma se es practicada) y alegar sobre su mérito (haciendo notar al tribunal las pruebas que des incriminan a su defendido o que atenúan su responsabilidad penal.

**Defensa Material - Declaración de Imputado.**

La defensa material es la que realiza el imputado a través de la exposición de su versión sobre los hechos imputados. Esta actividad la realiza el imputado al prestar su Declaración de Imputado prevista por art. 408 del C.

P. P, que establece:

"Art. 408.- Declaración en audiencia de imputación. Concluida la información sobre el hecho, constancias de las actuaciones y derechos, se invitará al imputado a declarar.

**En esta audiencia el imputado podrá optar por declarar por escrito, opción que deberá concretar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, vencidas las cuales se tendrá por ejercida su facultad de abstención.**

Una vez cumplido el deber de comparecencia a la audiencia de imputación, y habiendo declarado o expresado su negativa a declarar, el imputado podrá pedir al Juez de Garantías que fije audiencia a idénticos fines.".

El imputado no sólo puede declarar en la Audiencia de Imputación sino que lo puede hacer cuantas veces lo considere necesario, tal como lo prevé el art. 419 del C. P. P. que establece:

Art. 419: Nuevas declaraciones. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y el Fiscal podrá disponer las ampliaciones que considere necesarias. Siempre que se modifique el hecho descripto en el decreto de apertura se convocará a una nueva declaración de imputado.

**Defensa Técnica**

La defensa técnica del imputado la realiza su DEFENSOR, que es la persona, profesional abogado, que asiste al imputado para ejercer su derecho de defensa, el que podemos definir como *“el insoslayable derecho subjetivo individual, de carácter público, de intervenir en el proceso penal en todo momento, de probar y argumentar en él por sí y por medio de abogado todas las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que desvirtúen la acusación, con el propósito de obtener una declaración de eximición o atenuación de la responsabilidad penal atribuida”.* Es una exigencia necesaria en el proceso penal al defensa técnica que es la ejercida por un abogado, quien debe desplegar una actividad científica encaminada a **asesor técnicamente** al imputado sobre sus derechos y deberes, **controlar** la legalidad del procedimiento, el control crítico de la producción de la prueba de cargo y descargo, la **exposición critica** de los fundamentos y pruebas de cargo y de descargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho, **recurrir** la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad.

La defensa técnica es, necesaria y obligatoria, aun en contra de la voluntad del imputado. La misma implica que el imputado puede elegir como defensor particular a cualquier abogado de su confianza, si no lo hace, se niega a hacerlo o no tiene medios para costear los gastos de una defensa particular, el Estado debe suministrarle de oficio un defensor oficial para cumplir tal

función. Además, la defensa debe ser eficaz, debe realizarse efectivamente y ser necesariamente critica de todos los argumentos acusatorios.

Toda defensa que no se realice bajo estos parámetros viola la garantía de defensa, y con ello el debido proceso legal, lo cual debe conducir a la unificación del proceso.

**Evacuación de citas y Proposición de Diligencias.**

La Ley Procesal establece como DEBER del Fiscal la de "investigar los hechos... los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado". Esto es lo que se conoce como el Instituto de EVACUACIÓN DE CITAS previsto por art. 420 del C. P. P. que establece:

Art. 420. Evacuación de Citas. El Fiscal deberá investigar todos y cada uno de los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado, salvo que los considere impertinentes o inútiles. En tal caso, el imputado o su defensor podrán acudir al Juez de Garantía para solicitar la revisión de ese criterio.

La importancia de la Evacuación de citas radica en que la Ley Procesal impone al Fiscal Penal la obligación de investigar los hechos y circunstancias referidos por el imputado en el ejercicio de su defensa material, por ello es necesarios que el imputado exprese en su declaración de imputado todos los hechos y circunstancia que lo des incriminen o atenúen su responsabilidad penal, lo cual habilitará al abogado defensor a exigir al Fiscal que se investiguen esos hecho y ante negativa del Fiscal poder recurrir ante el Juez de Garantía.

**Proposición de Diligencias.**

En caso en que el imputado no haya referido los hechos que hacen a su defensa en su declaración de imputado, debemos recurrir al Instituto de "Proposición de Diligencias" establecido por art. 253 del C. P. P., norma esta que no tiene la misma fuerza obligatoria que la anterior al establecer que la Resolución del Juez de Garantía es inapelable.

**Art. 253**.- Proposición de diligencias. Las partes podrán ofrecer las diligencias que consideren útiles y pertinentes para la averiguación de la verdad. El Fiscal, en el término de tres (3) días, ordenará su producción o notificará su denegatoria por decreto fundado al interesado, quien podrá solicitar su revisión por el Juez de Garantías argumentando sobre la pertinencia y utilidad en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Si así lo hiciere, se elevarán de inmediato los autos para resolver, sin más trámite, en el término de tres (3) días. Dicha resolución será inapelable. No obstante, si se tratase de medidas de prueba que pudiesen ser perdidas definitivamente durante el trámite previsto en este artículo, las partes podrán producirlas con intervención de un escribano público. Estas actuaciones serán presentadas de inmediato ante el Juez de Garantías, quien ordenará su incorporación a la causa, si hubiese razón suficiente, mediante resolución fundada. Su denegatoria no impedirá el ofrecimiento de esta prueba en la etapa del Juicio.

**Situación del imputado- Principio de Libertad**.

La regla general es que el imputado permanezca en libertad durante el proceso penal, conforme art. 367 que establece que "**con las limitaciones dispuesta por este Código toda persona a quien se le atribuya participación punible en el hecho investigado permanecerá en libertad durante el proceso**".

Por su parte el art. 368 C.P.P. establece que "**La libertad personal sólo podrá ser restringida** de acuerdo a las disposiciones de este Código en los límites absolutamente **indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la Ley**".

.Por ello por es que en la mayoría de los delitos se procede la CITACIÓN del imputado.

**Delitos ante los que procede la citación:**

Esta forma liviana de coerción va a proceder, según el art. 372 del

C.P.P. cuando el delito que se le atribuye en el procedimiento no esté amenazado con pena privativa de libertad o, si estando amenazado con esa clase de pena, aparezca como posible la aplicación de una ejecución condicional (art. 26 y 27 del C.P.).

**Detención:** El C.P. P. en el art. 373 establece que el fiscal puede pedir al Juez de Garantía la detención del imputado cuando presuma fundadamente que entorpecerá la investigación o que intentará sustraerse a sus requerimientos estableciendo los requisitos que debe contener la orden de detención.

La norma establece tres requisitos para la restricción de la libertad. Ellos

son:

1. Tutela de la investigación: Las medidas en que ésta se traduce tienden a evitar que el imputado pueda obstaculizar la investigación de la verdad aprovechando su libertad para borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los testigos, o concertarse con sus cómplices. Accesoriamente, se las autoriza cuando las alternativas del proceso tornen necesaria su presencia para medidas probatorias en las que deberán actuar como objeto de prueba (tales como una inspección corporal, un reconocimiento de identificación, etc.).

Las medidas en que ésta se traduce tienden a evitar que el imputado pueda obstaculizar la investigación de la verdad aprovechando su libertad para borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los testigos, o concertarse con sus cómplices. Accesoriamente, se las autoriza cuando las alternativas del proceso tornen necesaria su presencia para medidas probatorias en las que deberán actuar como objeto de prueba (tales como una inspección corporal, un reconocimiento de identificación, etc.).

Las medidas en que ésta se traduce tienden a evitar que el imputado pueda obstaculizar la investigación de la verdad aprovechando su libertad para

borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los testigos, o concertarse con sus cómplices. Accesoriamente, se las autoriza cuando las alternativas del proceso tornen necesaria su presencia para medidas probatorias en las que deberán actuar como objeto de prueba (tales como una inspección corporal, un reconocimiento de identificación, etc.).

1. Tutela de la realización del juicio: Como en general se prohíbe el juicio penal en rebeldía, es necesario asegurar la intervención personal del imputado en el proceso para garantizar su completa realización. Es posible, en consecuencia, la adopción de medidas coercitivas respecto de aquél para evitar que mediante la fuga u ocultación de su persona impida el normal desarrollo del juicio, en el cual, quizás, se probará el delito y se dispondrá su condena. La justicia se vería burlada si el presunto culpable lo fuera realmente pero impidiera, fugando, la realización de los trámites necesarios para la comprobación judicial de su culpabilidad y su correspondiente punición.

Pero, por lo general, no será necesario a estos fines restringir la libertad del imputado, pues sobre todo frente a imputaciones de mediana entidad, seguramente preferirá afrontar el riesgo de ser condenado luego del proceso en lugar de darse a la fuga. No tomar en cuenta este aspecto sería sustituir la idea de necesidad por la de comodidad, lo que resulta inadmisible.

1. Tutela del cumplimiento de la pena: Los actos de coerción tienen también la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la posible condena de prisión o reclusión que se pueda imponer, impidiendo que el imputado eluda, mediante su fuga, incluso después de conocer la sentencia, la efectiva ejecución de la pena que se le imponga. Es que si luego de verificarse la culpabilidad del acusado éste pudiera sustraerse al cumplimiento de la sanción que le corresponde por su delito, la justicia sería eludida y la impunidad del delincuente podría traer aparejadas consecuencias exactamente contrarias a las que se persiguen mediante la imposición de pena.

Pero como no siempre sucederá que el condenado prefiera fugarse antes que cumplir la sanción, la coerción durante el proceso sólo se justificará cuando exista el serio riesgo de que tal cosa ocurra, riesgo que estará directamente relacionado con la gravedad de la sanción que posiblemente le impondría la sentencia y las condiciones personales del imputado (riesgo que a veces es “creado” por la ley penal, a través de penas excesivas).

**ETAPAS DEL PROCESO PENAL.**

El proceso penal, tiene por lo general, diferentes etapas, que si bien todas responden a los fines últimos de aquél, cada una tiene objetivos propios.

En orden cronológico señalamos la investigación preparatoria de la acusación; el juicio que decide sobre ella; los recursos para corregir posibles errores en las decisiones, y la ejecución de lo decidido en la sentencia.

**1.- La Investigación Penal Preparatoria.**

Lo habitual es que un proceso penal se inicie con una instrucción preparatoria que consiste en la etapa investigativa. En esta parte del proceso **se recogen los elementos de pruebas que sustentarán la acusación contra una persona**. En nuestro Código Procesal Penal de Salta se llama investigación penal preparatoria a cargo del Fiscal Penal y *se encuentra reglamentada en el Título I del Libro II del C.P.P. y se trata de un* ***procedimiento aplicable a los delitos de acción pública****, consiste en una secuencia de actos orientados a lograr una acumulación de información que le permita al Fiscal adoptar las decisiones que la ley le indica respecto del ejercicio de la acción penal.*

*La I. P. P. se inicia por Denuncia o por Actuación de Prevención Policial que son remitidas al Fiscal, quien una vez que* recibe los antecedentes de denuncia o informes policiales, o cuando se impone de la *notitia criminis,* no está obligado a emitir una inmediata valoración de ellos para pronunciarse sobre la relevancia penal de los hechos, sino que conforme al art. 241 del

C.P.P. se autoriza al Fiscal a practicar una **AVERIGUACIÓN PRELIMINAR** que le permita acreditar sumariamente el hecho que efectivamente se está poniendo en conocimiento**. En este supuesto se otorga al fiscal un plazo de 15 días para ordenar las medidas conducentes, para formar un mérito que puede tener las más variadas opciones**. El fiscal se enfrenta en esta etapa del proceso, con la posibilidad de contar con un breve plazo para asumir una investigación directa o delegada en alguno de sus auxiliares, que permita reunir elementos suficientes como para ingresar al régimen de opciones que propone el art. 241 del C.P.P. y tomar una decisión que en primer lugar sea ajustada a derecho y en segundo lugar que se adecúe al conflicto llevado por las partes y alcanzar así una solución que restablezca la armonía entre los contendientes y la paz social.

El transcurso del plazo de 15 días, sin que el fiscal hubiere hecho uso de alguna de las opciones que propone el artículo habilita a las partes a recurrir a la instancia del 178 del C.P.P., es decir la imposición de un pronto despacho, a partir del cual genera la obligación del fiscal de expedirse en el plazo de 3 días y en el caso de no obtener respuesta, se reconoce la posibilidad de denunciar el retardo por ante el Procurador General de la Provincia.

De esta manera el Fiscal se encuentra en condiciones de formar un mérito respecto a alguna de las opciones propuestas por el art. 241 del

C.P.P. con mayores y mejores herramientas para la formación de convicción procesal.

**La Valoración Inicial. Decisiones del Fiscal.**

Denominamos Valoración Inicial a la etapa del Proceso en la cual ingresa la causa, luego de haber transcurrido la fase de la averiguación preliminar y que coloca al fiscal en la situación de tener que adoptar la primer decisión procesal frente al régimen de alternativas diversas que establece la norma objeto de análisis (art. 241 del C.P.).

Esta norma encuentra un claro fundamento orientado hacia dos finalidades básicas. Por un lado busca darle al fiscal las posibilidades de encontrar el camino más adecuado al conflicto traído por la víctima, buscando que la demanda de tutela judicial encuentre una respuesta razonable que se adecúe al caso concreto. Por otro lado, busca elevar el nivel de respuestas razonables por parte del Estado frente a la demanda de intervención realizada por la ciudadanía. Mientras que algunos de los mecanismos consensuales y el criterio de oportunidad pueden considerarse un respuesta de elevada calidad institucional por cuanto, reconoce la existencia de un conflicto y se lo pretende tutelar adecuadamente teniendo en cuenta la especial situación puesta de manifiesto por la víctima; el archivo se considera una respuesta de baja calidad, por cuanto se trata de una decisión orientada a desechar la posibilidad de asumir la existencia del conflicto llevado por la victima a quien de un modo bastante simple se rechaza el caso, manteniendo el denunciante como única posibilidad, la opción de formular protesta por ante el Fiscal de Impugnación.

Realizada esta previa aclaración vamos a ingresar a analizar este régimen de opciones múltiples que propone este art. 241 del C.P.P.

**Art. 241: Valoración inicial**: Conocida la noticia criminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, **el Fiscal practicara una averiguación preliminar** para determinar las circunstancias del hecho. Dentro de los quince (15) días de individualizados los presuntos autores o partícipes del hecho **deberá adoptar o proponer alguna de las siguientes decisiones**.

1. La Incompetencia para conocer el hecho de que se trate.
2. La desestimación de las actuaciones.
3. Archivo de las actuaciones.
4. Aplicación de un medio alternativo de solución de conflictos.
5. La aplicación de un criterio de oportunidad conforme lo dispuesto en art. 231 del C. P. P.
6. La citación de quienes aparezcan como responsables del hecho delictivo a **audiencia de imputación.**

**Audiencia de imputación.**

La audiencia de imputación está previsto enart. 245 del C. P. P., que establece:

"Art. 245.- **Audiencia de imputación**. Cuando de los actos policiales, de las medidas de investigación del Fiscal o de las que requiriere al Juez de Garantías en el ámbito de la averiguación preliminar surjan elementos suficientes, el Fiscal dispondrá la

citación a audiencia de imputación mediante decreto en el que enunciará sucintamente los hechos a investigar, identificará al imputado y al agraviado, e indicará la calificación legal provisional. Durante la audiencia de imputación el Fiscal dará a conocer al imputado en presencia de su Defensor los fundamentos del decreto de citación, los elementos obrantes en las actuaciones y los derechos que este Código le acuerda. La comparecencia del imputado a esta audiencia será obligatoria y la citación se efectuará bajo apercibimiento de conducción por la fuerza pública, que el Fiscal dispondrá luego de constatar la correcta citación y la inexistencia de justificaciones por parte del imputado. Si en el curso de la investigación penal preparatoria surgiere que el hecho es diverso o más complejo que el descripto en el decreto de citación a audiencia de imputación originario, el Fiscal deberá proceder a su modificación incorporando una nueva descripción y llevar a cabo una nueva audiencia. Cuando el imputado se encontrase privado de libertad, la audiencia de imputación se realizará dentro del término de veinticuatro (24) horas del inicio de dicha situación, prorrogables fundadamente por otro tanto, cuando mediaren únicamente circunstancias de fuerza mayor." Art. 8°.- Sustitúyese el artículo 246 de la Ley 7690

**Diligencias para asegurar los elementos de prueba.**

El art. 246 del C. P. P., establece que aún antes de citar al imputado a audiencia de imputación, **el Fiscal Penal lleva a cabo diligencias para asegurar los elementos de prueba**. Las diligencias practicadas por el Fiscal se incorporan al legajo de investigación, que se forma con la A. P. Policial y la Averiguación Preliminar. El art. 247 establece que las partes serán notificadas y tendrán derecho a participar de todos los actos procesales productores de prueba. El art. 249 establece que **cuando deba practicar actos que por su naturaleza y características fuesen definitivos e irreproducibles el Fiscal deberá, bajo sanción de nulidad, notificar de ellos** previamente a las partes, sus defensores y mandatarios. El art. 253, establece el derecho de las partes de ofrecer pruebas.

Al respecto cabe tener presente que las diligencias para asegurar los elementos de pruebas por regla general no tienen valor probatorio para fundar la condena del acusado, conforme art. 255 C. P. P. que establece:

Art. 255.- **Invalidez probatoria**. Las actuaciones de la investigación penal preparatoria no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado, salvo las que surjan de aquellos actos cumplidos con las formalidades de los actos definitivos e irreproducibles y las que este Código autoriza introducir por lectura en el debate.

La investigación Penal preparatoria debe practicarse en el plazo de 4 meses a contar de la última declaración del imputado.

**Remisión de causa a Juicio**.

El Fiscal formula requerimiento de remisión de causa a juicio, cuando cuente con elementos de convección suficientes para sostener la participación

probable del imputado en el hecho que le fuera intimado (art. 433 C.P. P.). Se exige como presupuesto procesal que el imputado haya declarado o se haya abstenido de declarar en oportunidad de ser citado, bajo sanción de nulidad. El art. 434 establece los requisitos que debe contener el decreto de remisión de causa a juicio, bajo sanción de nulidad.

**Rol del juez de garantía**.

El Juez de Garantía interviene en la I. P. P., realizando el control de legalidad procesal y resguardo de las garantías constitucionales y especialmente garantiza los derechos del imputado en el proceso penal (ver art. 41 C. P. P. que establece su competencia). Asimismo cuando el Fiscal Penal formula requerimiento de remisión de causa a juicio, controla el cumplimiento de los requisitos de la acusación y la regularidad de la investigación penal preparatoria (Art. 436 C.P.P.).

**2.- EL JUICIO ORAL.**

Una vez completada esta etapa, llega el momento del juicio. Esta etapa consiste en un Juicio Oral, Público, Contradictorio y Continuo, donde se introducen legalmente al proceso a través de los medios de prueba pruebas previsto en el C. P. P., se analizan y valoran los elementos de pruebas que fueron recopiladas durante la Investigación Penal Preparatoria por el Fiscal y los que ofrecieron las otras partes.. A partir de este análisis, el juez (o jueces) emitirá el fallo correspondiente y establecerá la pena que le corresponde al autor del delito, en caso que esta autoría haya quedado demostrada.

A partir del libro tercero del Código Procesal Penal de Salta desde el art 437 rigen las disposiciones concernientes al juicio oral, que prevé en el Título I los Actos Preliminares, en el Título II el DEBATE propiamente dicho, en Título III el Acta de Debate y en Título IV La Sentencia.

**Actos preliminares.**

La fase preliminar del juicio comprende el control, de la corrección formal de la acusación (no de su fundamento probatorio), tanto en los requisitos internos que las leyes establecen cuidadosamente, como de la correcta realización de actos procesales que son sus antecedentes necesarios.

Una vez que la causa es recibida en el Tribunal de Juicio, se realiza la citación a Juicio (art. 437 del C. P. P.), notificándose a las partes para que el plazo de diez días comparezcan a juicio y examinen las actuaciones. En dicho plazo las pares pueden recusar a los integrantes del tribunal por los motivos previstos en art. 53; deducir excepciones (por ejemplo falta de acción por extinción de la acción penal); o plantear las nulidades que estimen corresponder.

Superado airosamente este examen, se desarrollarán luego una serie de actos preparatorios del debate, tales como el **ofrecimiento de pruebas**, a cuyo

efectos el tribunal notifica a las partes para que en el plazo de (10) ofrezcan las pruebas que solicitan se produzcan en el Juicio (así por ejemplo lista de testigo, peritos, etc). Esta etapa es de suma importancia ya que la parte que no ofreció pruebas dentro del plazo fijado, luego no puede hacerlo con el consecuente perjuicio a sus derechos.

Una vez cumplidos estos trámite el tribunal fija el día y hora de iniciación del debate.

**Debate** (art. 447 a 488 C. P. P.).

El debate es el núcleo central del juicio, que se lleva a cabo en forma oral, pública, continúa y contradictoria y con la presencia conjunta y permanente de los integrantes del tribunal, el fiscal, el imputado, su defensor y las demás partes, haciendo realidad las reglas de la inmediación y la identidad física del Juez. Tiene como fin que se conozca la acusación; se dé oportunidad para el ejercicio de la defensa material del acusado; se proceda a la recepción de las pruebas ofrecidas y admitidas, con vigencia del contradictorio y resguardo del derecho de defensa; y se produzcan los alegatos del fiscal, de los defensores del imputado, de las partes civiles y del querellante, tendientes a demostrar el fundamento de la pretensión que han ejercido o la falta de fundamentos, total o parcial, de la pretensión contraria, de conformidad a las probanzas colectadas en el mismo y los argumentos jurídicos pertinentes.

**Caracteres**

El debate se debe desarrollar con observancia de ciertos caracteres, que se analizan a continuación, señalándose en qué consiste cada uno, cuál es el fundamento de su imposición y las excepciones que se toleran legalmente y las sanciones que acarrea su inobservancia.

**Oralidad**

La oralidad implica que toda la actividad procesal del debate, es decir la producción de las pruebas, las instancias y alegaciones de las partes, y las decisiones de mero trámite del tribunal, se cumplirán de viva voz (art. 372). Ello potencia además “interactivamente” las virtudes individuales y combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física del juzgador, integrándolas en una unidad de funcionamiento en la realidad, que sólo puede separarse conceptualmente. Y hará realidad el derecho del acusado a ser oído (percibido por los sonidos de palabras pronunciadas de viva voz) públicamente por el tribunal que lo juzga, luego de obtener la comparecencia de testigos de cargo y de descargo, peritos, u "otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos", a interrogarlos en las mismas condiciones (tanto si son de cargo, como de descargo) (arts. 8.2.f, CADH; 14.3.e, PIDCP).

La oralidad asegura eficacia en el ejercicio del poder de acusar, efectiva posibilidad de contradicción y control reciproco de las actividades de la contraparte, razonable y adecuada defensa de los respectivos intereses y decisión final por parte de quienes asistieron al debate. Se ha sintetizado

señalando que la oralidad no es un fin en si mismo, sino el medio para lograr la vigencia plena de los principios esenciales del juicio, (v. gr., inmediación, publicidad, contradicción, identidad física del juzgador) a los que se alude precedentemente (Vélez Mariconde).

**Publicidad**

La publicidad es regulada como la posibilidad de que cualquier persona pueda presenciar el desarrollo total del debate y conocer luego los fundamentos de la sentencia. Esta característica, derivada de la exigencia de publicidad de los actos de gobierno, propio del sistema republicano, hoy tiene expresa vigencia como garantía para el acusado de máximo rango por la normativa supranacional incorporada al nuevo sistema constitucional (v. gr., art. 14.1, PIDCP: "ser oído públicamente"; art. 26, DADDH: "ser oído en forma... pública", art. 75 inc 22, CN) y permite el control popular sobre la administración de justicia, formando su opinión sobre las decisiones de los jueces, basada en lo que se vio y escuchó en un juicio.

La publicidad del juicio penal es altamente beneficiosa para asegurar un fallo justo, y evitar posibles arbitrariedades judiciales, pues los presentes en el debate, o su conocimiento y difusión a través de la prensa, pone a salvo a los jueces de eventuales presiones de los otros poderes del estado, o de grupos políticos o sociales y de las suspicacias que puedan acechar a la justicia cuando ésta actúa entre “sordas y mudas paredes” contribuyendo así a la transparencia de la función judicial y a la confianza en quienes la cumplen.

El acceso de la prensa al lugar de realización del debate, que permite conocer lo que en él ocurre a un considerable número de ciudadanos, es en la actualidad y por imperio de la normativa supranacional incorporada, un derecho de jerarquía constitucional (art. 14.1, PIDCP y 75 inc. 22 CN) que integra el concepto de publicidad y lo enriquece en relación a su concepción histórica. Por cierto que los avances de la tecnología y la globalización informativa determinan la necesidad de revisar y actualizar el concepto de publicidad del juicio, pues aquellos fenómenos le acuerdan hoy una dimensión diferente a la que tenía antes: pero “la publicidad del quehacer judicial no debe transformar a éste en un espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo que conspiraría contra el respeto que la magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión, no en la exposición pública de quienes lo llevan a cabo” (STJ de Cba., Acuerdo Reglamentario n° 331, Serie "A" del 11/IX/96).

**Contradictorio**

Durante el debate debe lucir en su máxima expresión el principio del contradictorio. Éste es derivación necesaria del mandato constitucional que estatuye la plena igualdad entre acusador y acusado en orden a sus atribuciones procesales, que favorece la mayor imparcialidad de los jueces. Exige no sólo la acusación del hecho delictivo cuya presunta existencia origina el juicio y la oportunidad de refutarla, sino que requiere, además, reconocer al acusador (fiscal y querellante), y al imputado y a su defensor, la atribución igual

de producir pruebas de cargo y de descargo, respectivamente, y la prohibición de que el tribunal de juicio las produzca “de oficio”; la igual facultad de todos ellos de controlar el ingreso al proceso de ambas clases de elementos probatorios; y la misma posibilidad de argumentar sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a la acreditación –o no– de la existencia y circunstancias de los hechos contenidos en la acusación y las consecuencias jurídico penales (e incluso civiles) de éstos.

En el debate el control de cada una de las partes sobre la recepción de la prueba, se lleva a cabo por medio de la audición y percepción personal de las manifestaciones del imputado, testigos y peritos, o de la lectura de documentos y la exhibición de los documentos y cosas secuestradas, o por la posibilidad de preguntar y repreguntar para lograr aclaraciones, precisiones, o destacar coincidencias o contradicciones, sin atenerse a pliegos de preguntas formulados antes de las declaraciones: es lo que se conoce como cross examination.

**Continuidad**

La continuidad (concentración temporal o unidad del debate) requiere la mayor aproximación temporal posible entre los momentos en que se plantean las hipótesis de la acusación y la defensa, se recibe la prueba, se argumenta sobre su resultado y se dicta la sentencia. De allí que el código (art. 374) exige que el debate (núcleo del juicio) se desarrolle durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias para su terminación (sin perjuicio de que se establezcan naturales intervalos entre una y otra sesión, necesarios para el “reposo físico y mental” y para “renovar energías). Apunta a garantizar la simultaneidad de la actuación de todos los sujetos del proceso, favorecer un mejor conocimiento y recuerdo de los datos probatorios y de los argumentos de los contendientes (pues en el ínterin se puede “olvidar lo ya debatido”), y a evitar soluciones de continuidad entre el inicio del debate y el dictado del fallo que comprometerían, además, la vigencia plena de los otros caracteres (v. gr., la dispersión temporal de la atención general afectaría los fines de la publicidad; intervalos frecuentes o prolongados podrían comprometer la inmediación, etc.).

**Inmediación**

La inmediación es el contacto personal, directo y permanente del tribunal, las partes y defensores entre sí, y con el imputado y los órganos de prueba. Es decir, entre los portavoces de los intereses en juego, los portadores de los elementos que van a dar base a la sentencia, y quienes deben dictarla decidiendo sobre aquellos intereses y en base a estos elementos. Sólo así tendrán sentido los derechos del acusado a “ser oído” y a interrogar a los testigos de cargo o a otras personas que puedan echar luz sobre los hechos, ya que ese tribunal, integrado por las mismas personas, será quien deba evaluar "el valor y la credibilidad" de cada declaración (testimonial, pericial, etc.) y de toda otra prueba, para establecer su eficacia a los fines de resolver

sobre la acusación y su refutación (y demás pretensiones que pudieran haberse ejercido).

Así se podrá conocer lo que cada parte pretende, y apreciar la personalidad de los que declaran, preguntar y contra preguntar, aclarar el sentido de sus expresiones, mejorar el conocimiento de aspectos técnicos (caso de peritos), formular y replicar conclusiones, etc. Permite, en síntesis, un contacto vital con los protagonistas del hecho de la vida que se juzga, con sus innumerables y particulares características.

**Actos del Debate.**

En fecha y hora fijada para la iniciación de la audiencia de debate, las partes, los testigos y peritos citados deben presentarse en la Sala de Juicio del Tribunal.

Una que se verifica la presencia de todas las partes (Fiscal, Querellante, Actor Civil, Imputado, Abogado Defensor y Civilmente Demandado) el Tribunal (Unipersonal o Colegiado) ingresa a la Sala. Uno de los Jueces preside el Juicio.

**Apertura**:

El juicio se inicia con la lectura de la Acusación Fiscal contenida en el Decreto de Remisión de Causa a Juicio, recomendando el Presidente al imputado que escuche atentamente el hecho por el cual es traído a Juicio. A continuación se hace pasar al estrado al Imputado, haciéndosele conocer que puede declarar libremente o que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad en su contra.

**Producción de Pruebas**:

Luego de la Declaración del Imputado se pasa a la etapa de producción de pruebas, recibiéndose Declaración a los testigos y peritos citados, quienes son interrogados por las partes, primero por el Fiscal y luego por la Defensa Técnica del Imputado, pudiendo los mismos repreguntar. Los documentos y actas se introducen al debate por lectura.

**Formación de la decisión - Alegatos:**

Concluida la recepción de las pruebas, el Presidente del Tribunal o Juez Unipersonal ordenará la formulación de los alegatos por parte del actor civil, del fiscal, del actor civil, del querellante, de los defensores del imputado, del demandado civil y del asegurador citado en garantía. Éstos serán los protagonistas. El Presidente en uso de su atribución de dirección del debate, sólo “moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes” sin “coartar por esto el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa”.

Este es un momento imprescindible para la vigencia efectiva del principio del contradictorio, que tiene como base la plena igualdad de las partes (incluso

las civiles) en orden a sus atribuciones procesales, entre las que se encuentran, no sólo las de afirmar y de refutar, las de ofrecer pruebas en apoyo de sus posiciones e intereses y controlar su ingreso, sino también la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos incriminadores (penal o civilmente) contenidos en la acusación, o los exculpatorios (penal o civilmente) afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico penales (y civiles, en su caso) de todos ellos. Sólo así podrá decirse que tuvieron la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende.

Cada uno de los intervinientes procurará demostrar, valorándolas, que las pruebas recibidas en el debate acuerdan suficiente fundamento a la pretensión que han ejercido, o la falta de fundamento de las pretensiones contrarias, según sean sus respectivas posiciones. Luego formularán sus “conclusiones”, es decir, sus concretos requerimientos de que el tribunal sentencie de acuerdo a sus respectivas pretensiones. Si bien no hay disposición legal sobre el contenido de los alegatos (salvo los de las partes civiles) éstos deberán estar razonablemente relacionados con el contenido (y el orden) de las cuestiones que deben resolverse en la sentencia. En ella se aprecia una concentración en el tiempo de los argumentos relacionados a la cuestión penal.

Los alegatos deben ser realizados oralmente: no pueden ser leídos. Esta imposición atiende más a garantizar el conocimiento público de ellos, propio de la publicidad popular que debe tener el juicio, que a la finalidad de lograr una mejor sistematización de la exposición o una mayor comprensión de los argumentos (o facilitar un más potente impacto de éstos sobre la convicción del tribunal). Muchos son los casos en que aquellos objetivos se lograrían más acabadamente, al menos con el auxilio de memoriales escritos. Si bien los alegatos tienden a lograr el convencimiento de los jueces, nada impide que también procuren la difusión pública de la fuerza y ecuanimidad de los argumentos que en ellos se desarrollan.

**Últimas palabras del imputado**:

Finalizados los alegatos, el tribunal concederá la “última palabra” al acusado, lo que por lo general funciona como una simple formalidad, como un inútil ademán elegante de la ley, desprovisto de cualquier incidencia real sobre la defensa material del imputado, sobre todo cuando los tribunales reducen la pregunta a si tiene “algo más que agregar” o quiere decir “algo que no haya dicho durante el juicio” (que no es lo mismo, por cierto, que preguntarle si “tiene algo que manifestar”). Desde luego que en esta oportunidad el acusado podrá agregar cuanto crea conveniente a su defensa (exculpación o atemperación de su responsabilidad jurídica penal); incluso puede admitir su responsabilidad.

Recién después el Juez o Presidente cerrará el debate, si interviniera un tribunal colegiado, a continuación se dictara la sentencia.

**La Sentencia.**

Es el acto de voluntad razonado del tribunal de juicio, emitido luego del debate oral y público, que habiendo asegurado la defensa material del acusado, recibido las pruebas ofrecidas con la presencia continua de las partes, sus defensores y el fiscal, y escuchado los alegatos de estos últimos, resuelve imparcial, fundadamente y en forma definitiva, sobre el fundamento de la acusación y las demás cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando, o absolviendo al acusado.

Ella deberá decidir objetivamente y en forma argumentada acerca de la regularidad y fundamento de aquélla (la acusación) y su posible negación (total o parcial, descargo, aclaraciones, o circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad penal) planteadas por el acusado. Pero sólo la admitirá como verdadera, y por ende la sentencia será de condena, cuando pueda inducir la culpabilidad del acusado de concordantes pruebas de cargo aportadas al debate por los órganos de persecución penal (en el marco de objetividad en el que deben cumplir sus funciones) o por el querellante particular, y que por no haber sido enervadas por las de descargo eventualmente ofrecidas por el imputado y su defensor, llevan a los jueces que la dictan a la convicción sobre que la acusación es verdadera, luego de considerar y dar respuesta a las argumentaciones de todos ellos sobre su fuerza conviccional. Si las pruebas no permitieran llegar a esa convicción, la sentencia será absolutoria.

Si se hubiera ejercitado la acción civil, resolverá si se hace lugar o no a la pretensión resarcitoria presentada y, en su caso, la extensión de la indemnización que acuerde y los responsables de afrontarla. También decidirá sobre el pago de las costas procesales.

El art. 485 del C. P. P. establece que si la sentencia fuera de CONDENA debe fijar la pena y medidas de seguridad que correspondan y si se hubiera ejercitado la acción civil, resolverá si se hace lugar o no a la pretensión resarcitoria presentada y, en su caso, la extensión de la indemnización que acuerde y los responsables de afrontarla. También decidirá sobre el pago de las costas procesales.

El art. 484 establece que cuando fuera absolutoria se ordenará la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente.

**UNIDAD III:**

Temario: La defensa técnica del personal policial en causas relacionadas con el servicio. Antecedentes históricos y legales. Departamento Asistencia Letrada: misión, dependencia orgánica, funciones. División Defensa Técnica Capital – División Defensa Técnica Interior – División Asesoría Jurídica Preventiva: funciones. Defensores policiales: identidad, teléfonos, ubicación física de la dependencia. Asistencia, voluntaria y gratuita, casos. Secreto profesional y reserva de la información. Oportunidad para solicitar la defensa técnica. Trámites internos para acceder al servicio. Intereses contrapuestos, prevaricato. Obligaciones de los abogados. Obligaciones de los imputados. Estrategia de la Defensa. Querellante particular. Demandas Civiles. Gastos extraordinarios. Finalización de la asistencia. Análisis de casos concretos.

| **1) LA DEFENSA TECNICA DEL PERSONAL POLICIAL EN CAUSAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO POLICIAL** |
| --- |

La defensa penal del personal policial está contemplado en la Ley del Personal Policial Nº 6193/83, que en su art. 34 que dice ***“Son derechos esenciales para el personal policial en actividad: inc. j) La defensa por Asesoría Letrada General de la Institución en los juicios penales o acciones civiles que se le inician por particulares con motivo de actos o procedimientos del servicio, o motivado por éste”****.-*

| **2) ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGALES** |
| --- |

El artículo nº 36 “in fine” de la Ley n° 6192/83 “Ley Orgánica Policial” (actualmente derogada y reemplazada por la Ley nº 7742/12), establecía que: ***“… Un funcionario policial de la jerarquía de Comisario General del Cuerpo Profesional, será el Jefe de Asesoría Letrada, correspondiéndole las funciones de asesoramiento jurídico de la Jefatura de Policía y la Plana Mayor Policial. También intervendrá en la defensa letrada del personal policial que fuera objeto de acusaciones o sospechas por actos ocurridos con motivo del servicio, en procesos substanciados entre los Tribunales de la Provincia…”.***

Por su parte, en el artículo 34 inc. j) de la Ley nº 6193/8 “Ley del Personal Policial”, se estipula: “… Art. 34.- ***Son derechos esenciales para el personal policial en actividad:… j) La defensa por Asesoría Letrada General de la Institución en los juicios penales o acciones civiles que se le inician por particulares con motivo de actos o procedimientos del servicio, o motivado por éste***…”.

En cumplimiento de tales normas legales, con la finalidad de brindar asistencia jurídica al personal policial que hubiere resultado acusado o sospechado de delitos como consecuencia de actos o procedimientos del servicio, asegurando el patrocinio legal como una obligación institucional, mediante la Resolución de Jefatura de Policía n° 579/01, homologada por la similar n° 001/02 de la ex Secretaría de la Gobernación de Seguridad, se creó la División Asistencia Letrada dependiente de la Dirección de Asesoría Letrada, siendo aprobado el reglamento orgánico y funcional, mediante la Resolución nº 63/03 (ex SGS).

Al derogarse la Ley nº 6192/83, en el año 2.012, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica Policial (Ley nº 7742/12), la cual modifica la estructura de la Policía de la Provincia creándose la Dirección General de Asuntos Jurídicos (que reemplaza a la Dirección de Asesoría Letrada), lo que motivó que mediante la Resolución 79/13 de la Secretaría de Seguridad se de vida institucional al Departamento Asistencia Letrada (ex División Asistencia Letrada).

| **3) DEPARTAMENTO ASISTENCIA LETRADA: MISION, DEPENDENCIA ORGANICA, FUNCIONES** |
| --- |

La misión del Departamento Asistencia Letrada es la asistencia jurídica preventiva, de todas las dependencias de la Provincia, orientando el proceder policial, conforme a la normativa vigente; como así también la Defensa Técnica Jurídica del personal policial en actividad, en los procesos penales que se le inicien por actos o procedimientos del servicio o motivados por este. Dicha asistencia comprende la defensa penal y el patrocinio letrado o representación en las actorías civiles, procesos por querella y civiles originados por hechos comprendidos en éste artículo, cuando el personal actué en dichos procesos como actor civil, civilmente demandado o querellante, demandante o demandado civil, conforme lo previsto en el artículo 34 Inciso j) de la Ley 6193/83.

El citado Departamento depende orgánicamente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

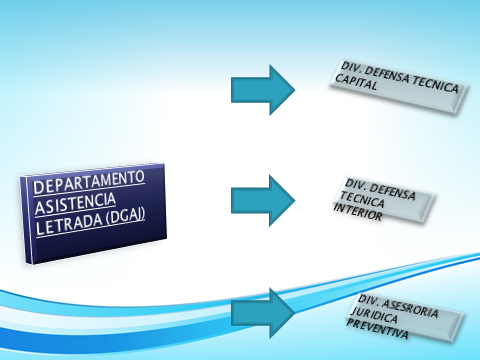
Son funciones de tal organismo:

a) Velar por el buen desempeño funcional del personal de la Institución Policial, para lo que tendrá a cargo prestar el Asesoramiento Jurídico Preventivo, a las dependencias y/o Direcciones Unidades Regionales, en todo procedimiento policial cuando así lo requiera el personal a cargo del mismo.

b) Brindar al personal policial la asistencia jurídica prevista en el marco legal establecido por el Art. 34 inc. j) de la Ley 6193/83 del Personal Policial, conforme lo previsto en el Art. 23 del presente reglamento.

| **4) DIVISION DEFENSA TECNICA CAPITAL – DIVISION DEFENSA TECNICA INTERIOR – DIVISION ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA: FUNCIONES** |
| --- |

El Departamento Asistencia letrada cuenta con las siguientes áreas, como se podrá observar en la siguiente imagen:



**La DIVISION DEFENSA TECNICA CAPITAL** tiene las siguientes funciones:

1. Brindar la defensa técnica jurídica en los procesos penales que se le inicien por actos o procedimientos del servicio o motivados por este, conforme lo previsto en el artículo 34 inciso j) de la Ley 6193/83; el patrocinio letrado o representación en las actorías civiles y en los procesos por querella originados por hechos relacionados con el servicio, cuando el personal actué en dichos procesos como actor civil, civilmente demandado o querellante y el patrocinio letrado o representación en las Demandas civiles, que se hayan incoado por hechos comprendidos en la primera parte de este inciso.

1. Elaborar y dictaminar en lo atinentes a planes de capacitación, manuales y protocolos relativos a la defensa del personal policial, como así a los que tengan como finalidad prevenir errores que conlleven a la formación de causas penales y/o promoción de demandas civiles en contra del personal o la Institución.
2. Dictar cursos de capacitación en cuestiones atinentes al área de su competencia.
3. Brindar asesoramiento integral al personal que así lo requiere con relación a un hecho privado no relacionado con el servicio que afecte al personal policial (en cuestiones de Derecho de Familia, Embargos, etc.), que sean derivados por la conducción superior, Departamento Bienestar y Calidad de la vida Laboral y/o División Psicosocial (DGRH). Dicho asesoramiento se brindará los días sábados en horario de turnos.

La competencia territorial de la citada División es por el Distritos Judicial Centro, y estará a cargo de un Oficial Jefe con el título de Abogado, entre algunas funciones se puede mencionar: a) Rechazar las causas que sean contrarias a los deberes impuestos a los abogados, por el código de ética profesional; b) Distribuir las causas a los abogados del Gabinete Profesional, asignándole la estampilla profesional respectiva; c) Efectuar el control y seguimiento de las causas asignadas a los profesionales abogados, verificando la reposición del estampillado profesional; d) Coordinar con los responsables de las distintas áreas la implementación cursos y clases de academia para el personal de las distintas Dependencias Policiales, sobre temas inherentes a su competencia; e) Intervenir en forma conjunta con el letrado asignado o Jefe de Departamento, en las causas que por su complejidad, trascendencia pública o envergadura requieran mayor atención, como así en otras que considere necesarias para descomprimir la labor de los otros profesionales; f) Asistir, con autorización de la Conducción Superior de Policía, a las charlas, conferencias, simposios, disertaciones y cursos de actualización, perfeccionamiento, o de post grado que guarden estricta relación con las funciones asignadas; g) Ejercer la conducción, dirección y el control directo de la División a su cargo en forma integral, asegurando su buen gobierno, administración y disciplina; h) Dictar cursos de capacitación en cuestiones atinentes al área de su competencia.

La **DIVISION DEFENSA TECNICA INTERIOR**, tiene las mismas funciones que la División Defensa Técnica Capital en las circunscripciones territoriales de los distritos judiciales Norte (Orán y Tartagal) y Sur (Metan), encontrándose a cargo de un Oficial Jefe con título de abogado, con los deberes y facultades mencionados anteriormente.

La **DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA PREVENTIVA** tiene por misión constituir un órgano de asesoramiento técnico jurídico de las dependencias policiales en cuestiones atinentes a procedimientos policiales, está a cargo de un Oficial Jefe con título de Abogado, entre algunas de sus funciones se puede mencionas las siguientes: a) Brindar asesoramiento jurídico a las dependencias policiales antes, durante y luego del cumplimiento de funciones de policía de seguridad o auxiliar de justicia; b) Asesorar al personal policial en cuestiones atinentes a accidentes de trabajo o enfermedades laborales, confeccionándole los escritos que deban presentar ante las Comisiones Médicas; c) Elaborar y dictaminar en lo atinente a planes de capacitación, manuales y protocolos de actuación relativos al cumplimiento de funciones de policía de seguridad y auxiliar de justicia; d) Dictar cursos de capacitación sobre la temática de su competencia.

| **5) DEFENSORES POLICIALES: IDENTIDAD, TELEFONOS, UBICACIÓN FISICA DE LA DEPENDENCIA** |
| --- |

A continuación se brinda los nombres que actualmente se desempeñan como Abogados defensores en materia penal en el Departamento Asistencia Letrada (DGAJ):

| **CRIO INSP. DR. MARTIN ESTEBAN CHAILE MALDONADO**  **JEFE DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIA LETRADA (DGAJ)** |
| --- |

| **CRIO. DRA. CELESTE GAUNA**  **JEFE DIVISION DEFENSA TECNICA CAPITAL (DAL)** |
| --- |

| **SUB CRIO. DR. PABLO A. GONZALEZ**  **JEFE DIVISION DEFENSA TECNICA INTERIOR (DAL)** |
| --- |

| **OF. PPAL. DR. CARLOS ROJAS**  **JEFE DIVISION ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA (DAL)** |
| --- |

| **SUBF. PPAL. DR. ESTEBAN PINTO**  **DEFENSOR PENAL (DAL)** |
| --- |

| **SGTO. DR. PABLO ALBORNOZ**  **DEFENSOR PENAL (DAL)** |
| --- |

| **CBO. DRA. MALVINA ARIAS**  **DEFENSORA PENAL (DAL)** |
| --- |

La Institución Policial cuenta con varios abogados para el asesoramiento constante en las distintas áreas de la Repartición, pero sobre este punto cabe aclarar que los letrados mencionados anteriormente son los únicos autorizados por Jefatura de Policía para ejercer la Defensa Penal del personal policial denunciados por hechos relacionados con el servicio.

El Departamento Asistencia Letrada (DGAJ) se encuentra ubicado en la Sub Comisaria Campo Castañares (DUR1), sito en calle Jaime Durand y Perito Moreno de esta Ciudad.



Otros datos de interés:

* El correo electrónico del citado departamento es el siguiente: [asistencialetrada@hotmail.com](mailto:asistencialetrada@hotmail.com).
* Horario de atención:
* LUNES A VIERNES: hs. 07:00 a 23:00
* SABADOS, DOMINGOS y FERIADOS: hs. 09:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00

| **6) ASISTENCIA – VOLUNTARIA – GRATUITA – CASOS** |
| --- |

Partiendo de lo dispuesto por el Art. 142 del Código Procesal de la Provincia que expresa lo siguiente: ***“Defensor del imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de la matricula o por el defensor oficial”;*** *e*l personal policial que se encuentra imputado por hecho relacionado con el servicio, a los efectos de ejercer su defensa debe nombrar un Abogado, pudiendo optar voluntariamente por los siguientes defensores:

a) contratar un abogado particular,

b) designar un defensor oficial del Ministerio Público,

c) designar un abogado de la Institución Policial.

Si los efectivos, optan por un Abogado de la Institución se dará intervención al Departamento Asistencia Letrada (DGAJ), para que un profesional de la citada área ejerza la defensa, de manera gratuita.

Cabe aclarar que la intervención de los abogados del Departamento Asistencia Letrada en las causas penales no es de oficio, muy por el contrario el imputado deberá optar voluntariamente por este servicio que brinda la Repartición policial, para lo cual tendrá comunicarse o presentarse personalmente en la sede de tal organismo y suscribir toda la documentación pertinente.

Otros de los derechos con que cuenta el imputado lo prevé el Art. 153 del Código Procesal de Salta, que expone: ***“Sustitución del defensor. La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de elegir en cualquier momento otro de su confianza…”,*** por lo que puede presentarse el caso que el imputado haya optado por un abogado de la Institución, sin embargo es su voluntad de nombrar otro abogado del foro local, lo puede hacer libremente siendo obligación del mismo comunicar en forma inmediata de esta situación al Departamento de Asistencia Letrada.

También puede surgir que por la complejidad de la causa penal sea necesario nombrar un codefensor para que también defienda al imputado, encontrándose esta situación también prevista por el Código Procesal de la Provincia en su art. 150 que dice: **“Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido por más de dos (2) abogados…”**

| **7) SECRETO PROFESIONAL Y RESERVA DE LA INFORMACION** |
| --- |

El personal policial que opto por un defensor de la Institución, tiene derecho y los abogados y demás funcionarios destinados en el Departamento Asistencia Letrada tienen la obligación de guardar celosamente secreto de la información que hayan conocido con motivo del cumplimiento de sus funciones (entrevistas, consulta con abogados, etc.), con las salvedades establecidas por la Ley; lo cual constituye una garantía de reserva para la seguridad y el buen nombre del personal que policial.

Así también, toda la documentación que el personal policial que aporte para su defensa y toda otra relacionada con la causa, tiene que ser archivada en carpetas individuales, teniendo éstas el carácter de reservadas, pudiendo sólo podrá brindarse copia al personal destinatario de la asistencia, estando prohibido remitir copias a otras áreas de la Institución y/o para agregarlas en actuaciones administrativas.

| **8) OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA DEFENSA TECNICA- TRAMITES INTERNOS PARA ACCEDER AL SERVICIO.** |
| --- |

Los servicios de asistencia jurídica podrán brindarse en cualquier etapa del proceso. En caso que la asistencia se solicite en oportunidad de ser citados para prestar declaración de imputado, el imputado deberá entrevistarse previamente con el profesional que lo asistirá jurídicamente, siendo obligación de este realizar la coordinación respectiva.

El personal policial deberá seguir los siguiente trámites para solicitar asistencia letrada:

1. Cualquier personal policial sin distinción de jerarquía, podrá solicitar los servicios del Departamento Asistencia Letrada mediante nota presentada siguiendo la vía jerárquica o bien en forma personal, debiendo especificar número de causa, carátula (Ej: Delito: Apremios Ilegales; Vejaciones; Abuso de Autoridad, etc.), Juzgado que interviene, fecha de audiencia de imputado si estuviera fijada, aportar antecedentes del hecho del que se lo acusa, al momento de solicitar la asistencia.
2. Una vez que se verifica que la causa guarda relación con el servicio, se hace firmar al solicitante un **Poder** designando como abogado defensor a un profesional del citado Departamento, a fin de que este lo represente durante la tramitación del proceso.
3. Se procede al registro de dicha nota, otorgándole número de expediente de la División, iniciándose el trámite administrativo para la compra de la estampilla profesional.
4. Con la entrega de Estampilla al Profesional interviniente en la causa, hace su presentación (en la Fiscalía, Juzgado o Tribunal correspondiente) a los fines de su intervención, asumiendo la defensa y participación en los actos del proceso, debiendo este adjuntar en la carpeta respectiva la constancia de reposición de la estampilla profesional.
5. El personal asistido, tiene la obligación de comunicarse urgente en caso de recibir alguna cédula de notificación por cualquier acto procesal: ampliación de audiencia de imputación, reconocimiento en rueda de personas, careo, etc., a fin de coordinar la asistencia pertinente con el profesional designado y para que este tome participación de la audiencia fijada, ya que en algunos casos el juzgado, tribunal y/o fiscalía omite la comunicación al abogado defensor en la causa y/o legajo de investigación.
6. En caso de urgencia o cuando se encuentra algún personal detenido en alguna dependencia, el profesional de turno deberá concurrir al lugar para el asesoramiento respectivo, ofrecimiento de la asistencia y en caso que esta sea aceptada, actúa en forma inmediata realizando las presentaciones que correspondan ante el Fiscal Penal y/o Tribunal de Garantía que intervenga en la causa. Los Jefes y Oficiales de Servicio de turno de las dependencias policiales operativas (Comisarías, Sub Comisarías, Destacamentos y Unidades Especiales), dependientes de la D.G.S., D.G.I. y D.G.D.P., deberán comunicar al Departamento Asistencia Letrada, en forma inmediata cuando un personal policial se encuentre detenido por hechos relacionados con el servicio, solicitando la presencia de los profesionales abogados de turno de las áreas respectivas a fin que brinden los servicios previstos en este reglamento.

| **9) INTERESES CONTRAPUESTOS, PREVARICATO.** |
| --- |

**INTERESES CONTRAPUESTOS**

El Código Procesal de Salta en el Art. 154 expresa: ***“Defensor común. La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un (1) Defensor común siempre que no existan, entre ellos, intereses contrapuestos. Si esto fuera advertido, se proveerá aún de oficio a las sustituciones necesarias”***.

Este texto se refiere a los casos de pluralidad de imputados que, al igual que en los individuales, tienen el derecho de elegir su defensor. El legislador no distingue entre defensor particular y defensor oficial, de manera que el Fiscal o el Juez de Garantías tampoco debieran hacerlo.

Pues bien, aquí se autoriza a esos imputados para que, pudiendo elegir su defensor cada uno, escojan a uno solo que se encargue de la defensa de todos. La única limitación es que no existan intereses contrapuestos entre los imputados, lo que sucederá si uno de ellos se ha defendido atribuyendo al otro toda la responsabilidad por el hecho mismo, si la defensa material de otro afecta a los restantes, etc.

El legislador autoriza para que, apenas fueran advertidos los intereses contrapuestos, se provean las sustituciones necesarias. La importancia de la defensa dentro del proceso lleva a que el legislador autorice a proceder de esta forma sin esperar el pedido de ninguna de las partes, es decir de oficio.

Cuando la ley dice “sustituciones necesarias”, autoriza a una instrumentación que sea lo más razonable posible. De esa manera, lo primero que debe hacerse es advertir la anormalidad a que se refiere artículo. Lo siguiente, es hacer conocer lo sucedido a todos los imputados ajenos a los intereses contrapuestos, para que procedan a designar otro abogado de su confianza y luego, seguir el trámite establecido en el artículo 143 del Código Procesal Penal de Salta que expresa: “Oportunidad de la designación. Toda persona que supiera o se creyere investigada podrá designar abogado defensor a partir del inicio de la causa. En la resolución que disponga la declaración del imputado, el Fiscal lo intimará a la designación de defensor bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere dará intervención al defensor oficial que corresponda” (bibliografía: “Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, Comentado, Anotado y Concordado”- Tomo I – Miguel Antonio Medina – pag. 304 y 305).

**PREVARICATO**

La figura del PREVARICATO se encuentra prevista en el ART. 269 del Código Penal que dice: ***“(Prevaricato del juez y de personas equiparadas) Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores”***.

1.- Consideraciones sobre el bien jurídico protegido: la función jurisdiccional conferida al juez o, en su caso, a árbitros o amigables componedores, se ve afectada por un acto infiel de éstos, lo cual constituye un atentado contra la administración de justicia.

El prevaricato es una infidelidad cometida por los jueces o personas equiparadas, con violación de sus deberes esenciales, siendo el bien jurídico penalmente tutelado la administración pública y, puntualmente, la administración de justicia.

2.- Estructura Típica: TIPO OBJETIVO: a) sujeto activo: el juez, el árbitro y el arbitrador amigable componedor. El primero es el que integra la Planta del Poder Judicial nacional o provincial en forma permanente o accidental, que tiene competencia para conocer y resolver como letrado o lego en asuntos judiciales, sea cual fuere su grado o competencia, sea que forme un tribunal unipersonal o colegiado, así como también si desempeña la función de manera interina, por suplencia o en forma circunstancial, como puede ser un conjuez. Aunque llamados jueces, no son sujetos activos de esta figura los funcionarios encargados de aplicar reglamentos, a quienes solo podrá imputárseles abusos. Respecto de los árbitros y arbitradores amigables componedores, las partes les entregan de común acuerdo, o en los casos que las leyes señalan, la solución de las controversias, de manera que resuelvan como si fueran los jueces y con análogas facultades, por lo que también pueden ser sujetos activos del tipo; b) acción típica: se configura objetivamente el delito cuando: se dictaren resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez; o se citaren, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. El prevaricato de derecho se configura cuando el sujeto activo dicta una resolución contraria a la ley invocada. El prevaricato de hecho se configura cuando el sujeto activo dicta una resolución cuyo fundamento reposa en la invocación, cita o alegación de acontecimientos, situaciones o circunstancias de cualquier especie o resoluciones de una autoridad pública, judicial o no, inexistentes o que evidentemente carecen de la significación que se les atribuye. TIPO SUBJETIVO: el prevaricato es un delito doloso. El juez tiene que saber que resuelve contra lo que dispone la ley que invoca como fundamento de su fallo, o que los hechos o las resoluciones en que se funda no existieron, o no existieron con el significado que él les otorga. Se requiere dolo directo, cuyo aspecto cognoscitivo exige el conocimiento de la contradicción existente entre lo invocado y lo decidido, y el volitivo, el querer decidir en función de esa contradicción.

| **10) OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS** |
| --- |

El profesional designado debe ejercer el cargo con la mayor responsabilidad y esmero, debiendo en lo posible participar de todas las audiencias fijadas por el tribunal, realizar un seguimiento permanente del movimiento de las causas, brindando en todo momento una defensa técnica efectiva, acorde al concepto desarrollado en sus fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo esto contemplado por el Código Procesal Penal de Salta en el artículo 151 que nos dice: ***“Obligatoriedad. El ejercicio del cargo de Defensor será obligatoria para el abogado de la matricula que lo acepte, salvo excusación atendible o impedimento legal”.***

| **11) OBLIGACIONES DE LOS IMPUTADOS** |
| --- |

El personal policial que optare por el servicio que brinda la Institución Policial, por intermedio del Departamento Asistencia Letrada, tiene las siguientes obligaciones:

1. Pedir asistencia urgente – citaciones para el día siguiente en la Fiscalía Penal.
2. Recopilar antecedentes (copias, testigos, etc.).
3. Asistir a las reuniones con los abogados (obligación de los JN de dar permiso).
4. Contarle la verdad al abogado.
5. Preguntar por el estado de su causa.
6. Colaborar con el abogado para el ofrecimiento de prueba.
7. En caso de nombrar un abogado particular revocando la defensa brindada por la Institución Policial, comunicar esta situación en forma inmediata al Departamento Asistencia Letrada (DGAJ).
8. Abonar los gastos de peritos particulares propuestos.

Lo que no debe hacer el personal policial:

1. Engañar al Abogado en cuanto  los hechos y sus detalles, pues  un abogado no puede defenderle contra lo que él no conoce.
2. Mentirle al abogado acerca de que  testigos, que en realidad son falsos (Secreto Profesional).
3. Acudir tarde al abogado, dejar pasar un tiempo precioso.
4. Creer que si le convencemos de algo al abogado ya tenemos algo ganado.
5. Como nos creemos muy inteligentes, intentar llevar el caso y hacer que el abogado siga el plan que nosotros trazamos.
6. Testificar sin hacer consultado al abogado.

El personal policial para evitar malos momentos en las AUDIENCIAS que se desarrollen dentro del proceso penal deberá tener en cuenta lo siguiente:

* 1. Trate de asistir de civil.
  2. No porte el arma reglamentaria.
  3. Lleve el documento de identidad.
  4. Sea puntual.
  5. No se presente en estado de ebriedad o con aliento etílico.
  6. Si está enfermo, avise a su abogado con antelación y hágale llegar el certificado médico.

Así también se recomienda la personal policial lo siguiente:

* 1. Tomando conocimiento a través de la identificación simple que se le instruye una causa penal en su contra tiene derecho, y así se recomienda, antes de ser dispuesta su declaración como imputado, a presentarse al Fiscal o ante el Juez de Garantías, personalmente o por escrito, por sí o por intermedio de un defensor, para hacer las aclaraciones e indicar las pruebas que a su juicio sean pertinentes y útiles. Recibido el pedido de asistencia en esta etapa el defensor designado deberá aconsejar al imputado que realice primeramente antes del decreto de citación a audiencia de Imputación, una presentación realizando su correspondiente descargo y ofreciendo pruebas.
  2. Notificado del Decreto de citación a audiencia de Imputación, fijada fecha para la Declaración, se recomienda, inmediatamente ponerse en contacto con un Asistente Letrado, para que lo acompañe a la audiencia fijada y tomen conocimiento de los hechos que se le imputa, a los fines de prestar la declaración, ya sea que se efectúe en forma oral o posteriormente por escrito, con el objeto de ofrecer o poner en conocimientos de todas las pruebas existentes en su favor o de descargo (Ej., certificados médicos, copias de Libro de guardia, testimoniales, etc.) o bien ejercer el derecho constitucional de abstenerse de declarar. En esta etapa deberá el abogado defensor, reunirse con sus defendidos, a los fines de acordar la forma de llevar a cabo su defensa.
  3. Causas elevadas a Juicio – Ofrecimiento de Pruebas: En esta etapa es fundamental que el ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa se realice antes del vencimiento del término de Citación a Juicio (Art. 441 del C.P.P.). Las pruebas que ofrezca la defensa serán las que se producirán en el debate y en caso de no haberlo hecho en esta oportunidad, las que se pretenda hacer valer con posterioridad por lo general son rechazadas por extemporáneas. Por lo expuestos se recomienda al personal que cuando sea notificado por el tribunal de juicio para ratificar defensa, en forma inmediata coordine con su defensor las pruebas que se ofrecerán.

| **12) ESTRATEGIA DE DEFENSA** |
| --- |

Las estrategias de defensa entre un caso y otro nunca serán iguales, aunque pueden parecerse, ya que siempre cambian según las características de cada caso. Mucho de esto tiene que ver con la forma en la cual el Abogado aborda la situación; la defensa debe contrarrestar los actos del fiscal, por lo cual es posible que se deba modificar la estrategia cada vez que se realizan preguntas al acusado, cuando se proporcionan pruebas y cuando se advierte con claridad la estrategia que empleará el fiscal.

Por supuesto, cualquier estrategia de defensa penal se determinará antes de que el caso sea presentado ante el tribunal; sin embargo, esto no significa que permanecerá invariable. Por ejemplo, el abogado de la defensa podrá decidir si es conveniente demostrar por qué el acusado no estaba en la escena del crimen mediante una coartada y, por tal motivo, evidenciar que era imposible que el acusado cometiera el delito. Sin embargo, ante el tribunal, el fiscal podrá presentar testigos o pruebas contundentes (como videos) que demuestren que el acusado estaba en la escena del crimen. Cuando esto ocurre, la defensa debe actuar y demostrar por qué el acusado, a pesar de haber estado presente, no fue el culpable.

Hay quienes creen que un abogado defensor simplemente mentirá acerca de lo que su defendido hizo o no hizo; sin embargo, este no suele ser el caso. Decir simplemente la verdad suele ser mucho más fundamental. En muchas situaciones, esto es así porque el acusado es inocente y el abogado simplemente debe demostrar esto ante el tribunal.

La importancia de decir la verdad radica en que dos afirmaciones verdaderas pueden causar diferente impresión a un jurado, según cómo se afirmen los hechos. En general, lograr obtener toda la verdad de la situación permitirá desestimar los cargos, cuando se logra conocer la totalidad de la situación.

El personal policial que optare por la defensa con un abogado de la Institución Policial, éste comenzará a estudiar el caso y planificara diversas actuaciones, recabar la mayor cantidad de datos y evidencias posibles, dialogara con el imputado, para luego aplicar sus conocimiento profesional y poder realizar una estrategia de defensa del imputado para poder acreditarlos ante la Justicia. Hay que tener muy en cuenta que los recursos con los que cuente el defensor dependerán del momento de su designación, pues puede asumir la defensa técnica en cualquier fase del proceso.

El objetivo del profesional suelen ser variados: desde lograr un sobreseimiento (antes del juicio) o la absolución del imputado – tras someterse a un tribunal -, y en caso de condena segura, lograr que esta sea la más baja posible.

| **13) QUERELLANTE PARTICULAR - DEMANDAS CIVILES** |
| --- |

También en este asunto el profesional del Departamento Asistencia Letrada, en el caso que el personal resulte damnificado de un delito a raíz de su intervención en un procedimiento policial. En tal situación se lo patrocina en la constitución de Actor Civil o Querellante Conjunto a solicitud del damnificado. Como así también se dará el patrocinio letrado en las Demandas civiles, que se hayan incoado por hechos relacionados al servicio. En ambos casos los gastos necesarios para la interposición de la demanda y los costos del proceso estarán a cargo del efectivo que solicitó la asistencia.

| **14) GASTOS EXTRAORDINARIOS** |
| --- |

Que en algunos casos resulta necesario hacer uso de oros medios científicos y tecnológicos que brindan mayor eficiencia en la actividad probatoria dentro del proceso penal para demostrar la inocencia del imputado, pudiendo el Abogado luego de realizar un estudio de la causa ofrecer Perito de Parte, como ser Médico Legal, Licenciado en Criminalística entre otros.

El Dr. J.A. Clariá Olmedo considera que el perito es un experto un conocedor especializado por el estudio o por la práctica de un arte, oficio, ciencia o técnica, quien a requerimiento del tribunal y conforme a determinados trámites legalmente regulados, produce dictamen sobre cuestiones concretas que escapan al alcance común de las personas; y el Dr. Hernando Devis Echandía conceptualiza una exhaustiva definición: “La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de un encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente”.

Que este ofrecimiento probatorio que considera de vital importancia el Abogado Defensor, tiene un costo que no es absorbido por la Institución Policial, debiendo los imputados erogar con los gastos que genera la pericia ofrecida, ello de conformidad con lo normado por el art. 351 del Código Procesal Penal de Salta, que expresa: “Honorarios. Los peritos intervinientes, tendrán derecho a cobrar honorarios…”.-

| **15) FINALIZACION DE LA ASISTENCIA** |
| --- |

La asistencia finaliza, cuando se obtenga el sobreseimiento y/o absolución y/o archivo de la causa por la que fue asistido, procediéndose a solicitar al Juzgado y/o Fiscalía interviniente, copia de la resolución dictada, a los efectos entregársela al personal que se le brindo asistencia jurídica. Con respecto a la carpeta individual de la causa, se procederá a disponer el Archivo, desglosándose la Resolución Judicial para el archivo en el bibliorato, previo insertar como novedad para la estadística semestral y/o anual.

| **16) ANALISIS DE CASOS CONCRETOS** |
| --- |

**REQUERIMIENTO DE JUICIO – FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS.**

*“…FUNDAMENTOS: Así expuestos los hechos, se tiene que la conducta desplegada por el personal policial en ejercicio de sus funciones en fecha XXXX a horas XXXX aproximadamente; encuentra encuadre en el delito de VEJACIONES AGRAVADAS, según lo normado por el Art. 144 bis inciso 2° en función del último párrafo del mismo artículo (el cual nos remite al agravante del Art.142 inciso 1º), toda cada vez que los acusados XXXX y XXX, personal policial del XXXX y a bordo del móvil XXX, llegan primero al lugar y son los efectivos que detienen a XXXXX, practicando actos violentos contra la integridad física del damnificado, que le tiraron gas pimienta para luego practicar disparos con las marcadoras, directamente contra su humanidad. Haciendo luego su aparición el móvil XXXX de la División de Infantería con los efectivos XXXX; XXXX; XXXXX, y XXXXX quienes en ejercicio de sus funciones, habrían acometido contra la integridad física de la víctima, ya que lo agarran, lo tiran al piso, lo ahorcan y golpean en la cabeza, luego en el móvil continuaron golpeándolo, ahorcando, le faltó el aire y quedó medio inconsciente, un policía presionó sus rodillas y los otros policías, de atrás lo golpearon, resultando lesionado, con lo cual se produjo un menoscabo en su integridad física. Todo ello corroborado por las declaraciones de los testigos presenciales y por las constancias medicas adjuntadas en autos…”.*

**REQUERIMIENTO DE JUICIO – FISCAL DE DERECHOS HUMANOS**

*“… FUNDAMENTOS: Así planteados los hechos, concluye ésta Fiscalía con mérito incriminador, que se cuentan con elementos suficientes que permiten afirmar que el Sr. XXXXXX quien circulaba en el móvil del XXX como acompañante en fecha XX de XXX de XXX a hs XXX., descendió del mismo y les solicitó al denunciante XXXX y a sus acompañantes que se pusieran contra la pared, para luego descender del móvil el chofer XXXXXXX, quien le dio un golpe con la cachiporra en la frente del lado derecho lo cual se encuentra documentado a fs. XX y vta. en certificado médico expedido por profesionales del CIF donde refiere que el damnificado presenta herida contusa suturada de 2,5 centímetros localizada en región frontal derecha, la cual fue producida por golpe contra elemento romo o contundente. Asimismo la versión del damnificado se ve respaldada por las testimoniales de los Sres. XXXXX, quien se encontraba al momento de la detención junto Huertas y presencio el momento en que el efectivo policial le dio un golpe en la cabeza con la cachiporra y la testimonial del Sr. XXXXXX, quien refiere haber visto a un efectivo policial con la cachiporra en alto ya un masculino agarrándose la cabeza…”.*

**REQUERIMIENTO DE JUICIO – FISCAL PENAL DE DERECHOS HUMANOS.**

*“… RELATOS DEL HECHOS… Las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia del Sr. (victima 1), DNI XXXX, con domicilio en XXXX, quien denuncia que en fecha XXXXXX, siendo horas XXX aproximadamente, en circunstancias que regresaba de su trabajo caminando al pasar por XXXX a la altura de la pasarela que une Villa XXX y Villa XXXX, observa un enfrentamiento entre personal policial y un grupo de personas desconocidas, por lo que espera un rato para que termine el conflicto, transcurrido unos minutos, cuando se apacigua la situación decide continuar, en ese momento aparecen diez uniformados y le disparan con bala de goma en la zona de las piernas, hombro izquierdo, pecho y ojo derecho, que los impactos le producen lastimaduras y el impacto en el ojo le produce la pérdida del mismo, que los disparos fueron efectuados por personal de la policía y a una distancia de cinco metros aproximadamente, desconoce la dependencia a la que pertenecen y fue asistido en el hospital XXXXX, donde lo operaron para extraerle el ojo derecho…”; “… por el testimonio del damnificado (Victima 2), expresa que en fecha XXXXXX, había ido a acompañar a su esposa hasta la parada del colectivo en Villa XXXXX, que pasan la pasarela peatonal cuando pasan no había ninguna novedad, no había problemas, cuando regresa y estaba a dos casas de cruzar la calle para tomar la pasarela hace su aparición en forma imprevista una camioneta blanca de la policía, con números, no recuerda, se bajan tres policías con uniforme azul, con chalecos, los tres portaban armas largas, tipo escopeta con doble caño, uno arriba del otro color negra, quienes comenzaron a dispararle sin razón alguna, que en el primer disparo siente los impactos de seis balas de goma en el sector de su pecho y en el ojo derecho, sintió caliente su cara cuando comenzó a sangrar, escuchaba cuando remontaban las armas, aclara que los tres policías que se bajaron fueron los que le dispararon, que le dispararon a una distancia de diez metros más o menos, luego el dicente se asusto y quiso irse corriendo cuando estaba a punto de entrar a la pasarela y le pegan con la culata del arma en la cabeza, que no logra ver a su agresor, porque tenía tapándose el ojo con una mano, luego viene otro policía y le mete patadas, una en la pierna derecha y la otra en las costillas derechas, luego le quitan una zapatilla, le dicen que se vaya y entonces le vuelven a disparar dos veces, le dan en la espalda que llego a contar treinta y ocho lesiones, marcas de las balas de goma que tenía en el cuerpo, sin contar las del ojo, agrega que uno de los policías le enseñaba su zapatilla y se le burlaba…”*

**SENTENCIA CONDENA – TRIBUNAL DE JUICIO**

*“…. Es que si bien el personal policial está facultado por la Ley hacer uso de la fuerza pública en ejercicio legitimo de sus funciones, la normativa es muy clara al establecer que ello solo en la medida de lo razonable y cuando las circunstancia del caso así lo exijan, conforme al Art. 10 Inc. C de la Ley Orgánica Policial de la Provincia de Salta N° 7742, es decir como ultimo arbitrio para imponer su autoridad en los procedimientos o intervenciones licitas resistidas violentamente por los delincuentes o infractores, requisitos que –como se acaba de aplicar- no concurrieron en el caso, mas aun ni siquiera dieron la orden de alto, si no que irrumpieron violentamente e intempestivamente, al decir de la Sra. XXXX “como malón”, “levándose puesto” al damnificado XXXXXX, “rodeándolo” (conf. XXXXX). Así mismo al golpearlo con la tonfa, bastón o cachiporra (armas impropias) en las zonas de la cabeza, ojo y cara (nariz, golpe que fueron dados en esos lugares porque esa fue la dirección que le imprimieron, lo hicieron en zona del cuerpo humano de alta vulnerabilidad, ya que con un solo golpe se puede generar lesiones graves e incluso hasta la muerte de una persona. Esto último no resulta antojadizo ni una exageración de la suscripta, desde que en causa s/c Bravo Francisco David p.s.a. Homicidio Preterintencional, Expte. B -24-000 de la Cámara de Crimen Decima Nominación de Córdoba precisamente se juzgo a un personal policial por haber causado la muerte de una persona al darle un golpe con la tonfa en la sien derecha de la cabeza…”.*

**UNIDAD IV**:

Temario**: 1)** Derechos Humanos y actuación policial: Derechos Humanos concepto, caracteres, clasificación, normativa constitucional. Principios básicos y valores de actuación, art. 10 Ley 7742/12. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Reglamento para el Uso de la Fuerza Pública. **2)** Régimen Disciplinario Policial: Normas generales. Faltas. Sanciones. Forma de represión de las faltas: Sumario Administrativos. Derechos del investigado de pasar vista a las actuaciones. Situación del Personal Policial que se encuentra acusado por comisión de delito relacionado con el servicio: Iniciación de causa penal. Iniciación de Sumario Administrativo. Suspensión Preventiva. Intervención de Oficina de Asuntos Internos. Consecuencias de la Investigación Administrativa: a) Inhabilitación para consideración de Junta de Calificaciones y tratamiento condicional, b) Retiro obligatorio por antecedentes desfavorables. Derecho de defensa material y técnico en el procedimiento administrativo disciplinario. Recursos contra Resolución que impone sanción disciplinaria.

**DERECHOS HUMANOS y ACTUACION POLICIAL:**

**Derechos Humanos, Concepto, caracteres, clasificación, normativa constitucional.**

**CONCEPTO:** Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano.

**CARACTERES:** Los derechos humanos se encuentran revestidos con las siguientes características:

* **Inherentes**: le pertenecen de manera innata a los seres humanos; independientemente de su origen cultural, social, económico o político.
* **Universales**: toda persona posee dignidad y nadie puede ser discriminado o excluido. Los derechos son comunes a todos los seres humanos del mundo, son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva pues estos derechos son de y para todas y todos*.*
* **Inalienables:** Pertenecen a la esencia misma de las personas humanas, lo que impide renunciar a ellos; como tampoco enajenarlos o transmitirlos.
* **Imprescriptibles**: ya que no son susceptibles de perderse por el no uso voluntario o compulsivo. Porque el paso del tiempo no los extingue, no tiene plazo de vencimiento, por ejemplo los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
* **Indivisibles e interdependientes**: son un todo; en consecuencia, no puede establecerse una jerarquía entre unos y otros. Están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y al derecho a la alimentación. En este mismo sentido, la violación de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otro u otros).-

**CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:** Sostiene Pedro Nikken (1994) que en el estudio de los derechos humanos se han elaborado distintas clasificaciones, con el fin de determinar las características que correspondan a cada grupo, pero no con el objeto de establecer jerarquía entre ellos. La clasificación se basa en un criterio que distingue generaciones y responde al orden de aparición de los mismos en la historia.

* **Los derechos civiles y políticos o de “la primera generación**”, se establecieron desde el siglo XVIII a principios del siglo XX y constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Son derechos individuales: a) civiles y b) políticos. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Ej. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, en caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.

Dentro de estos derechos, el más importante es el derecho a la vida, constituyendo el fundamento básico de la prohibición de las torturas y humillaciones. Están destinados a la protección del ser humano, individualmente considerado, contra cualquier agresión, especialmente de un órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos que tienen por objeto la tutela de la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida pública. Estos derechos son inmediatamente exigibles y frente a ellos los Estados están obligados a establecer un orden jurídico político que los respete y garantice.

Desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se agregaron un conjunto de derechos que ya no consideran exclusivamente al individuo, sino que lo sitúan en un grupo social determinado, sea por su actividad o por necesidad de protección especial como la ancianidad, la niñez, el desempleo, etcétera. Exigen del Estado políticas activas de protección, promoción e intervención en la vida social.

* **Segunda generación de derechos humanos o “derechos económicos, sociales o culturales”:** Se vincula con la noción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a la familia humana. Estos derechos son exigibles en la medida en que el Estado disponga de los recursos para satisfacerlos. Ej. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, etc.-

**Los derechos de “tercera generación”:** Fueron promovidos a partir de las décadas del 60 y 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. También llamados “derechos de incidencia colectiva”, destacan entre ellos el derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología y a un medio ambiente sano y equilibrado, los derechos de los consumidores, al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de lo pueblos. Se invoca con estos derechos la búsqueda de una solución a los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. También se habla de los derechos de los pueblos originarios o de “cuarta generación” corresponden a los derechos de solidaridad, que son reconocidos a partir de la década de 1980. Quienes los poseen son los sujetos colectivos como un pueblo, una nación, una etnia, una comunidad. Se garantizan mediante la participación solidaria de todos los miembros de la sociedad o sea el Estado, las organizaciones no gubernamentales y públicas y los individuos. Estos derechos son demandados a los Estados, pero también los Estados pueden exigir cualquiera de ellos. Para hacerlos efectivos es necesaria la participación de la comunidad porque se requiere la creación de condiciones para su efectiva realización, Ej. La autodeterminación; la independencia económica y política, La paz.

**NORMATIVA CONSTITUCIONAL**:

Los derechos humanos comprenden tanto derechos como obligaciones. En este sentido los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.

La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos.

La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Los derechos humanos se encuentran receptados en nuestro derecho interno en los 11 Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que enumera el artículo 75 inc. 22, los cuales con la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional, mientras que todos los otros tratados no enumerados en dicho artículo sobre derechos humanos podrán alcanzar también la misma jerarquía con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

* Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
* Declaración Universal de Derechos Humanos;
* Convención Americana sobre Derechos Humanos;
* Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;
* Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
* Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
* Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer;
* Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
* Convención sobre los Derechos del Niño.

Con posterioridad a la reforma de 1994, se aprobaron los siguientes documentos, todos ellos con rango constitucional: 1) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y 2) Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

**PRINCIPIOS BÁSICOS Y VALORES DE ACTUACIÓN, ART. 10 LEY 7742/12:**

Sobre este punto, es dable destacar que, en la Provincia de Salta, el uso de la fuerza pública se encuentra reglamentado por resolución de Jefatura de Policía N° 11267/11, por su parte la Ley provincial N° 7742/12 que rige a la Policía de Salta, en el capítulo relacionado a los principios básicos y valores de actuación, art. 10, se menciona que el obrar policial está sujeto a los principios de legalidad, razonabilidad, responsabilidad y ética profesional, con privilegio de la tarea preventiva y disuasiva por sobre el uso de la fuerza, la cual en caso de resultar necesario ese accionar debe ser en forma moderada y gradual con la finalidad de evitar 55 un mal mayor; enumerándose en el mismo capítulo de la citada ley otros principios y valores que hacen a una correcta actuación operativa de la fuerza de seguridad policial de la provincia.

**Art. 10; Ley 7742**: El personal de la Policía de la Provincia de Salta, en el desempeño de sus funciones, deberá observar los siguientes principios básicos de actuación policial:

1. Ejercer los actos propios de sus funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia, en cualquier momento y lugar de la Provincia, en cumplimiento y observancia de los requisitos establecidos por Ley.
2. Actuar con sujeción a los principios de legalidad, razonabilidad, responsabilidad y ética profesional, privilegiando la tarea preventiva y disuasiva por sobre el uso de la fuerza.
3. En aquellos casos en que resulte necesario el uso de la fuerza pública, la actuación deberá ser moderada y gradual para evitar un mal mayor a la integridad física, la vida, la libertad, los bienes, derechos propios o de terceros, y para restablecer las condiciones de seguridad pública.
4. Observar en todo momento el respeto hacia las personas y los principios de imparcialidad e igualdad ante la Ley, protegiendo los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y de la Provincia.
5. No infligir, instigar o tolerar actos de tortura, apremios u otros tratos crueles, ultrajantes, inhumanos o degradantes de la condición y dignidad humana.
6. No acatará ni podrá invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancia especial o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad personal o de cualquier especie.
7. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas que llegaren a su conocimiento, especialmente las referidas a menores, a menos que el cumplimiento del deber legal o los requerimientos de la justicia exigieren revelarlas, en cuyo caso se deberá actuar con la mayor cautela al respecto.

**CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY:**

El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 34/169 del 17 de diciembre de 1979, constituye un instrumento internacional sobre derechos humanos que aborda la cuestión de la ética profesional en la aplicación de la Ley.

Establece criterios mínimos para el cumplimiento de las funciones del personal policial, entre los que se destaca la importancia de la protección de la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos, el control en el uso de la fuerza, y la persecución de todas las formas de corrupción.

Este Código de Conducta consta de artículos y mediante la educación, la capacitación y la vigilancia, pasen a ser parte del credo de todo funcionario encargado de hacer cumplir la Ley. No es un Tratado, sino que pertenece a la categoría de instrumentos de autoridad que proporcionan orientación a los Gobiernos en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la justicia penal.

Este código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.-

**Artículo 1:** Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad por su profesión.

**Comentario:**

* 1. La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
  2. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.
  3. En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
  4. Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal.

**Artículo 2:En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.**

Comentario:

1. Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
2. En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos.

**Artículo 3: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.**

Comentario:

1. En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
2. El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.
3. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

**Artículo 4: Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.**

Comentario:

Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.

**Artículo 5**: **Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.**

Comentario:

1. Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General, y en la que se estipula que: "Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos."
2. En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:

"[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos."

1. El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha sido definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.

**Artículo 6: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.**

Comentario:

1. La "atención médica", que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite.
2. Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.
3. Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.

**Artículo 7: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.**

Comentario:

1. Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos.
2. Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto. Debe entenderse que la expresión "acto de corrupción" anteriormente mencionada abarca la tentativa de corrupción.

**Artículo 8: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.**

**Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.**

Comentario:

1. El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación o la práctica contienen disposiciones más estrictas que las del presente Código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas.
2. El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente Código.
3. El término "autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas" se refiere a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la legislación nacional, ya formé parte del órgano de cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente Código.
4. En algunos países puede considerarse que los medios de información para las masas cumplen funciones de control análogas a las descritas en el inciso c supra. En consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalaran las violaciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de información para las masas.
5. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

**REGLAMENTO PARA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA**

**Resolución Nº 11267/11 Jefatura de Policía.**

**Finalidad.** Regular el uso de la fuerza pública por parte del personal policial, que durante el cumplimiento de las funciones policiales de Seguridad y Judicial, debe hacer uso de tal potestad.

**Necesidades que satisface.** Proporciona las herramientas básicas y fundamentales para el personal que realiza las funciones policiales de Seguridad y Judicial, a fin de evitar sanciones penales o administrativas que pongan en situación de peligro la estabilidad del personal policial.

**Artículo 1.- Objetivo.** Las disposiciones del presente son de orden público, interés social, de observancia obligatoria general en la Provincia de Salta y tienen por objeto reglamentar el uso de la fuerza que ejerce la Policía Provincial, en cumplimiento de sus funciones de Policía de seguridad y judicial, conferidas por la Ley Orgánica Nº 6192/83 y sus modificatorias.

**Artículo 2.- Interpretaciones**. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

* 1. **Armas de fuego:** las autorizadas para el uso policial de conformidad a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;
  2. **Armas incapacitantes no letales:** las que son utilizadas para detener a un individuo;
  3. **Armas letales**: las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o muerte;
  4. **Detención:** la restricción de la libertad ambulatoria de una persona por la Policía, en los casos que lo autorizan la Constitución Provincial y demás normativa vigente;
  5. **Policía**: funcionario público, a quien se le atribuye ese carácter mediante nombramiento o acto administrativo equivalente, que sea miembro de la Policía de la Provincia;
  6. **Resistencia pasiva**: cuando una persona se niega a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por la Policía, cuando el efectivo actuante se ha identificado previamente como tal;
  7. **Resistencia violenta de una persona**: cuando una persona realiza acciones u omisiones con el propósito de provocar lesiones a si mismo, a un tercero o al Policía o con el fin de dañar bienes propios o ajenos, a efecto de impedir que sea detenido;
  8. **Resistencia violenta agravada**: cuando las acciones u omisiones de una persona representan una agresión real, actual o inminente y sin derecho a la vida propia, de terceros o del Policía, a efecto de impedir que sea detenido;
  9. **Reducción**: la contención que el Policía ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de asegurarla; y
  10. **Uso legítimo de la fuerza:** la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de reducción sobre las personas de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

**Artículo 3**.- Todo Policía tiene derecho a la protección de su vida e

integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía. Además, desempeña un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Administración Pública proporcionarle la atención médica, psicológica y jurídica que, en su caso, requiera.

**Artículo 4**.- El Estado Provincial, debe garantizar en forma efectiva al personal policial en actividad, el derecho de ser asesorado y la defensa técnica, en todo proceso iniciado en su contra por hechos acaecidos en cumplimiento del servicio, como así de brindar la cobertura y asistencia médica general en aquellos casos que resultare afectado al momento de hacer uso de la fuerza pública.

**CLASIFICACIÓN DE ARMAS**

**Artículo 5**.- La Institución Policial asignará las armas solamente al Policía que hubiere aprobado la capacitación establecida para su uso y el examen psíquico correspondiente, y éste a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas.

A fin de disminuir la necesidad de utilizar armas de cualquier tipo, es obligación de la Administración Pública, a través de la Secretaría de Seguridad, de conformidad con sus funciones, dotar a la Policía del equipo necesario para su protección, acorde con la función que desempeña.

Queda prohibido portar armas no provistas o autorizadas por la Institución, durante el horario de servicio.

**Artículo 6**.- La Policía podrá tener a su cargo y proveer las siguientes armas:

1. Incapacitantes no letales:
2. Bastones, tolete, tonfas, baritas de goma o su equivalente, de acuerdo a las disposiciones aplicables;
3. Esposas o candados de mano; y
4. Sustancias y gases irritantes.
5. Letales:

a.- Armas de fuego y municiones permitidas.

**Artículo 7**.- La Institución Policial conforme a las características que se establezcan, deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada Policía.

**USO DE LA FUERZA**

**DE LOS PRINCIPIOS GENERALES**

**Artículo 8**.- Cuando estén en riesgo los derechos de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana, la Policía podrá utilizar la fuerza, siempre que se rija y observe los siguientes principios:

1. **Legal**: que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Nacional, a la Ley Orgánica de la Policía de Salta, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables;
2. **Racional**: que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:
3. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;
4. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;
5. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;
6. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;
7. Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
8. **Congruente**: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona;
9. **Oportuno**: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
10. **Proporcional**: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler.

Ningún Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.

**Artículo 9.-** El Policía podrá hacer uso de la fuerza, en las siguientes circunstancias:

I.- Cuando una persona, se resista a la detención en los casos autorizados por leyes.;

II.- En cumplimiento de un deber legal u órdenes lícitas dictadas por autoridades competentes;

IV.- Prevenir y hacer cesar la comisión de delitos o contravenciones; V.- Proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o

VI.- Por legítima defensa.

**Artículo 10.-** Los distintos niveles en el uso de la fuerza son:

I.- **Persuasión o disuasión verbal**: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía cumplir con sus funciones;

II.- **Reducción física de movimientos**: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de neutralizar a la persona que se ha resistido, atentado u obstaculizado que la Policía cumpla sus funciones.

III.- **Utilización de armas incapacitantes no letales**: a fin de reducir la resistencia violenta de una persona; y

IV.- **Utilización de armas de fuego o de fuerza letal**: a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona, o en defensa propia o de terceros. No quedando autorizado el uso del arma letal con fines de advertencia, siempre que se utilicen municiones denominadas “de propósito general”.

V.- **Utilización de armas de fuego o de fuerza letal sin uso de municiones denominadas PG (Propósito General)**: a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona, o en defensa propia o de terceros, pero siempre que se cumplan los requisitos, recomendaciones y limitaciones vigentes para evitar un daño mayor.

**Artículo 11**.- El Policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:

I.- No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y

II.- Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes.

**Artículo 12**.- El Policía obra en legítima defensa cuando repele una agresión real, actual o inminente e ilegítima, siempre que exista necesidad en la defensa, racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados.

El Policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

La persuasión o disuasión verbal realizada por el Policía en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa.

**DE LAS REGLAS PARA LA DETENCIÓN**

**Artículo 13**.-Las privaciones de la libertad ambulatoria de las personas en flagrancia o en cumplimiento de órdenes giradas por la autoridad administrativa o judicial deben realizarse de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 14**.- El Policía para realizar dichas privaciones de la libertad de una persona deberá observar las siguientes reglas:

1. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;
2. Comunicar en el acto la restricción o privación de la libertad, en forma comprensible la causa de la misma.
3. Comunicar a la persona privada de la libertad ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que la acompañen para su puesta a disposición; y
4. Situar a la persona privada de la libertad a disposición de la autoridad competente.
5. Se prohíbe la aplicación de torturas, tratos inhumanos y degradantes.

**Artículo 15**.- La Policía cuando en la restricción o privación de la libertad de una persona necesariamente ejercite el uso de la fuerza, deberá atender lo siguiente:

I.- Procurar en lo posible no ocasionar daños o que sean los mínimos necesarios según las circunstancias, en la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad psicofísica;

II.- Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:

* 1. Persuasión o disuasión verbal;
  2. Reducción física de movimientos;
  3. Utilización de armas incapacitantes no letales; y
  4. Utilización de armas de fuego.

III.- No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

**Artículo 16**.- Cuando la Policía utilice la reducción física de movimientos para lograr la detención de una persona observará los siguientes criterios:

* 1. Se utilizarán cuando la persuasión o disuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para el ejercicio de sus funciones;
  2. Usará técnica que no ocasionen daños o que sean los mínimos necesarios según las circunstancias;
  3. Inmediatamente a la reducción de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro para sí misma, para la Policía o para terceros.

**Artículo 17**.- La Policía utilizará armas incapacitantes no letales para impedir que la persona que se intenta reducir se produzca un daño mayor a sí misma, a ésta o a otras personas y poder trasladar a la persona reducida ante la autoridad correspondiente.

**Artículo 18**.- En caso de que la persona que se intenta neutralizar oponga resistencia utilizando un arma, el Policía seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan:

1. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para:
2. Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona;
3. Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma.
4. Inmovilizar y someter a la persona;
5. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona sometida, para evitar daños o lesiones a sí misma, a la Policía o a terceros;
6. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente.

**Artículo 19**.-En caso de la utilización de armas letales, el Policía deberá velar por la vida e integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas de la legítima defensa, garantizando el menor daño posible a la persona que se intenta someter y considerando la seguridad de terceros y del propio Policía.

**Artículo 20**.- Cuando la Policía someta a una persona está obligado a asegurarla de inmediato.

En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, la Policía podrá utilizar las esposas o dispositivo similar. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible a su integridad física y emocional.

**Artículo 21.-** En el uso de las esposas o dispositivo similar, la Policía deberá:

1. Emplearlas exclusivamente para neutralizar a una persona, en caso que no se haya logrado tal objetivo con la persuasión o disuasión verbal;
2. Utilizarlas, en su caso, para el aseguramiento de una persona;
3. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido provistas o autorizadas por la Institución;
4. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el aseguramiento de la persona por dicho nivel de fuerza;
5. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;
6. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción innecesario sobre la persona asegurada;
7. En caso de traslado de la persona, colocarlo en una de las plazas y con el cinturón de seguridad del vehículo durante éste; y
8. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario.

**Artículo 22**.- Una vez asegurada la persona para su traslado ante la autoridad competente, el Policía deberá:

1. Realizar el examen médico obligatorio.
2. Trasladar a la dependencia, Alcaidía o Centro de Contraventores en el menor tiempo posible.
3. Informar el motivo de la detención;
4. Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos que estén presentes, el lugar donde se trasladará; y
5. Informar, en el momento de la detención, sobre el derecho de ser asistida técnicamente por cualquier abogado de su confianza.
6. Iniciar las actuaciones sumarias pertinentes, conforme las normas vigentes.

**Artículo 23**.- El uso de armas letales será siempre la última y extrema posibilidad, cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza. En su caso, se podrán considerar previo a la utilización de otros niveles de fuerza, si la circunstancia lo amerita y se cumple debidamente con las condiciones que para su utilización señala la Ley y el presente Reglamento.

Para el uso de las armas letales, deberá observarse las previsiones del art. 12º segundo párrafo del presente reglamento.

**DE LAS REGLAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD CIUDADANA**

**Artículo 24**.- En caso de incendios, inundaciones, sismos, huracanes u otras situaciones de riesgo inminente en el que existan situaciones graves que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas, la Policía preventiva y complementaria, en caso de que sea necesario usará la fuerza para evacuar a alguna persona, cumpliendo con las siguientes reglas:

1. Se identificará a la persona o personas y se les informará sobre la situación a fin de intentar convencerlas para que abandonen los lugares de riesgo; y
2. Se utilizarán de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, sin llegar a utilizar las armas letales y conforme a lo establecido en el presente reglamento.

**Artículo 25.-** El Policía no podrá usar armas letales en la dispersión de manifestaciones. En caso de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, la Policía deberá:

1. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta;
2. Advertir claramente que, de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza;
3. En caso de que los manifestantes no atiendan al Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en el presente Reglamento;
4. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales, conforme lo determinado la reglamentación pertinente.

Se considera que una manifestación es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.

**Artículo 26**.- La Institución Policial inmediatamente a que tengan conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos, pondrá en ejecución el plan operativo definido y necesario para garantizar el ejercicio de este derecho, para proteger los de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta.

**Artículo 27**.- Los operativos ante los casos de una manifestación deberán atender las reglas y principios vigentes en tal sentido, y además deberán cumplir con lo siguiente:

* 1. Determinación del mando responsable del operativo;
  2. La definición de la persona responsables de las comunicaciones y negociaciones con los manifestantes;
  3. El análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo pacífico de la manifestación;
  4. La estrategia para repeler acciones violentas de los manifestantes en caso de que la manifestación se torne violenta;
  5. Las tácticas para aislar a las personas que dentro de una manifestación se comporten de manera violenta; y
  6. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.

**Artículo 28**.- Cuando la Policía brinde apoyo a las autoridades administrativas o judiciales para el cumplimiento de sus funciones en relación con desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, planificarán con anticipación y conforme a las reglas y principios vigentes, los operativos que se requieran, los cuales deberán cumplir con lo siguiente:

1. Determinación del mando responsable del operativo;
2. La estrategia necesaria para controlar una eventual resistencia;
3. Los procedimientos para que las acciones policiales causen el menor daño posible a las personas;
4. Las acciones secundarias para el reforzamiento de la seguridad y las garantías; y
5. Las demás operaciones policiales necesarias para restablecer la paz pública y la seguridad ciudadana en caso de resistencia violenta. En este caso, se deberán evitar las tácticas provocadoras y en todo momento, se deberán adoptar estrategias de protección a las libertades y derechos humanos, mismas que deberán ser humanitarias, eficaces y rápidas.
6. **REGIMEN DISCIPLINARIO POLICIAL**

**Régimen disciplinario: Normas generales:**

El régimen disciplinario se aplica al personal policial con Estado Policial y por lo tanto al personal en actividad y al personal en situación de retiro en los casos previsto por la reglamentación.

**Independencia del Régimen disciplinario:**

Este principio surge dela interpretación armónica de los artículos 96, 98 y 99 del reglamento que establecen que : Desde el punto de vista disciplinario, la conducta del personal se juzgará exclusivamente de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento. Si existiere condena del funcionario en juicio criminal, no podrá objetarse en sede administrativa la existencia del hecho principal que constituyó el delito, ni la culpa del condenado (art. 96); que las sanciones, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que puedan quedar sujetos los responsables por el hecho cometido y de los cargos que podrá formular la Jefatura en sus haberes por perjuicio ocasionado en los bienes de la institución (art. 98 y que cuando el mismo hecho se juzgue también en sede penal, la amnistía o indulto del delito, el sobreseimiento o la absolución judicial, la extinción de la acción penal y el perdón del querellante particular o actor civil del proceso penal, no eximen de aplicar la sanción disciplinaria que correspondiere (art. 99).

**Faltas disciplinarias:**

Constituye falta de disciplina toda infracción a los deberes policiales establecidos expresamente o contenidos implícitamente en los reglamentos y disposiciones en vigor (art. 101 Decreto 1490. El Reglamento clasifica las faltas en:

1. Muy Graves (art. 104, 105 y 106 R.G.). Se sancionan con Destitución por Cesantía o Exoneración o Suspensión mayor de 15 días.
2. Graves (art. 107 y 108 del reglamento general). Se sancionan con arresto mayor de 30 días, suspensión mayor de 7 días o Destitución por Cesantía o Exoneración.
3. Leves (art. 109, 110 y 111 R. G. ). Se sancionan con arresto de 3 a 30 días.

**Forma de Represión de las faltas:**

Las faltas leves se reprimen mediante la confección de la planilla de castigo y las faltas muy graves y graves se reprimen previa instrucción del correspondiente sumario administrativo (Art. 155 R.G.).

**Sanciones**:

El art. 46 de la Ley 6193/83 establece los siguientes tipos de sanciones:

1. Apercibimiento;
2. Arresto;
3. Suspensión;
4. Destitución por cesantía; y
5. Exoneración.

El Apercibimiento es un llamado de atención que se realiza al personal que cometió una falta. Conforme lo prevé el art. 49 de la Ley, podrá anticiparse verbalmente, en forma reservada y en términos claros, preciso y moderados, de manera que no importen una afrenta a la persona del causante. Se confirmará por escrito para la notificación y archivo en el legajo personal.

El arresto consiste en la simple detención del personal superior y subalterno en los lugares y condiciones que determine la reglamentación correspondiente (art. 52). En la práctica se cumple con doble horarios de servicio (5 hs. Extras al horario habitual) conforme lo prevé el art. 55 de la Ley y el personal femenino puede solicitar cumplimiento de arresto domiciliario, cuando tuviere hijos menores de 14 años de edad.

La Suspensión consiste en la privación temporal de los deberes y derechos esenciales del estado policial, excepto los determinados por los incisos a), e), f), g), h), i), k), l), m), y n) del Art. 28° de esta ley y los incisos a), b), g), h), i) j) n), ñ) y p), del Art. 34°, la misma no podrá exceder de treinta días ni puede ser menor de siete (arts. 57 y 58 de la Ley).

Destitución: Recibe el nombre de destitución la sanción disciplinaria expulsiva que importa la separación del castigado de la Institución policial, con la pérdida del estado policial y los derechos que le son inherentes. La destitución sólo puede disponerse por decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, a solicitud de Jefatura de Policía; conforme a la gravedad de la falta, recibirá un de las denominaciones siguientes: a. Cesantía; y b.

Exoneración: la cual sólo podrá ser decretada cuando mediare condena por delito doloso o por faltas muy graves en perjuicio la

Institución (arts. 60 y 61 de Ley 6193).

Para tratar la temática de **actuaciones administrativas**, se tomará como base el Instructivo sobre actuaciones administrativo elaborado en el año 1.999, adaptado a las nuevas disposiciones del Decreto 1490/14.

**Forma de Represión de las faltas**:

Las faltas leves se reprimen mediante la confección de la planilla de castigo y las faltas muy graves y graves se reprimen previa instrucción del correspondiente sumario administrativo (Art. 155 R.G.).

**Instrucción Sumario Administrativo:**

NORMAS APLICABLES: Las normas que rigen en nuestra Institución para la substanciación de Sumario Administrativo son la Ley nº 6.193/83 del Personal Policial y Reglamento General de la Policía de Salta. En los casos no previstos por nuestra legislación específica, se aplica supletoriamente Ley nº 5.348/78 de Procedimiento Administrativos para la Provincia de Salta, conforme lo prevé el art. 1º de la citada Ley.

**Sumario Administrativo – Casos en los que procede ordenar instrucción:**

Art.ículo190º.- CASOS: Corresponde ordenar la instrucción de sumarios: a) Cuando se trate de faltas muy graves o graves. b) En los casos en que contra el personal policial se haya requerido juicio en el proceso penal. Autoridad que Ordena la Instrucción.-El Art. 176 Inc. c) establece que el caso de pérdida o grave deterioro del arma reglamentaria o daños de significancias de bienes del Estado tramita por Sumario Administrativo.

**Orden de Instrucción o Promoción:** El art. 191 establece que la orden de proceder a la instrucción del sumario deberá ser escrita y emanará: a) Del Jefe o Sub Jefe de la Policía de la Provincia. b) De los Directores Generales. c) Del Director de Investigaciones Administrativas. d) De los Directores de los Institutos de formación. e) De los Jefes de los Departamentos de Sumarios. Duración

**Plazo de Instrucción**: El art. 192 establece que la instrucción del sumario no puede durar más de treinta (30) días hábiles desde el avocamiento del instructor hasta la emisión del informe, no computándose en ese término las demoras por diligencias que deban practicarse fuera del lugar de la instrucción. Este plazo puede ampliarse Cuando por razones no imputables a la autoridad que instruye el sumario, éste no pudiere estar concluido en los términos establecidos en el artículo precedente, se podrá solicitar la **ampliación** de dicho término por única vez, señalando: a) las causas de la demora, b) diligencias que faltan y c) el tiempo de la ampliación que se estima necesario (art. 193).

**Tramitación**: El sumario cuenta con las siguientes diligencias:

* 1. INICIACIÓN: El sumario se inicia por denuncia o de oficio. La denuncia puede ser verbal o escrita. La iniciación de oficio puede ser por informes simples, informes de relevancias, copias de denuncias, de oficios, de expedientes administrativos, de actuaciones penales. y toda documentación de la que surja causal de sumario. Habitualmente se inicia en base a informes de relevancias que las dependencias elevan a la instancia superior.
  2. ORDEN DE INSTRUCCIÓN O PROMOCIÓN: El Informe de relevancia, copia de denuncia o informe simple se eleva por vía Jerárquica hasta el Jefe de Policía y luego es devuelta a los fines de la instrucción del Sumario Administrativo pertinente. El art. 191 de R.G.P.S. establece que la orden de proceder a la instrucción del sumario deberá ser escrita y emanará: a) Del Jefe o Sub Jefe de la Policía de la Provincia. b) De los Directores Generales. c) Del Director de Investigaciones Administrativas. d) De los Directores de los Institutos de formación. e) De los Jefes de los Departamentos de Sumarios. La orden de instrucción de los sumarios que se instruyen en el ámbito de la Institución Policial por lo general proviene de los Jefes de Departamentos Policiales y son instruidos en los Departamentos Sumarios dependientes de Dirección de Investigaciones Administrativas (D.G.R.H.).

Cuando los informes o denuncias se refieren a hechos de relevancia en los que se encuentre involucrado personal policial, son elevados a Secretaría de seguridad, conforme lo previsto por art. 156 de R.G.P.S. que establece: ARTÍCULO 156º.- NOTIFICACIÓN A LA OFICINA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS: La Oficina General de Asuntos Internos deberá ser notificada en forma inmediata de todos los hechos por faltas graves y muy graves y de todos sumarios administrativos que se instruyan en la Policía de la Provincia en donde se investigue la posible existencia de alguno de los supuestos contemplados en el Artículo 53º de la Ley Nº 7.742. En caso que la Oficina General de Asuntos Internos determine que el hecho es de su competencia, se hace cargo de la instrucción del Sumario Administrativo, caso contrario devuelve el expediente a Jefatura de Policía para que las actuaciones se instruyan en ese ámbito.

* 1. DESIGNACIÓN DE ACTUARIO: La designación de actuario la realiza el Jefe de Dependencia, previendo que el instructor sea de mayor jerarquía que el investigado (art. 178). La designación del actuario debe efectuarse dentro del plazo máximo de 24 hs. de recibido el expediente en la dependencia con la orden de instruir el sumario, o de producido una causal de relevo del anterior instructor (cambio de destino, responsabilidad de un funcionario de mayor jerarquía, etc.).
  2. CARATULA: Se debe utilizar el formato de carátula distribuido por la Dirección Investigaciones Administrativas (DGRH). La misma es llenada por el actuario inmediatamente después de su designación como tal.
  3. DECRETO DE AVOCAMIENTO: Al recibir las actuaciones, el instructor debe labrar el decreto de avocamiento, en el que debe hacer constar fecha en que se hace cargo, la que tiene que coincidir con la de designación, (salvo causas justificables, las que deben hacerse constar), y debe proveer las primeras diligencias a realizar (preventivo, fijación de audiencia para la recepción de declaraciones a testigos, etc.).
  4. PREVENTIVO: La iniciación del Sumario se comunica dentro de las 24 hs. a Jefatura, Sub. Jefatura, Dirección de Investigaciones Administrativas (DGRH), , Dirección General y UURR y /o Departamentos a que pertenezca el transgresor. En casos de daños a Bienes del Estado, también se debe comunicar a Dirección Logística (DGAyL). En el parte debe constar número de sumario, calificación legal (que en los sumarios siempre es conforme al art. 190, variando el inciso); nombre, apellido, jerarquía y número de legajo del imputado; como así un breve relato del hecho.
  5. SOLICITUD DE FOJA DE SERVICIO: La foja de servicio se requiere inmediatamente después del preventivo. Los antecedentes contenidos en ella, deben ser tenidos en cuenta la emitir la conclusión en caso de corresponder la aplicación de una sanción disciplinaria, ya sea para agravar o atenuar la pena. En la nota respectiva se debe consignar nº de sumario, calificación legal, jerarquía, nº de legajo, nombre y apellido completo del investigado; como así, en caso de ser pertinente, que se informe los antecedentes relacionados al hecho que se investiga, que obren en el legajo personal del causante (ej. en un sumario por Abandono Servicio, las faltas al servicio que registra y si anteriormente se le instruyó sumario por la misma causal). La foja de servicio es expedida por la División Asuntos Disciplinarios dependiente de la Dirección de Investigaciones Administrativas.
  6. CITACIONES y NOTIFICACIONES. La citación es una comunicación que se cursa a una persona haciéndole saber que debe comparecer a cumplir determinado acto (por ejemplo, a prestar declaración testimonial). El personal policial tiene la obligación de comparecer a las audiencias que se le fijen ya que en caso de incomparecencia injustificada corresponde la aplicación de una sanción disciplinaria. Las notificaciones son aquellas en las que se hace conocer a una persona el contenido de un acto administrativo y por lo tanto deben efectuarse siguiendo los lineamientos establecidos por los arts. 148 y 149 de la Ley de procedimiento Administrativo, pues el acto de notificación es requisito de validez del acto y sirve como comienzo del cómputo del plazo para recurrir. \* El Art. 148 establece que las notificaciones deben contener el texto íntegro del acto, con expresión de la carátula y numeración del expediente correspondiente, lo que es importante tener en cuenta par a la confección de las cédulas. Por su parte el art. 149 nos dice como diligenciar las cédulas, respecto a lo cual cabe instruir al personal designado al efecto, quienes de acuerdo a la citada norma deben realizar lo siguiente: 1º Entregar el original de la cédula a la persona a notificar o en su defecto a cualquier de la casa, 2º hacer firmar la copia, que luego debe ser agregada al expediente, al notificado o persona que recibe la cédula, consignando día, hora, lugar de la entrega, aclaración de firma, número de documento y parentesco con el destinatario en caso de no recibirla personalmente ( es de suma importancia que estos datos figuren en la copia que se agrega al expediente, debiendo corregirse la practica incorrecta de adjuntar constancias en las que sólo obra un firma ilegible) . 3º) De no encontrarse al destinatario y ninguna de las otras personas de la casa quiera recibir la cédula, el notificador debe proceder a fijarla en la puerta de la vivienda, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente, lo que debe certificar con su firma debidamente aclarada. 4°) El procedimiento descripto en el punto anterior, es aplicable para el caso de encontrarse al destinatario y negarse el mismo a recibir y/o firmar la cédula de notificación.
  7. AUDIENCIA PARA LA RECEPCIÓN DE DECLARACIONES: Par la recepción de declaraciones deben fijarse audiencias con suficiente antelación (por lo menos tres días), los que se notificarán por cédula (ver notificaciones). Al personal policial se debe notificar personalmente la cédula en el lugar de revista, y en caso de incomparecencia injustificada, se le impondrá sanción disciplinaria por infracción al art. 293 inc. c), de lo que se dejará constancia en el sumario.
  8. DECLARACIONES DE TESTIGOS: Corresponde que a toda persona que se considere que pueda suministrar noticias o datos que sirvan para la comprobación de los hechos sujetos a investigación, se le reciba Declaración Testimonial, para lo cual el instructor debe actuar con testigos de acto. Para la recepción de Declaración o testigos que no sean miembros de la repartición se deben observar las formalidades que establece el Código Procesal Penal. Consecuentemente los mismos deberán deponer bajo simple promesa de decir verdad, haciéndoseles saber el contenido del art. 275 de Código Penal (el formulario es el mismo que se usa habitualmente en la tramitación de sumarios penales). El personal policial debe ser impuesto de las penas con que el Código Penal (art. 275) y la Reglamentación que sancionan el falso testimonio. Asimismo debe erradicarse la practica perniciosa consistente en hacer que el testigo se ratifique de un anterior informe o declaración prestada en sede judicial y luego cerrar el acta, por cuanto lo correcto es que después de efectuada la ratificación, el actuario interrogue ampliamente al testigo sobre los hechos que sean de interés para el sumario administrativo (los que por lo general no son tenidos en cuenta en sede judicial, donde se investiga un delito penal y en el sumario administrativa se investiga la supuesta comisión de una falta administrativa grave o muy grave).
  9. PERICIAS: La prueba pericial procede cuando para el examen de una persona o para la apreciación de un hecho o de sus circunstancias, se requieran conocimientos especiales de algún arte, ciencia o industria. Las más usuales en la tramitación de sumarios administrativos son las pericias que se utilizan para la comprobación del estado de embriaguez (examen clínico y análisis de alcoholemia), también se pueden practicar pericias caligráficas.
  10. COMPULSA DE LIBRO DE GUARDIA: La compulsa de libros de Guardias permite conocer las circunstancias o hechos que se encuentran registrados en los mismos. Para hacer constar tales actos o hechos, se debe labrar un acta, en la que necesariamente intervendrán el Jefe de Guardia de Turno y el Oficial de Servicio u Cabo de Guardia, debiendo transcribirse textualmente las constancias que resulten útiles al diligenciamiento del sumario. Como complemento del Acta de Compulsa, deben adjuntarse fotocopias certificadas de las páginas del Libro de Guardia donde obren las constancias que guarden relación con el hecho que se investiga; exceptuándose de esta disposición, a aquellas dependencias ubicadas en lugares en los que no haya fotocopiadoras. No es admisible el reemplazo del acta de compulsa por fotocopias, por cuanto en estas no se visualizan las borraduras, raspaduras, etc., lo que si puede detectar el actuario al efectuar la compulsa.
  11. OTROS MEDIOS PROBATORIOS: En caso de ser necesario la Producción de otros medios probatorios (ej. inspección ocular, reconocimiento, informe ambiental, etc.), se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Reglamento de Investigaciones Administrativas de la Provincia y del Código Procesal de la Provincia.
  12. DECLARACIÓN DE DESCARGO: Para la recepción de la declaración debe labrarse un acta, en la que no se le exigirá juramento ni promesa de decir verdad, se le hará conocer los hechos que se le imputan, formular su defensa como así que tiene derecho a ofrecer pruebas y solicitar diligencias y decisiones (Art. 65 de la Ley 6.193/83 y 168 de Decreto 1490) Se actúa con testigos de acto. Asimismo, se recomienda que se le requiera al investigado que fije domicilio procesal en el cual se le cursarán las notificaciones que deban practicarse en el sumario (conforme lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo).
  13. PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA OFRECIDA POR EL INVESTIGADO: El actuario debe producir las pruebas que ofrezca el investigado que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho que se investiga, debiendo dejar constancia fundada de las que no se reciban por no estimarla procedente. Al respecto el reglamento prevé que la negación a la prueba ofrecida será resuelta por la autoridad que ordeno el sumario sin recurso alguno, lo cual significa que en caso de negarse la producción de una prueba el investigado puede interponer recurso que será resuelto por la autoridad que ordenó la instrucción del sumario, cuya decisión es irrecurrible.
  14. CONCLUSIÓN DEL SUMARIO: VISTA DEL SUMARIO y ALEGATOS: Luego de concluido el sumario el instructor correr vista al sumariado para que formule alegatos en el plazo perentorio de 3 días (art. 199). El alegato es un análisis que se hace sobre el mérito de la prueba producida.
  15. INFORME CONCLUSIVO: Vencido el plazo para presentar alegatos, el instructor deberá emitir un informe que deberá contener: a) La relación circunstanciada de los hechos que dieron origen al sumario. b) Una relación sucinta de las pruebas del sumario con indicación de la foja en que se encuentra cada una de las piezas. c) La individualización del o de los responsables del hecho investigado, la valoración de su conducta y la imputación de los hechos. d) La opinión fundada sobre la resolución que a su juicio corresponde dictar, junto a las disposiciones normativas que han resultado infringidas (art. 200). En esta oportunidad deberá confeccionar también un ÍNDICE de las diligencias cumplidas, en el que se debe consignar de manera destacada si existen o no medidas preventivas (art. 198). El mismo va en la primer foja, sin numerar.
  16. DICTAMEN JURÍDICO: Una vez concluido el sumario se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídico para la emisión del dictamen jurídico previsto en Art. 201 del Reglamento General de Policía, donde debe expedirse sobre: a) la legalidad del proceso, es decir si se cumplieron con las disposiciones procedimentales en especial si se garantizó el derecho de defensa en juicio del investigado; b) las faltas disciplinarias comprobadas y su gravedad; c) la responsabilidad de cada uno de los investigados, aconsejando la sanción a aplicar a los mismos.
  17. RESOLUCIÓN: Con el dictamen jurídico de DGAJ, el sumario es Resuelto por el Sr. Jefe de Policía con la asistencia de la Dirección de Investigaciones Administrativas (DIA). En caso de corresponder aplicación de sanción de Destitución, se elevan las actuaciones solicitando la aplicación de esta medida al P. E. Provincial a través de S. S. y M. S.- En caso que el Sumario Administrativo sea instruido por la Oficina General de Asuntos Internos, la Resolución respectiva es dictada por el Sr. Secretario de Seguridad de la Provincia.
  18. NOTIFICACIÓN: Luego de dictado el Acto Administrativo (Resolución J. P. o Decreto de P. E. Provincial aplicando sanción de Destitución), se notifica al investigado. En caso que el investigado resulte sancionado, tiene3 días hábiles para interponer recurso. cuando la Resolución es dictada por el Sr. Jefe de Policía (Arts. 217 R. G. P. S). Para los casos en que la Resolución es dictada por Secretaría de Seguridad, Ministerio de Seguridad o Poder Ejecutivo, los recursos y plazos para interponerlos se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (Art. 215 inc. d) R.G.P.S.).

**Derecho del Investigado de pasar vista a las actuaciones:**

El personal policial investigado en un Sumario Administrativo o sus letrados tienen derecho a pasar vista de las actuaciones, sin necesidad de presentación de nota. Al respecto los artículos 139 y 140 de Ley 5348 de Procedimiento Administrativo de la Provincia, que se aplica supletoriamente, establecen claramente que la vista debe conceder ante el simple requerimiento verbal del interesado (que en este caso es el investigado en el sumario administrativo). Se transcriben los referidos arts. de Ley 5348.

Artículo 139.- Los interesados en un procedimiento administrativo, y sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación y a tomar vista de sus actuaciones, sin necesidad de una resolución expresa al efecto.

Artículo 140.- La vista de las actuaciones se hará en todos los casos informalmente, ante la simple solicitud verbal del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al momento de ser requerido; no corresponderá enviar las actuaciones a la mesa de entradas para ello. El funcionario interviniente podrá pedirle la acreditación de su identidad, cuando ésta no le constare, y deberá facilitarse el expediente para su revisación, lectura, copiado o fotocopiado de cualquier parte del mismo.

**Situación del Personal Policial que se encuentra acusado por comisión de delito relacionado con el servicio**:

**Iniciación de causa penal:**

Al personal policial involucrado en una causa penal relacionada con el servicio se le inicia una causa penal. Si la causa es por un delito que implique Violación de los Derechos Humanos, la Investigación Penal Preparatoria estará a cargo del Fiscal de Derechos Humanos.

**Iniciación de Sumario Administrativo:**

Paralelamente a la causa penal, en la faz administrativa se inicia la instrucción de un Sumario Administrativo, el que por lo general es instruido en la Oficina de Asuntos Internos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Seguridad.

**Competencia de la Oficina General de Asuntos Internos:**

La Oficina General de Asuntos Internos está prevista en arts. 53 y sgtes. de la Ley 7742/12 que establecen:

Artículo 53.- La Oficina General de Asuntos Internos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Seguridad y tendrá por objeto la **prevención, identificación, investigación y sanción de aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal con estado policial** que se desempeña en la Policía de la Provincia, que **puedan constituir delitos, contravenciones, faltan éticas, abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes, y toda violación a los Derechos Humanos** ejercida en detrimento de cualquier persona, dando intervención a la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, toda vez que corresponda.

Artículo 55.- La Oficina General de Asuntos Internos tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

1. Requerir de cualquier organismo todas las actuaciones e información vinculadas con episodios protagonizados por integrantes de la Policía, que sean necesarias para evaluar y detectar las conductas que pudieran provocar las irregularidades detalladas en el artículo 53.
2. Establecer mecanismos de procedimiento, con el objeto de mantener la disciplina policial, resguardar el servicio de seguridad pública y determinar rápida y eficazmente las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, respetando las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
3. Propiciar acuerdos y convenios con otros organismos, tendientes a la capacitación y al intercambio de información sobre la materia de su competencia.
4. Recibir denuncias de las Organizaciones Civiles.

La instrucción de los sumarios administrativo en el ámbito de la Secretaría de Seguridad se rige por el procedimiento establecido en el Reglamento General de la Policía de Salta, que es el que se expuso precedentemente. El instructor y Asesor Jurídico es un personal civil ajeno a la Institución Policial conforme lo establecido en la Ley 7742. La Resolución es dictada por el Sr. Secretario de Seguridad de la Provincia. En caso de corresponder Destitución por Cesantía o Exoneración esta es dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia.

**Derecho de defensa material y técnico en el procedimiento administrativo disciplinario**

El derecho de defensa en juicio en sede administrativa se encuentra garantizado en art. 168 de Decreto 1490 (Reglamento General de Policía), que establece:

**Obligaciones y Garantías**

ARTÍCULO 168º.- DERECHO DE DEFENSA - PRUEBAS: En las informaciones sumarias y sumarios no podrá aplicarse ni solicitarse ninguna sanción sin previamente otorgar al acusado la posibilidad de formular una declaración de descargo, en donde se le harán conocer los hechos que se le imputan, pudiendo formular su defensa y ofrecer pruebas. La instrucción recibirá por escrito todas las pruebas aportadas u ofrecidas, produciendo las que considere útiles y pertinentes. La negación a la prueba ofrecida será resuelta por la autoridad que ordenó el sumario, sin recurso alguno.

En el sumario administrativo el investigado ejercita su derecho de defensa en juicio al realizar su Declaración de Descargo, oportunidad en la que puede exponer todos los hechos que hagan a su defensa y a ofrecer pruebas a su favor. En dicha oportunidad puede también designar a un abogado para que lo defienda, conforme art. 169 que establece:

ARTÍCULO 169º.- DEFENSOR: El investigado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula. A la declaración de descargo podrá asistir su defensor, debiendo ser informado de este derecho antes de todo interrogatorio, pero podrá declarar en ausencia de éste siempre que manifestare expresamente su voluntad en tal sentido. La designación del profesional para que lo represente deberá realizarse en las formas prescriptas por la Ley de Procedimientos Administrativos.

En el sumario administrativo también está previsto la VISTA y ALEGATOS en art. 199 que establece:

ARTÍCULO 199º.- VISTA - ALEGATOS: Terminada la instrucción del sumario, el instructor procederá a dar por terminadas las actuaciones y correrá vista al sumariado para que en el plazo perentorio de 3 (tres) días formule su alegato.

En el alegato el investigado o su defensor realiza un análisis de las pruebas producidas en el sumario administrativo y pone de resalto aquellas de eximen o atenúan la responsabilidad del investigado y en base a ello solicita la eximición de responsabilidad o la aplicación de una sanción menor.

En la Policía de Salta no está previsto la designación de un profesional de la Institución para que defienda al personal en las causas administrativas relacionadas con el servicio, por lo que el personal debe contratar a un abogado particular o bien ejercer su propia defensa, lo que puede hacer en razón de que en sede administrativa no se exige un patrocinio letrado obligatorio.

**Consecuencias de la Investigación Penal y Administrativa:**

1. **Situación Pasiva**

Cuando el personal policial es detenido por orden del Juez interviniente, el personal policial pasa a revistar en Situación Pasiva conforme lo prevé el art. 116 Inciso d) de Ley 6193/83 del Personal Policial, percibiendo el 50 % de sus haberes.

El tiempo que la personal revista en situación pasiva no se computa para el ascenso ni para el retiro.

1. **Suspensión preventiva**

Al iniciarse la investigación administrativa de acuerdo a la gravedad de los hechos puede disponerse la Suspensión Preventiva del personal involucrado conforme lo previsto por art. 167 de R.G.P.S., que establece:

ARTÍCULO 167º.- FACULTADES DE LA AUTORIDAD:

*Cuando se considere conveniente para facilitar la investigación, la Jefatura de la Policía de la Provincia o la Secretaría de Seguridad podrán disponer la suspensión preventiva del acusado o del Jefe de dependencia o funcionarios vinculados al hecho investigado, con el alcance previsto en la ley 6.193. La suspensión preventiva en ningún caso tendrá carácter de sanción administrativa, no deberá exceder de treinta (30) días hábiles y podrá ser dejada sin efecto antes de dicho plazo por la misma autoridad que la dispuso, cuando según su apreciación no exista mérito para mantenerla. En aquellos supuestos de hechos que por su gravedad y relevancia afecten el prestigio institucional, la suspensión preventiva podrá mantenerse hasta la finalización del sumario. La facultad de disponer esta última medida será exclusiva de la Secretaría de Seguridad.*

Contra la Resolución que dispone la Suspensión Preventiva puede interponer **RECLAMO** en plazo de diez días hábiles conforme lo previsto por art. 67 de R.G.P.S. que establece:

**ARTÍCULO 67º.- RECLAMOS**: El personal podrá solicitar que se deje sin efecto el procedimiento o decisión que lo perjudique, o se le acuerde lo que legítimamente le corresponde cuando considere: a) Que el Decreto, resolución o disposición Administrativo policial que se aplica, es ilegal, injusto o erróneo. b) Que sea acreedor a que se le declare comprendido en un derecho o beneficio establecido por una prescripción legal o reglamentaria

1. **Inhabilitación para consideración de Junta de Calificaciones y tratamiento Condicional**.

El art. 92 de Ley 6193 establece que el personal imputado de responsabilidad por falta de sumario administrativo en trámite no podrá ascender mientras no concluya la causa con alguna de las siguientes resoluciones:

1. Falta de mérito para su prosecución;
2. Sobreseimiento administrativo;
3. Sanción de no más de siete días de suspensión o treinta idas de arresto, siendo personal subalterno; y
4. Sanción de no más de veinte días de arresto, siendo personal superior.

Por su parte el art. 90 de Ley 6193 y art. 20 Decreto 248 de Ascenso y Eliminaciones del Personal Policial establecen como **causal de inhabilitación para el ascenso**:

**Inc. e).** Hallarse bajo sumario administrativo no resuelto.

**Si el sumario está relacionado con el servicio debe ser tratado en forma CONDICIONAL** (art. 27 del decreto 248), esto significa que el personal es tratado por la Junta de Calificación respectiva en forma condicional y en caso de ser clasificado Apto para el Ascenso, lo es en forma Condicional, es decir supeditado a que el sumario concluya con Sobreseimiento administrativo o con sanción de no más de siete días de suspensión o treinta idas de arresto, siendo personal subalterno; y sanción de no más de veinte días de arresto, siendo personal superior (art. 92 Ley 6193).

El art. 42 de Decreto 248 establece que si el personal es considerado Apto para el Ascenso y luego resuelve el Sumario Administrativo le corresponde el Ascenso en forma Retroactiva a la fecha que correspondía su ascenso.

Si resuelve el sumario antes del 31 de diciembre asciende junto con el resto del personal clasificado Apto para el Ascenso.

Si resuelve el sumario luego del 31 de diciembre, es tratado por la Junta de Calificaciones en sesión especial que se reúnen en el mes de marzo de cada año y si esta mantiene calificación y clasificación el personal policial es ascendido con fecha de ascenso retroactiva al 31 de diciembre del año anterior.

La aplicació0n de esta norma es un beneficio para el personal policial que tiene una causa relacionada con el servicio, ya que evita que por dicha causa sea perjudicado en su carrera administrativa.

**D. Retiro obligatorio por antecedentes desfavorables**.

La normativa policial prevé también la eliminación (retiro) del personal policial por antecedentes favorables.

El art. 19 de Decreto 248 considera antecedentes desfavorables:

1. El Personal Superior que en el período analizado haya sobrepasado cuarenta días de arresto, en forma continua o discontinua.
2. El Personal Subalterno que en el período analizado haya sobrepasado sesenta días de arresto, en forma continua o discontinua.

´ Las causales de eliminaciones son analizadas por las juntas de eliminaciones, la que aconseja el retiro obligatorio o la continuidad en servicio del personal sometido a su tratamiento, elevando la nómina al Jefe de Policía, quien realiza la propuesta final al Poder Ejecutivo.

**Recursos contra Resolución que impone sanción disciplinaria**

El sumario administrativo puede terminar con una Resolución que declare al personal policial exento de Responsabilidad Administrativa o bien con la aplicación de una de las sanciones previstas en el Reglamento General de Policía, el cual establece que **"las faltas muy graves se castigan con destitución por cesantía, exoneración o suspensión mayor a quince (15) días"** (art. 105) y que **"Las faltas graves** se reprimen con arresto mayor de treinta (30) días, suspensión mayor de siete (7) días, cesantía o exoneración" (art. 107).

En caso que el personal policial resulte sancionado en el Sumario Administrativo instruido como consecuencia de una intervención policial, este tiene derecho a interponer los siguientes RECURSOS:

.

1.- **Recurso contra Resolución del Sr. Jefe de Policía.**

En este caso el recurso se rige por lo previsto en Arts. 206 y siguientes de R.G.P.S. que establecen:

ARTÍCULO 206º.- DERECHO A RECURRIR: Todo policía a quien se le hubiere impuesto una sanción disciplinaria que considere arbitraria o excesiva en relación a la falta cometida, puede elevar un formal recurso solicitando se modifique o se deje sin efecto la misma.

ARTÍCULO 207º.- OPORTUNIDAD - EFECTOS: El recurso sólo podrá ser formulado una vez que se ha dado comienzo al cumplimiento de la sanción. Su presentación no tiene efecto suspensivo respecto de la sanción impuesta, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden de servicio.

ARTÍCULO 209º.- MODALIDAD DE LA PRESENTACIÓN: El recurso debe ser siempre individual. La interposición colectiva de un recurso se considera falta grave y se sancionará como tal.

ARTÍCULO 211º.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD FORMAL: Para su admisión, todo recurso debe llenar los siguientes requisitos: a) Ser presentado dentro del plazo establecido y dirigido a la instancia correspondiente. b) Expresar los hechos o derechos en que se funda en forma clara y precisa. c) Ser formulado en términos respetuosos que no afecten la autoridad o dignidad del superior que impuso el castigo. En caso de no cumplirse con los requisitos mencionados, el recurso será rechazado por inadmisibilidad formal; sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pudiera corresponder en el caso de infringirse lo dispuesto en el inciso c).

ARTÍCULO 212º.- MOTIVACIÓN - AGRAVIOS: El recurso puede fundarse: a) En disconformidad con la apreciación de los hechos. b) En la calificación legal de los hechos. c) En la graduación del castigo. d) En haberse excedido el superior en las facultades disciplinarias.

ARTÍCULO 217º.- INSTANCIA ORIGINARIA: En aquellos casos en donde la resolución del Jefe de Policía constituya una instancia originaria, podrá interponerse recurso, en el plazo de tres (3) días, quien resuelve previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

2.- **Recurso contra Resolución del Sr. Secretario de Seguridad, Ministro de Seguridad o Gobernador de la Provincia.**

En estos casos conforme lo previsto por art. 215 última parte R.G.P.S., el recurso se rige por lo previsto en la “**Ley de Procedimientos Administrativos”**, que establece:

**RECURSOS ESTABLECIDOS EN LEY N° 5348/78 DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**

**ACLARATORIA**

**ARTICULO 176.-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 74, procede pedir aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. El pedido deberá interponerse dentro del plazo de tres (3) días posteriores a la notificación y resolverse en el mismo término. El pedido de aclaratoria interrumpe los plazos para interponer los recursos o acciones que procedan.

**RECURSO DE REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN**

**ARTICULO 177.-** El recurso de revocatoria o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas que reúnan los requisitos establecidos en el art. 172. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) días, directamente ante el órgano del que emanó la declaración y resuelto por éste sin sustanciación, salvo medidas para mejor proveer, dentro de los diez (10) días de encontrarse el expediente en estado.

**ARTICULO 178.-** Cuando el recurso se deduzca por quien resulta afectado a raíz de un procedimiento en que no intervino o contra una declaración dictada directamente de oficio, podrá ofrecerse prueba de acuerdo con las previsiones de esta Ley. Si la declaración impugnada emanara del Gobernador de la Provincia, o, en su caso, de la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, la decisión que recaiga en el recurso de revocatoria será definitiva y causará estado.

**RECURSO JERÁRQUICO**

**ARTICULO 179.-** El recurso jerárquico procede contra las declaraciones definitivas, o que resuelvan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Para su interposición, a más de los requisitos formales previstos en el art. 175, es requisito previo haber interpuesto el de revocatoria o reconsideración y que éste haya sido denegado o rechazado, cualquiera sea el grado jerárquico del autor. Salvo lo dispuesto en el art. 111. También podrá interponerse si el órgano que debe resolver la revocatoria o reconsideración no se pronuncia dentro del plazo establecido en el art. 177. Todas estas circunstancias deberán acreditarse al interponer el recurso jerárquico: con copia de la resolución denegatoria o del escrito de interposición, para el caso de retardo.

**ARTICULO 180.-** El recurso jerárquico debe interponerse ante el órgano inmediatamente superior al autor del acto recurrido, según el orden jerárquico, en el plazo de diez (10) días contados desde el siguiente al de la notificación de la denegatoria, o rechazo del de revocatoria, o del vencimiento del plazo para resolver ésta.

**ARTICULO 182.-** Si sustanciado el recurso el recurrente no considera satisfecho el derecho subjetivo o interés legítimo que alega lesionado, puede reproducirlo por vía de apelación ante el superior jerárquico inmediato del órgano ante el cual instauró el primero y recorrer así sucesivamente todos los grados de la línea jerárquica hasta llegar al Gobernador de la Provincia, o, en su caso, a la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, **cuya decisión causará estado**. El recurso se presentará directamente, sin necesidad de que sea concedido por el inferior, y en el plazo de diez (10) días, desde que la resolución recurrida fue notificada al interesado.

**Fundamentos de los recursos (Agravios)**

**Conforme lo previsto en Art. 212 de R.G.P.S. El recurso puede fundarse: a) En disconformidad con la apreciación de los hechos. b) En la calificación legal de los hechos. c) En la graduación del castigo. d) En haberse excedido el superior en las facultades disciplinarias**

Asimismo, se puede impugnar la Resolución Sancionatoria por adolecer de vicios que provocan su nulidad. Ello en razón de que la Resolución es un Acto Administrativo y como tal debe ser dictado conforme a las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia que trata del Acto Administrativo, sus elementos, vicios y nulidades establecidas por la citada norma.